

**AVANCES Y RETROCESOS DE LA IZQUIERDA
CONTEMPORÁNEA EN AMÉRICA LATINA**

Tesis de grado para optar al título de

**Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e
Internacionales Contemporáneos**

Presentado por:

JHANY MARCELO MACEDO RIZO

Director:

PIERRE GERSTLÉ

**Universidad Externado de Colombia
Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo
Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo
Bogotá, abril de 2018**

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
i. La llegada reciente de la izquierda al poder en América Latina.....	3
ii. El giro que nunca se dio en Colombia.....	7
Capítulo I. El ascenso de la izquierda en América Latina.....	12
Introducción.....	12
1. La izquierda latinoamericana del siglo XX.....	13
2. El socialismo del siglo XXI: la izquierda llega al poder por la vía electoral.....	23
3. Las izquierdas latinas: semejanzas y diferencias entre países.....	33
Conclusiones preliminares.....	40
Capítulo II. Representación y crítica de la izquierda.....	42
Introducción.....	42
1. ¿Qué es la izquierda hoy? ¿Qué es en América Latina?.....	43
2. Crisis y relegitimación (recesos y continuidades).....	51
3. Bajo las reglas del juego democrático: el esquema gobierno-oposición.....	60
Conclusiones preliminares.....	66
Capítulo III. Colombia y la excepción a la regla.....	69
Introducción.....	69
1. La alternatividad política colombiana.....	70
2. La revolución imposible: guerrillas y resistencia mediática en el siglo XXI.....	79
Conclusiones preliminares.....	89
Conclusiones generales.....	91
Las revoluciones no son permanentes.....	92
¿Quo vadis sinister?.....	94
Bibliografía.....	96

Introducción

i. La llegada reciente de la izquierda al poder en América Latina

En diciembre de 1998 se presentó un hecho de particular importancia en la escena política latinoamericana y cuyo único antecedente databa de casi treinta años atrás. El coronel venezolano en retiro, Hugo Chávez Frías, quien intentara en febrero de 1992 un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez (hecho por el cual estuvo en prisión y fue posteriormente liberado, gracias a una amnistía decretada por el gobierno de Rafael Caldera en 1993)¹, ganó las elecciones presidenciales de su país, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela - PSUV, obteniendo un 56,20 % de los votos. Sin embargo, más allá de la organización política que lo avaló, sus banderas de campaña, fundamentadas básicamente en una crítica feroz a la clase dirigente tradicional de Venezuela, unida al descontento generalizado en la población por los altos niveles de corrupción y los elevados índices de pobreza - a pesar de la importante renta petrolera recaudada por el país con las mayores reservas del mundo - lo catapultaron al Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, a donde llegó entonces por la vía electoral.

Este hecho, además de no poder pasar desapercibido, teniendo en cuenta que un triunfo electoral de organizaciones políticas alternativas a las tradicionales en la segunda mitad del siglo XX sólo había tenido lugar en Chile en 1970², con la victoria de Salvador Allende (derrocado empero en 1973 por el golpe militar de Pinochet)³, iba a ser apenas el comienzo de una tendencia que se extendió a otros países de América Latina y que, en tan sólo siete años, se consolidó como mayoritaria en la región. Así, a la victoria de Chávez en Venezuela, siguieron la de Lula Da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Michelle Bachelet en Chile (2005), Rafael Correa en Ecuador (2006), Evo Morales en Bolivia (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Manuel Zelaya en Honduras (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008), Mauricio Funes en El Salvador (2009) y Ollanta Humala en Perú (2011). Varios de estos presidentes fueron reelegidos de manera inmediata o interrumpida o remplazados por copartidarios suyos, aunque también algunos de ellos o sus sucesores fueron abruptamente cesados en sus cargos. Para principios de 2018 cuatro países de la región mantienen gobiernos de izquierda en ejercicio, los cuales constitucionalmente deben terminar entre ese año y 2020, por lo que la izquierda latinoamericana, protagonista de la primera década del siglo XXI, también habrá tenido un importante papel en la segunda.

¹ El presidente Rafael Caldera concedió amnistía a los militares golpistas como parte de un acuerdo con fuerzas políticas de la izquierda venezolana para que estas apoyaran a su gobierno.

² También podría destacarse el triunfo electoral de Juan Bosch en República Dominicana a finales de 1962, aunque su orientación política fue considerada de corte socialdemócrata y en esencia opositora de la dictadura de Trujillo. Con todo, sólo estuvo en el poder durante siete meses, siendo derrocado por un golpe militar en septiembre de 1963. Tras varios años en el exilio, Bosch regresó a su país e intentó infructuosamente ser presidente, cargo al que se postuló en cinco oportunidades entre 1978 y 1994.

³También en Chile, en 1938, una coalición de agrupaciones de izquierda, el Frente Popular, ganó las elecciones con Pedro Aguirre Cerda, quien murió en 1941 y tras este hecho, el *Frente* se diluyó.

Ahora bien, aunque las victorias electorales fueron alcanzadas por movimientos, partidos o coaliciones alternativas a las organizaciones políticas tradicionales⁴, las agendas de estos gobiernos y sus orientaciones distaron de ser homogéneas. Por el contrario, con el tiempo se vislumbraron dos grandes corrientes: una que puede denominarse radical, que acude a un discurso de exacerbación del nacionalismo, ofrece una fuerte crítica a la economía de mercado, aboga por la integración regional con base en afinidades políticas y asume una posición contestataria frente a la política exterior de Estados Unidos; y otra, más bien moderada, que sostiene un modelo de desarrollo capitalista pero con amplia extensión de programas sociales y mantiene un ambiente de apertura política, tanto a nivel interno como externo. Ambas tendencias, especialmente la primera, además del casi generalizado apego al poder, representado en las reformas constitucionales para permitir las reelecciones inmediatas (y en algunos casos ilimitadas), han sido objeto de críticas por parte de políticos opositores, tecnócratas y algunos sectores de la academia, en términos de manejo de la política macroeconómica, violaciones a los Derechos Humanos, persecución a los opositores y generación de inseguridad jurídica, entre otros reparos.

Ahora bien, son distintos los antecedentes que permitieron la irrupción de este fenómeno, que varían de país a país, teniendo en cuenta que cada uno de ellos alberga condiciones históricas, económicas, sociopolíticas y aun culturales propias, que abonaron el espacio para que se propiciara este cambio en la orientación política de sus gobiernos. Sin embargo, de acuerdo con Ardití⁵, existe una serie de motivaciones estructurales que pueden explicar este ascenso al poder de manera casi simultánea en un buen número de países de América Latina y que se pueden resumir brevemente como sigue:

En primer lugar, un acrecentado desprestigio de las inveteradas clases dirigentes nacionales, representadas en los partidos políticos tradicionales, descrédito derivado, por una parte, de la incapacidad de los gobiernos precedentes para manejar problemas macroeconómicos de sensibilidad para el grueso de la población, en particular el desempleo, la pobreza y la distribución de la riqueza. Estos fenómenos se agudizaron como consecuencia de las políticas de apertura neoliberal, de cuya implementación se culpó a la tecnocracia económica, encarnada por las élites gobernantes en los distintos países. Por otra parte, a la pérdida de credibilidad de la clase política también contribuyeron los escandalosos hechos y cifras de corrupción, que minaron la poca confianza que aún se tenía en los gobernantes y en las instituciones vigentes. Como bien lo señala Ardití, haciendo alusión al eslogan de las protestas en Argentina a finales de 2001, “(El ‘que se vayan todos’) era más bien un *j'accuse* colectivo dirigido a una clase política que fue incapaz de remediar la miseria resultante de las privatizaciones y políticas de ajuste de la década de 1990”⁶.

⁴ Por partido o movimiento político tradicional se entenderá aquella agrupación que ha ejercido el poder de manera hegemónica durante uno o varios periodos (sucesivos o interrumpidos) en un país de la región y cuyo discurso se fundamenta en una defensa del *status quo*. Entretanto, el partido alternativo sería aquel que si bien puede haber sido parte de la lógica electoral de su respectivo país, no había logrado trascender del rol de oposición al de gobierno a nivel nacional, cuyas tesis abogan por un modelo político y económico distinto del vigente y que por lo general recoge sectores sociales históricamente excluidos.

⁵ Ver: Ardití, Benjamín, “El giro a la izquierda en América Latina, ¿una política post-liberal?” en: *Ciencias Sociales Unisinos* 45(3), septiembre-diciembre 2009, pp. 232-246.

⁶ *Ibid.*, p. 235.

En segundo lugar, la percepción generalizada de los efectos negativos acarreados por la política de apertura económica, que desfiguró la confianza en el papel económico del Estado para en su lugar instalar un modelo dominado por la inversión extranjera, la banca privada y la expansión del comercio internacional. Sin embargo, “las cosas tampoco salieron como las esperaban los propulsores de políticas neoliberales. Ya para mediados de la década de 1990 las certezas de la hoja de ruta trazada por el consenso de Washington estaban siendo reevaluadas a la luz de las promesas incumplidas en materia de empoderamiento y bienestar económico”⁷. Así, a la sistemática pérdida de empleos que se tradujo, por un lado, en mayor porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, y por otro, en el aumento correlativo de la criminalidad y la inseguridad en las ciudades, se sumó una elevada concentración de la riqueza, representada tanto en capital como en tierra, en manos de capitalistas y terratenientes, en detrimento de las clases medias, que sufrieron un proceso de pauperización.

En tercer lugar, la utilización estratégica de la democracia como un simple medio legitimador del sistema político y de sus clases dirigentes, circunscrita al reducido espacio de las elecciones periódicas. Esta visión del ejercicio democrático favoreció no sólo la manutención de las estructuras clientelistas de los partidos tradicionales, sino que cerró amplias esferas de participación ciudadana, por lo que el grueso de la población no contaba con representación dentro de las instituciones estatales, las cuales se asumieron como espacios excluyentes cooptados por una clase política, la cual actuaba de espaldas a los intereses de la nación y se movilizaba únicamente en causa propia.

En cuarto lugar, “el interés de Estados Unidos por América Latina prácticamente se esfumó después del septiembre de 2001”⁸, lo cual repercutió en dos sentidos particulares: de un lado, se presentó un retroceso en la acostumbrada política del hegemón frente al subcontinente, en la que se persiguió siempre la afinidad política y la contención a amenazas externas, tales como el comunismo o el narcotráfico. Con la atención puesta en Medio Oriente, América Latina perdió la “presión” que generaba el gobierno norteamericano para que en ella hubiera siempre gobiernos afines a sus intereses. De otro lado, ese mismo desinterés evidenció la actitud utilitarista de Estados Unidos frente a la región y favoreció tanto el fácil acogimiento de un discurso “anti-gringo” en la teoría, como una diversificación de las relaciones internacionales, a nivel político y económico, de los países latinoamericanos, en la práctica.

Finalmente, el surgimiento de líderes carismáticos⁹, acompañados por movimientos sociales y/o políticos alternativos, quienes lograron recoger un descontento generalizado y mostrarse, en tanto individuos y con sus propuestas, como la solución a los problemas de pobreza, inequidad, exclusión y corrupción de los que se culpaba a los gobiernos vigentes y a las clases y partidos políticos que los representaban. Estos líderes lograron establecer un modelo de democracia “delegativa”, en el que el presidente encarna la nación por encima de los partidos,

⁷ *Ibíd.*, p. 236.

⁸ *Ibíd.*

⁹ Para Weber, la dominación carismática está determinada por el carisma, entendido como “la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares); de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder”. Weber, Max, *Economía y sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México, 202, p. 193.

reduciendo el espacio para una adecuada rendición de cuentas¹⁰, en relación con otros poderes institucionales del Estado.

Lo llamativo de los antecedentes recapitulados es que dieron pie a la victoria electoral de líderes y movimientos políticos alternativos, que aunque bien pudieron pertenecer a otras dimensiones del espectro político, en particular al centro, fueron todos ellos identificados (y en algunos casos autodenominados) como de izquierda, tanto por sus opositores políticos, como por los medios masivos de comunicación y en algunos casos por la misma academia. En este punto hay que valorar el hecho de que todos estos gobiernos hayan sido elegidos democráticamente, es decir, por obra del voto popular, y aunque en algunos de ellos las mayorías no han sido absolutas, sí han contado con el respaldo popular suficiente para acceder y mantenerse en el gobierno.

La razón por la cual el electorado dio un salto al otro extremo de la oferta política se podría explicar, no sólo en el repudio que la clase dirigente, simbólicamente asociada con la derecha, tenía en cada uno de estos países, sino también en el hecho de que las fuerzas políticas alternativas supieron mostrarse como novedosas a partir de la consecución de un discurso atractivo, que se vislumbraba como esperanzador en medio de los problemas que atacaban a las sociedades en juego, y por la presentación de propuestas, que por ser distintas y hasta contrarias a las acostumbradas respuestas del establecimiento, generaron grandes expectativas entre los habitantes. Dabène sostiene que en parte los triunfos de la izquierda se explican en un masivo voto “irresponsable” (que el autor denomina voto “contra” la democracia), motivado por las frustraciones del mal desempeño económico y el sentimiento de exclusión, ambos fenómenos endilgados a la política tradicional. Por ello señala que “los electores latinoamericanos parecen balancearse entre dos tipos de comportamientos, que traen riesgos para la estabilidad de la democracia. Uno aprehende el sufragio como una dirección o una interpelación expresando una frustración (*voto bronca*), el otro como una oportunidad de participar en un proceso de identificación colectiva”¹¹.

No obstante, tan pronto se empezaron a implementar las medidas propias de cada administración, comenzó a delinearse una diferencia cualitativa entre los distintos gobiernos alternativos de América Latina. En términos generales, como ya se anunció, puede hablarse de la existencia de dos tipos de izquierda en el subcontinente: por una parte, la *radical-populista*, surgida en países con una institucionalidad débil y al abrigo de liderazgos caudillistas que han llevado a fondo un proyecto político alternativo, lo cual implica acciones como nacionalización de empresas, expropiaciones, fuerte control de la política cambiaria, restricción al capital privado y extranjero, control a los bienes de consumo, entre otros. Esta izquierda “mala” de acuerdo con la clasificación ofrecida por Castañeda¹², ha incurrido en prácticas *non sanctas* de persecución a la oposición, una vigilancia exagerada a los medios de comunicación y violaciones a otros Derechos Humanos. Además, ha llevado a cabo reformas constitucionales dirigidas a concentrar el poder en cabeza del presidente, sin

¹⁰ Sobre el concepto de democracia delegativa, véase: O’Donell, Guillermo, *Delegative Democracy*, University of Notre Dame, Kellogg Institute, working paper No. 172, March 1992.

¹¹ Dabène, Olivier, “Les élections contre la démocratie? L’année 2006 en perspective”, en: *Amérique Latine, les élections contre la démocratie?*, Sciences Po, Paris, 2007, p. 33.

¹² Castañeda, Jorge, “Latin America’s Left Turn”, en: *Foreign Affairs* 85(3), 2006, p.32.

mencionar las decisiones de política macroeconómica de carácter contestatario, medidas todas estas que han servido de fundamento a las críticas presentadas contra la izquierda latinoamericana en general.

Por otra parte, se encuentra la izquierda *moderada o socialdemócrata*, que es más flexible frente a cuestiones como el modelo de desarrollo, la economía de mercado, el pragmatismo en las relaciones internacionales y la apertura a la participación política de la oposición. Sin embargo, ello no obsta para que el enfoque de sus gobiernos no sea la ampliación y garantía de las políticas sociales, con una importante intervención del Estado. En algunos países, como Uruguay, este modelo ha contribuido también a una “liberalización” de la sociedad, gracias al impulso de iniciativas de avanzada en materia de derechos civiles¹³.

Más allá de los beneficios o las dificultades que hubieran suscitado tales gobiernos, llama la atención el hecho de que Colombia haya sido ajena a este fenómeno, lo cual debe encontrar explicación en circunstancias históricas o sociopolíticas particulares que han impedido la emergencia efectiva de esta alternativa, pues si se acude a los criterios expuestos por Ardití, también en este país existían las condiciones para que la izquierda llegara al poder presidencial.

ii. El giro que nunca se dio en Colombia

La revisión previa, que busca dar cuenta preliminar de un fenómeno en apariencia reciente, denominado izquierda latinoamericana, con breve alusión a algunas de sus características, oposiciones teóricas, mecanismos de acción y elementos tipológicos, suscita el interés para profundizar en su análisis para determinar qué la hizo posible, es decir, busca responder a la pregunta: ¿cuáles fueron los antecedentes que permitieron el ascenso de la izquierda al poder presidencial¹⁴ en distintos países de la región, por la vía electoral, teniendo todos ellos diferencias considerables en cuanto a la constitución de su matriz sociopolítica¹⁵ y de su política económica?. Así mismo, sería interesante auscultar si la estigmatización que ha tenido la izquierda latinoamericana en general, y la populista-radical en particular, tiene sólidos fundamentos, por lo que se torna necesario revisar la plausibilidad de las críticas que se le han puesto de presente, relacionadas en especial con el manejo de la política macroeconómica, las violaciones a Derechos Humanos y la concentración del poder, entre otras. Por último, a manera de evidencia contrafáctica, sería dable cuestionarse por qué no se ha dado en otros países de América Latina, como Colombia, si quizá guardan algunos elementos en común con los que ya han experimentado gobiernos izquierdistas. Así las cosas, estas preguntas constituyen la problemática del presente trabajo.

¹³ Ejemplos de estas iniciativas son las reformas que permitieron la despenalización del aborto y de la comercialización de la marihuana.

¹⁴ Es importante subrayar que la noción de poder a la que se hace referencia en el presente trabajo se limita al triunfo en una elección presidencial, con base en lo cual se afirma que en los últimos veinte años varios partidos, movimientos o candidatos alternativos llegaron al poder.

¹⁵ Manuel Garretón define la matriz sociopolítica o matriz constituyente de la sociedad y los actores sociales como “las relaciones entre Estado, política o sistema de representación y mediación, y sociedad civil o base social, articuladas en términos institucionales por el régimen político”. Garretón, Manuel, “Reforma del Estado y cambio en la matriz sociopolítica”, en: *Hacia una nueva era política. Estudios sobre las democratizaciones*, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1995, p. 200.

En el caso colombiano, la existencia de procesos históricos particulares, además de condiciones propias de la sociedad colombiana, como la permanencia de una guerrilla armada por más de cincuenta años, con un considerable pie de fuerza, influencia en numerosos apartes del territorio nacional y capacidad operativa constante, pueden brindar luces acerca de la imposibilidad de acceso al poder que ha tenido la izquierda en Colombia. A ello se podría añadir la proliferación de organizaciones de extrema derecha, como el paramilitarismo que desde mediados de los años 80 irrumpió en la escena del conflicto y que en algunos casos fue legitimado (e incluso apoyado) por el establecimiento, atacando sistemáticamente a personas y organizaciones izquierdistas; o la permanente estigmatización del discurso y de las propuestas políticas alternativas por parte de los medios masivos de comunicación.

Empero, haciendo de lado estas apreciaciones preliminares, bien vale la pena preguntarse a qué se debe esa imposibilidad histórica y que aún en prospectiva luce bastante improbable, si se comparte con otros países de la región condiciones que en ellos sí facilitaron ese ascenso. Por otra parte, tomando en consideración los principales reproches que se le han hecho a la izquierda latinoamericana, resulta imprescindible preguntarse por la veracidad de esas críticas a fin de determinar cuáles han sido las equivocaciones reales de la izquierda en América Latina. De manera que esas tres inquietudes generales, referentes al proceso de ascenso de la izquierda en la región, la revisión de las críticas que ha recibido con una necesaria evaluación de los logros y fracasos de estos gobiernos alternativos, y el estudio del caso colombiano en particular, guiarán el contenido del trabajo.

A manera de hipótesis, si Colombia comparte con otros países de América Latina los mismos antecedentes que en ellos permitieron el triunfo electoral de la izquierda en comicios presidenciales, es dable pensar que los motivos que lo han impedido aquí se derivan de condiciones nacionales particulares. Es por esto que se sostendrá que ese elemento diferenciador es la existencia de una guerrilla radical, que durante cincuenta y dos años estuvo alzada en armas contra el Estado (en referencia a las FARC, haciendo claridad que la guerrilla del ELN sigue activa), lo que ha generado en el imaginario colectivo una identificación de la izquierda con la violencia guerrillera y a la asimilación de todo militante de izquierda, aun cuando opte por el camino democrático, como simpatizante, auxiliador o aliado de esa guerrilla. No obstante, con independencia de la orientación política, la estigmatización se extiende a todos los discursos, estudios, movimientos políticos y/o sociales y profesionales académicos que sean alternativos, aunque no sean de izquierda propiamente dicha, por lo que las posibilidades reales a nivel nacional de una opción política diferente son bastante reducidas.

Como complemento a la hipótesis presentada, cabría agregar que dicha estigmatización no ha sido sólo discursiva, sino también mediática, por las constantes críticas a los gobiernos regionales dentro del país, conquistados por movimientos o partidos alternativos, las cuales son realizadas por los medios masivos de comunicación, al igual que la resonancia permanente que se hace de las críticas a los gobiernos izquierdistas de otros países de la región, en especial Venezuela. De igual manera, se debe anotar que esa “satanización” también se ha expresado de manera violenta, a través del accionar de grupos armados de extrema derecha, que han atacado sistemáticamente a los sectores alternativos. De modo que, a pesar de compartir procesos históricos similares con sus vecinos, en Colombia han existido

circunstancias propias que han impedido el ascenso de la izquierda al poder nacional y cuya desaparición no garantizará por sí sola que aquella emerja como una posibilidad latente en el futuro cercano.

Ahora bien, con el fin de llevar a feliz término los propósitos del presente trabajo, se realizó una revisión bibliográfica intensiva de las fuentes, tanto primarias, v.g. trabajos históricos, estadísticas e informes, como secundarias, fundamentalmente escritos teóricos, que han tratado el tema de los gobiernos recientes de izquierda en América Latina. Con miras a alcanzar el propósito planteado, se procedió a realizar una exhaustiva búsqueda de material bibliográfico en bibliotecas especializadas, así como en internet (web en general y bases de datos) a partir de referencias sugeridas o hallazgos propios, aunque vale la pena señalar que buena parte de esta revisión se llevó a cabo en Turquía, donde a menudo resulta complicado encontrar información sobre América Latina y aún el acceso a contenido en internet es bastante restringido. Igualmente, se trató de recoger el mayor material empírico de comprobación de la hipótesis planteada, tanto en el sentido de las causas explicativas de su ascenso, como de las críticas recurrentes a su mantenimiento.

El fenómeno de la izquierda democráticamente elegida en América Latina es relativamente reciente, y a pesar de contar ya con una importante literatura dedicada a su estudio, ésta aún dista de ser abundante. En todo caso, el análisis de los antecedentes, las características, los protagonistas, las consecuencias y las posibilidades de este interesante proceso, por mantenerse vigente y, en apariencia, gozar de la fuerza suficiente para conservarse todavía durante un tiempo, hacen que este sea un tema llamado a seguir siendo revisado. En el presente trabajo se busca, no obstante, avanzar un poco más en relación con los estudios ya realizados sobre este asunto, evitando caer en los lugares comunes que se acostumbra desde la academia o la prensa. Y el elemento distintivo estará en la búsqueda de aquellos rasgos compartidos por los países que han tenido gobiernos de izquierda en la región, tendiente a identificar, de manera general y en términos explicativos, los motivos que permitieron su ascenso al poder en esos lugares y, *contrario sensu*, los que han impedido que se presente en otros sitios, a pesar de tener aspectos en común con países con gobiernos alternativos.

El tema que se trae a discusión busca igualmente responder a las preocupaciones generadas por la proliferación de gobiernos de izquierda en América Latina, gracias a un análisis pormenorizado de las críticas que se le han hecho, relacionadas principalmente con el manejo de la política macroeconómica, que algunos han tildado de irresponsable o populista, lo cual, como se tratará de mostrar con base en estadísticas en su momento, no resulta del todo cierto, sino que en su mayoría, estos gobiernos en realidad han sido estrictos en el manejo de las finanzas públicas, y el porcentaje de gasto social, en realidad, no es tan elevado como se cree¹⁶. De allí que haya sido necesario hacer uso de herramientas económicas, a manera de tamiz de los modelos alternativos de desarrollo planteados (y discutir si estos han sido implementados o no) y de las medidas de macroeconomía que suponen su puesta en marcha. En el mismo sentido, se acudió a conceptos jurídicos que permitieron escudriñar en los reproches que se les hacen en materia de Derechos Humanos, y de ciencia política, para analizar los marcos constitucionales delineados a partir de su llegada al poder, debatir si este último ha sido concentrado en sus presidentes y examinar en términos generales la

¹⁶ Ver: infra., p. 54 y ss.

orientación ideológica de estos gobiernos y el contenido de sus políticas públicas. Finalmente, fue indispensable incurrir en instrumentos de relaciones internacionales, para observar los procesos de integración regional, como el ALBA, y en general, la política exterior que han desplegado las administraciones de izquierda en la región.

Llevar a cabo un nuevo estudio sobre la izquierda latinoamericana desde las perspectivas planteadas (elementos configurativos de ascenso y ejercicio del poder + revisión de las críticas + rasgos distintivos del caso colombiano) sin duda contribuirá a construir una perspectiva integral sobre estos gobiernos y a contar con elementos de análisis descriptivo y crítico acerca de este fenómeno dominante en buena parte de los países vecinos de Colombia, que ilustren, por una parte, las razones de los intentos fallidos de la izquierda aquí, y por otra, los errores que se han cometido en otros lugares, con el fin de evitarlos si es que algún día en nuestro país llega al poder presidencial.

Finalmente, valga indicar que el trabajo se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se revisa el ascenso de la izquierda en diferentes países de América Latina, para lo cual se examinan, en primer lugar, los antecedentes generales de la izquierda latinoamericana durante el siglo XX. En segundo lugar, se repasan las circunstancias que dieron lugar al encumbramiento de la izquierda por la vía electoral en diferentes países durante la primera década del siglo XXI. No obstante la revisión de casos particulares, se lleva a cabo un análisis paralelo que permite la identificación de elementos compartidos, a partir de los cuales se realiza, en tercer lugar, una recopilación y desentrañamiento de esos aspectos en común, con el fin de establecer la consolidación de una tendencia política. Este primer apartado del texto se propone como un estado del arte de la cuestión, tratando de recopilar la literatura más relevante sobre el proceso de ascenso y caracterización de la izquierda latinoamericana reciente.

Por su parte, el segundo capítulo pretende servir de marco teórico, primero, a través de una disquisición sobre el significado de la izquierda hoy en día, tanto desde una perspectiva prescriptiva por el que la previsión semántica permite describir como izquierdistas estos gobiernos alternativos en América Latina, como desde un punto de vista constructorista, por el que entonces los hechos históricos que han caracterizado a tales regímenes dan pie a configurar una teoría acerca de lo que debe entenderse por izquierda latinoamericana en la actualidad. A primera vista, parece que la dualidad categórica tradicional (izquierda-derecha) resultará insuficiente para dar cuenta de este fenómeno, cuyo aparente decaimiento en la región también será objeto de revisión en este capítulo. Así, se hará una inspección exhaustiva de las principales críticas que le han opuesto, en especial las relacionadas con el manejo de la política macroeconómica, las violaciones a los Derechos Humanos y la concentración del poder en manos del presidente. Luego se hará énfasis en los avances y retrocesos que han tenido estos gobiernos alternativos, mostrando los principales logros de carácter social, así como las más importantes equivocaciones y/o dificultades en la implementación de sus políticas, resaltando también las crisis primordiales durante la vigencia de la izquierda latinoamericana. Como último acápite, se llevará a cabo una discusión sobre la importancia de que estas llegadas al poder hayan sido por la vía democrática, pues esta somete a los movimientos de izquierda a la lógica electoral de gobierno-oposición, lo cual repercute no sólo en la necesidad de transformar su vocación histórica como simplemente crítica y opositora a los gobiernos de turno y sus políticas, sino

que también marcan una necesaria temporalidad en su vigencia, la cual deviene por tanto cíclica.

En el tercer capítulo, que busca servir de comprobación empírica, se buscará, con fundamento en el recuento y caracterización del fenómeno junto con los antecedentes teóricos expuestos y la recopilación de sus logros y fracasos en otras latitudes, analizar el caso de Colombia y responder a la inquietud planteada sobre la imposibilidad histórica de la izquierda de acceder al poder presidencial aquí. Para el efecto se examinarán primero, en forma general, las experiencias de movimientos políticos alternativos en el país durante el siglo XX y los primeros dieciséis años del nuevo milenio, con el fin de revisar lo que ha sido el fenómeno de la izquierda colombiana. Luego, se tratará de ahondar en los elementos distintivos anunciados hipotéticamente como los que hacen el proceso colombiano diferente frente a los de sus vecinos, a pesar de compartir con ellos otras importantes características, y que son en últimas, los que restan posibilidades reales y materiales de ascenso al poder.

A manera de cierre, se recogerán los resultados finales de la investigación, los cuales se describirán en un acápite de conclusiones, en el que se indicará si se alcanzaron o no los objetivos planteados para el escrito y si la hipótesis pudo ser comprobada. Al final se tratará de hacer un análisis prospectivo para la misma, arriesgando posibilidades de vigencia en los lugares donde ya gobierna, o de ascenso en países en donde ya se ha experimentado o ni siquiera se ha presentado, en este último caso, como Colombia.

Capítulo I

El ascenso de la izquierda en América Latina

Introducción

Sin pretender recabar excesivamente en las representaciones sobre la llegada de la izquierda al poder presidencial en América Latina durante los últimos dieciocho años, este es un proceso que merece ser descrito. Primero, porque se trata de un fenómeno de muy extraña ocurrencia durante el siglo XX, y además, por las repercusiones que ha tenido, no sólo en los países en los que se han instalado gobiernos de distinta orientación política a las tradicionales, sino también por el efecto que ha irradiado en la región en su conjunto - mediante un reacomodamiento de los esquemas de integración y cooperación multilateral - y en especial, sobre la comprensión del sistema democrático.

Sin embargo, la narración del ascenso de los gobiernos alternativos en el subcontinente latinoamericano desde finales de 1998 hasta nuestros días no puede asumirse como un agregado de casos aislados nacionales, pues si bien son casos únicos en casi todos los países, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de experiencia democrática en la región, ello implicaría desconocer que la izquierda dista de ser un evento reciente en esta parte del mundo y que por el contrario ha sido más bien una constante en la vida política de los Estados de América Latina. La diferencia radica en que ha podido hacerse al poder presidencial en años recientes, como nunca había sucedido, con la excepción del triunfo de Salvador Allende en las elecciones chilenas de 1970 (o la breve mención a Bosch en República Dominicana en 1963).

Es por ello que un recuento de la izquierda reciente en nuestros países no puede llevarse a cabo sin tomar en consideración los precedentes de movimientos y partidos alternativos que se presenciaron en los mismos, al igual que debe hacerse referencia obligada a algunos importantes exponentes del pensamiento político latinoamericano que, sin proponérselo, podrían ser clasificados en esa orilla del espectro político. Así, por ejemplo, la coalición *Unión Popular* que llevó al poder a Allende, el ascenso y las repercusiones de la Revolución Cubana, que suscitaron una proliferación de insurgencia armada en muchos países de la región, o la alusión a las tesis de José Carlos Mariátegui¹⁷, deben tener lugar en esta reconstrucción con el fin de obtener una mejor comprensión del ascenso señalado. A esta tarea se dedicará el primer acápite del presente capítulo.

Con todo, las herramientas que esta recapitulación ha de ofrecer al trabajo están orientadas a dotar de comprensión la inusitada conquista, por la vía electoral, del poder presidencial por parte de movimientos de izquierda, que en cada país en particular obedeció a dinámicas específicas, aunque pueden identificarse algunos elementos comunes en la mayoría de ellos. El punto de partida es el triunfo de Chávez en diciembre de 1998, luego del cual sobrevinieron múltiples victorias eleccionarias en países vecinos y que aún hoy en día persisten en varios de ellos, incluso con recientes procesos de revalidación. La descripción de estos acontecimientos esencialmente electorales será el propósito del segundo apartado.

¹⁷ Mariátegui, José Carlos, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Editora Amauta S.A., Lima, Perú, 1996.

En la tercera parte del capítulo se buscará apuntalar una recopilación y desentrañamiento de esos aspectos en común, en aras de establecer la consolidación de una tendencia política. El giro a la izquierda, que también ha sido denominado “marea rosa”¹⁸, obedece a unos parámetros similares en los diferentes países a donde llegó, con los rasgos particulares que en cada uno de ellos le precedieron y luego, en el ejercicio del poder, le han definido. Empero estas disonancias singulares, es posible hallar unos ejes temáticos e históricos comunes, así como identificar distintas categorías dentro del movimiento que, como ya se ha anticipado, permite clasificar la izquierda latinoamericana entre una de corte populista-radical y otra de tintes progresistas y moderados.

Este primer apartado del texto se propone entonces como un estado del arte de la cuestión, tratando de recopilar la literatura más relevante sobre el proceso de ascenso y caracterización de la izquierda latinoamericana reciente, que permita recabar sobre sus antecedentes, describir sus dinámicas de acceso al poder y ensayar una tipología sobre los gobiernos que han predominado en la escena del subcontinente durante los primeros dieciséis años del siglo XXI, bien que se encuentren vigentes o hayan sido superados.

1. La izquierda latinoamericana del siglo XX

Resulta difícil rastrear los antecedentes de la izquierda latinoamericana en el siglo XX. Algunos pensadores ganan mayor relevancia por haber influenciado o inspirado movimientos políticos en sus países, como el caso de Farabundo Martí en El Salvador, Augusto Sandino en Nicaragua o José Carlos Mariátegui en el Perú. Otros como Rafael Uribe Uribe pasarían a la historia más como defensores de principios liberales que como hombres públicos comprometidos con un discurso radical. Y hay unos más que simplemente han caído en el olvido o son víctimas de la falta de difusión de su obra, por lo que sus nombres no generan mayor referencia. Este podría ser el caso de Salvador de la Plaza o Rubén Martínez Villena.

No cabe duda que ya desde finales del siglo XIX la influencia del marxismo, que había sido fecundo en teoría y para 1917 tuvo una réplica en la realidad representada por el triunfo de la revolución bolchevique, marcó buena parte de lo que serían las ideas de izquierda también en la región latinoamericana. De allí que la reivindicación del socialismo, en términos generales, pueda asimilarse a una orientación política en este sentido. Así las cosas, entre los forjadores de una doctrina izquierdista en América Latina podría nombrarse, en primer lugar, a Mariátegui.

¹⁸ El término “Marea rosa” fue acuñado por el periodista del New York Times, Larry Rother, para referir el primer triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay y en general, el auge de gobiernos de izquierda en la región a principios del siglo XXI, indicando que representaba, no una versión socialista radical, sino más bien una propuesta progresista moderada. En tal sentido señaló: “Ellos no son tanto una marea roja como una marea rosa. El socialismo doctrinario lleva el día menos lejos que el pragmatismo, un cambio importante en el tono y la política que hace este momento político decididamente nuevo”. Rother, Larry, “With New Chief, Uruguay Veers Left, in a Latin Pattern”, en: The New York Times, 1 de marzo de 2005. Disponible en: http://www.nytimes.com/2005/03/01/world/americas/with-new-chief-uruguay-veers-left-in-a-latin-pattern.html?_r=0

En sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*¹⁹, publicados por primera vez en 1928, Mariátegui busca aplicar la teoría marxista de la historia al Perú, a través del análisis de diferentes elementos que considera problemas fundamentales en el proceso de construcción de la sociedad de su país. Así, por ejemplo, revisa el problema de la tierra y la manera como el modo de producción feudal fue introducido de manera incompleta por medio de la colonia, reemplazando una economía agrícola indígena preexistente, que Mariátegui denomina comunista. En este sentido, el problema de la tierra guarda una inescindible relación con la cuestión indígena:

“En lo que concierne al problema indígena, la subordinación al problema de la tierra resulta más absoluta aún, por razones especiales. La raza indígena es una raza de agricultores. (...) La destrucción de esta economía - y por ende de la cultura que se nutría de su savia - es una de las responsabilidades menos discutibles del coloniaje, no por haber constituido la destrucción de las formas autóctonas, sino por no haber traído consigo su sustitución por formas superiores”²⁰.

Así las cosas, para Mariátegui estos problemas interrelacionados tienen fundamento netamente en la economía, por lo que el estudio de la realidad peruana en general, o de la cuestión indígena o agraria en particular, no debe hacerse a la luz de análisis jurídicos, culturales o meramente sociológicos, pues ellos sólo llevarían a discusiones teóricas inútiles, que impiden ver con claridad la esencia del asunto. En este sentido se vislumbra su marcado cariz materialista, fundamentado en un determinismo económico, que persigue romper con la lógica semifeudalista impuesta por la colonia gracias a un restablecimiento del carácter comunitario de la propiedad agraria en el Perú, en la que el indio se constituye en célula primordial de organización social. Por ello sostiene que “la cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales”²¹.

Con todo, la influencia de Mariátegui en la izquierda peruana no fue inmediata, pese a que él mismo participó en la fundación del Partido Socialista en 1928. Es por eso que sus tesis vienen a ser rescatadas ya en los años 60, variando entre tendencias reformistas, como las de Beláunde o el general Velasco, pasando por el Aprismo, y desembocando en posiciones más radicales como las del maoísmo representado en Sendero Luminoso²². A pesar de esto, las diversas interpretaciones de apoyo sólo refuerzan la importancia de su obra en la política peruana en particular y como exponente del pensamiento de izquierda en América Latina, en general.

¹⁹ Mariátegui, *Op. Cit.*

²⁰ *Ibid.*, p. 26.

²¹ *Ibid.*, p. 17.

²² Sobre la influencia de Mariátegui en Abimael Guzmán y los fundadores de Sendero Luminoso, ver: Comisión de la Verdad y Reconciliación, *Informe Final*, Tomo I, Capítulo I, Los actores armados, Lima, 2003, pp. 13-27.

Otro caso interesante es el de Ignacio Torres Giraldo, quien se convertiría en aquello que Gramsci denominaba un intelectual “orgánico”²³, ya que además de aportar ideas y forjar toda una teoría alrededor de la clase trabajadora en Colombia, participó activamente del movimiento sindical de los años 20, de marcada orientación marxista, erigido bajo la influencia de la revolución bolchevique y que tuvo una gran acogida entre la clase trabajadora colombiana.

Luego de colaborar con varios periódicos de izquierda liberal y de fundar y trabajar en un colegio liberal radical durante la década de los 10, en 1919 Torres Giraldo participó del primer congreso del Partido Socialista en Colombia, a lo cual siguieron sus intensas intervenciones en la conformación del Sindicato de Mineros de Valle del Cauca en 1923 y en la creación de la Confederación Obrera Nacional (CON) en 1925, junto a otra importante figura del sindicalismo colombiano de aquella época, María Cano (La “flor del trabajo” de Colombia). Torres Giraldo fue designado secretario general de la naciente organización, la cual adhirió a la Internacional Sindical Roja, en cuya sede, en Moscú, vivió exiliado entre 1929 y 1934, luego de ser apresado varias veces como consecuencia de su militancia sindical, la cual lo llevó a dirigir numerosas manifestaciones y huelgas de trabajadores agrícolas y petroleros²⁴. Al regresar a Colombia se unió al Partido Comunista, al que perteneció hasta finales de la década de los 40, cuando se retiró para dedicarse al trabajo intelectual.

Precisamente de esta época es su reconocida obra *Los inconformes*²⁵, publicada por primera vez en 1955. En ella, Torres Giraldo intenta una reconstrucción histórica del movimiento obrero colombiano desde la Colonia, pasando por la insurrección de los Comuneros, las guerras civiles y las sociedades artesanales del siglo XIX, para arribar finalmente al movimiento de los años 20, del que hizo parte y al abrigo del cual la clase obrera tuvo importantes conquistas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida. Para el momento en que el texto es dado a conocer, Torres Giraldo percibe un renacimiento del sindicalismo nacional, que debe obedecer a unos criterios diferenciadores en razón a los rasgos particulares del trabajo en este país. Como él mismo lo señala,

“El ideario de la clase obrera de Colombia, para la presente etapa, consiste en la conexión de los objetivos nacionales y sociales; en el enfoque progresista de la lucha por esos objetivos, sin que esto signifique el abandono de las posiciones proletarias de principio en los cruces de la política estratégica. Esta breve anotación sobre las modalidades en la imagen y en la acción de los proletarios de un país semi-colonial de tercer grado en el desarrollo económico, social, cultural y político como Colombia,

²³ Para Gramsci, el organicismo de un intelectual está dado por los lazos que lo unen a la clase social que representa a través de las organizaciones de la misma de las que hace parte. “Se podría estimar lo orgánico de las distintas capas de intelectuales, su mayor o menor conexión con un grupo social básico, fijando una graduación de las funciones y de la superestructura desde abajo hacia arriba, desde la base estructural hasta lo alto”. Gramsci, Antonio, *La formación de los intelectuales*, Grijalbo, México, 1967, p. 30.

²⁴ Ver: Oviedo, Álvaro, “Ignacio Torres Giraldo”, en: Castro-Gómez, Santiago y otros (eds.), *Pensamiento colombiano del siglo XX*, Tomo 1, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, p. 225-230.

²⁵ Torres Giraldo, Ignacio, *Los inconformes: Historia de la rebeldía de las masas*, 4ª edición, Universidad del Valle, Cali, 2009.

es necesaria para entender completamente el ámbito - más que la órbita - del movimiento obrero, el ritmo y los compases de su marcha”²⁶.

La influencia de Torres Giraldo, al igual que sucedió con Mariátegui, va a ser tardía, y servirá como fundamento para distintas versiones de movimientos sociales en Colombia, en algunos casos contradictorias. Como Oviedo lo resalta, sus trabajos vendrán a ser conocidos apenas en las décadas del 60 y 70, momentos de gran efervescencia social y política, siendo reivindicados tanto por sectores que priorizan “la presencia de rasgos semif feudales en la estructura económico-social del país, valoran las tareas democráticas y dan un papel especial a la burguesía nacional en las transformaciones” como por otros que “consideran que estamos en lo fundamental frente a una estructura capitalista y las soluciones deben ser en esencia anticapitalistas”²⁷.

En cuanto al movimiento sindical colombiano de los años 20, si bien terminó con el lamentable suceso de la masacre de las bananeras en 1928, constituyó una gran experiencia de organización sectorial y de movilización social alrededor de ideas y propuestas políticas alternativas a las ofrecidas por los partidos tradicionales. Aunque con un marcado predominio de la doctrina marxista y de la reciente experiencia revolucionaria rusa, muchas de estas fuerzas tuvieron su origen o fueron cooptadas más adelante por estructuras liberales, lo que en parte permite comprender la pérdida del poder por parte del partido conservador en 1930 y el fin de una hegemonía unipartidista conservadora de más de cuarenta años en Colombia.

Ahora bien, como ya se ha podido recabar en algunas de las experiencias materiales mencionadas, la izquierda en América Latina no se limitó al mundo de las ideas. Existen numerosos sucesos que permiten corroborar las apuestas tanto a una lucha política en el seno de la lógica electoral, como una apuesta por la toma del poder a través de las armas. Antecedentes teóricos como los reseñados, que no se limitaron a Perú y Colombia sino que tuvieron sus propios representantes en distintos países de América Latina, sirvieron de plataforma para la proliferación de partidos comunistas nacionales en casi todos los países de la región, especialmente a partir de la década del 30. La estructura de estas organizaciones partidistas trató de emular la establecida por el Partido en la Unión Soviética, en un momento de apogeo de la experiencia del socialismo real. Por otra parte, acogieron en su mayoría los principios definidos por la Tercera Internacional²⁸, de fuerte sustento marxista-leninista y que determinó la centralidad en la historia de la lucha de clases y el rol asignado a la clase trabajadora, además de defender la inevitabilidad histórica del comunismo.

La enorme influencia que la Internacional Comunista tuvo en la fundación de partidos afines en la región suscitó un importante debate en torno al papel de la revolución como medio de resolución de la contradicción entre burguesía y proletariado. Dicho debate se enfrascaba en definir cuándo sería el momento en el que se dieran las condiciones objetivas y subjetivas para llevar a cabo la revolución, la cual, en un principio, no se entendió necesariamente como

²⁶ *Ibíd.*, p. 8.

²⁷ Oviedo, *Op. Cit.*, p. 249.

²⁸ Ver: Jelfets, Lazar; Jelfets, Víctor, “El giro a la izquierda en América Latina y el nacimiento del nuevo bolivarianismo: las tradiciones de la Komintern y la actualidad” en: *Revista CS*, núm. 4, Universidad ICESI, Cali, 2009, pp. 192-212.

un levantamiento armado, sino que podría asimilarse a unas fuertes medidas reformistas. De manera que la dicotomía entre revolución y reforma emergió pronto al interior de los partidos comunistas latinoamericanos, siendo en algunos casos imprescindible la segunda para poder llevar a cabo la primera, bajo el supuesto de la persistencia de estructuras feudales en el seno de la sociedad.

Como Ornelas y Aceves lo sostienen, “ambas posiciones no tenían como fundamento el temor de un lado o cierta inclinación al riesgo del otro, sino las claras diferencias de interpretación de la realidad de América Latina. El debate, muchas veces enconado, partía de preguntarse si Latinoamérica tenía características feudales o capitalistas, la respuesta devenía postura revolucionaria o reformista”²⁹. Vistas así las cosas, si bien la revolución se consideraba un fenómeno necesario, este no implicaba una insurrección violenta, al menos no mientras en las sociedades de los países del subcontinente subsistieran rezagos feudales propios del modelo organizativo implantado por España durante la colonia.

Para la corriente que defendió la necesidad de superar estos rasgos feudales antes de iniciar la implementación del socialismo, era preciso realizar primero una “revolución democrático-burguesa”, caracterizada por medidas dirigidas a morigerar el régimen de propiedad de la tierra, como manera de propiciar la suscitación de las condiciones requeridas por la revolución proletaria. De allí que su programa consistiera en

“realizar la reforma agraria, llamar a la emancipación de todos los campesinos y aligerar sus condiciones; realizar la expropiación sin indemnización, tomar una parte de las tierras para el cultivo colectivo y otra para la distribución entre campesinos y arrendatarios; la nacionalización de los bancos extranjeros; la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; la implantación de la jornada laboral de ocho horas; el reconocimiento de la autodeterminación de las naciones y la lucha por la unidad nacional en aquellos países donde no había sido alcanzada”³⁰.

No obstante, para otras tendencias dentro del comunismo latinoamericano, las condiciones ya estaban dadas, por lo que el inicio de la revolución se tornaba apremiante. El fundamento de tal aseveración era la convicción del carácter capitalista de los Estados latinoamericanos, en tanto parte de una sociedad capitalista mundial. Esta visión acentuaba la comprensión del comunismo como un fenómeno histórico global ineluctable hacia el que sólo se podría avanzar mediante el triunfo de una revolución. Además, para esta corriente, el evento revolucionario se asumía como inevitablemente violento, por lo que se privilegió la vía armada como forma de lucha³¹, aun si la misma buscaba, al igual que otras formas, la superación de vestigios feudales rezagadas en el capitalismo ya implantado en América Latina. Es por ello que el modelo de movimiento armado de liberación nacional, personificado por excelencia en la Revolución Cubana y exacerbado por su pronto triunfo,

²⁹ Ornelas Delgado, Jaime; Aceves López, Liza, “La izquierda latinoamericana en el siglo XX y la utopía recuperada”, en: *Bajo el Volcán*, vol. 11, núm. 17, septiembre-febrero, 2011, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, p. 280.

³⁰ *Ibid.*

³¹ A la idea de que sólo era posible acceder al poder por la vía de las armas contribuirá sin duda la frustración de la revolución pacífica pretendida por Arbenz en Guatemala desde 1944 y luego con mayor fuerza a partir de 1951, tras ser derrocado tres años después mediante un golpe de Estado promovido por la CIA.

se convertirá en predominante en la región y será emulado por otras organizaciones en distintos países, aun cuando el propio movimiento *26 de Julio* haya distado de ser indiscutiblemente comunista en sus orígenes o propósitos primigenios.

De modo que el eje de las luchas de la izquierda latinoamericana durante buena parte del siglo XX osciló entre una apuesta democrática-electoral reformista, que privilegió la defensa de un programa de reformas a la estructura funcional del Estado y la sociedad bajo la premisa de persistencia de factores feudales que necesariamente debían ser superados para preparar el advenimiento de una revolución de carácter socialista, a manera de paso histórico previo al comunismo, y otro modelo que dio preminencia al uso de las armas y reclamó la inmediatez del movimiento revolucionario, como único medio posible para la superación de las contradicciones de clase propias de la sociedad capitalista, aun si en ella quedaban restos del esquema feudal. De cualquier forma, para ambos modelos la influencia que los Estados Unidos ejercía en la región constituía, por una parte, un factor de intervencionismo que disminuía las posibilidades de autodeterminación. De allí que la lucha de la izquierda en el subcontinente tuviera también un fuerte cariz nacionalista. Por otra parte, el protagonismo norteamericano en la escena política regional se convertiría en un nuevo elemento a considerar en la estrategia de acceso al poder.

Ahora bien, dentro del primer grupo podrían mencionarse casos como el del APRA en el Perú, que surge en los años 20 de la mano de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien aspiró a la presidencia de su país en 1931, siendo derrotado, y luego, debido a la persecución de la dictadura de Odría, solicitó asilo político en la Embajada de Colombia en Lima, en donde estuvo por cinco años, para luego salir al exilio en México durante otros siete, todo esto entre 1949 y 1961. El golpe que en 1947 facilitó el ascenso del general Odría al poder fue dado en contra del presidente Bustamante y Rivero, quien dos años atrás había ganado las elecciones con un fuerte apoyo aprista, organización que hizo parte del denominado Frente Democrático Nacional. Sin embargo, las tensiones internas llevaron a manifestaciones en las que se reclamaba por la implementación de medidas sociales, inestabilidad que fue aprovechada por el militar referido, durante cuyo gobierno, adicionalmente, el APRA fue declarado ilegal.

Tras varios intentos frustrados, dos dictaduras militares más de por medio y un evidente giro hacia el centro del espectro político, el APRA ganó las elecciones presidenciales de 1985 con Alan García a la cabeza, quien intentó un audaz programa económico, que incluía una reducción notable en los recursos destinados al pago de la deuda externa del país, pero terminó generando un agravado fenómeno de hiperinflación y de escasez de productos básicos³². Además, durante su gobierno se vivieron los más graves ataques por parte de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, surgidos a principios de

³² “Debido a que la renegociación de la deuda dependía de la aceptación de políticas impuestas por el FMI, y debido a que estas políticas solían ser recesionarias, la única alternativa era no negociar sino limitar el pago de estas deudas. Lo que se ahorra en el pago de la deuda se aprovecharía para financiar importaciones”. Crabtree, John, *Alan García en el poder: Perú 1985-1990*, Ediciones Peisa, Lima 2005, p. 59.

los 80³³, elementos todos que condujeron a un severo cambio en las elecciones de 1990³⁴ y a la persecución judicial del propio García, quien se exilió en Colombia y finalmente, tras la caída de Fujimori, regresó a su país, donde ganó las elecciones presidenciales de 2006, como candidato aprista pero con una agenda marcadamente de derecha. De cualquier forma, su primera victoria no se consideró como un triunfo de la izquierda democrática en América Latina, debido a los cambios en el discurso y las posiciones moderadas que el APRA asumió tras la constitución peruana de 1979³⁵.

Aparte de otras experiencias, como la de Argentina bajo el peronismo, en el que la clase obrera fue objeto de movilización política; de México, donde las centrales de trabajadores fueron parcial pero exitosamente cooptadas por el PRI, en especial a partir de 1945; o de la misma Guatemala, en la que Arbenz, tras hacerse al poder de facto en 1944 logra ser elegido popularmente seis años después gracias al apoyo de sectores de izquierda; y por supuesto sin pretender pasar por alto el papel que jugaron los diferentes partidos comunistas o los movimientos sociales a lo largo del subcontinente, es posible indicar que la experiencia más representativa de un movimiento político alternativo que buscó (y consiguió) el poder por la vía democrática lo constituye la Unidad Popular en Chile.

La Unidad fue una coalición electoral de seis partidos y movimientos de izquierda, que se unieron en 1969 con el objetivo de presentar un candidato único a la presidencia. En este sentido, la agrupación que llevó a Allende al poder fue electoralmente coyuntural pero fundamentada sobre unos elementos temáticos y programáticos comunes que se tradujeron en las medidas que el gobierno introdujo durante los años de su ejercicio. Allende, por su parte, ya había sido candidato a la presidencia en tres oportunidades, la primera de ellas en 1952 en representación del Partido Socialista, de cuya fundación participó en 1933 y del que fue más adelante Secretario General. Tras dos intentos frustrados en 1958 y 1964, como candidato de una alianza de los partidos socialista y comunista de Chile a la cual adhirieron otras organizaciones de izquierda, Allende llegó a las elecciones de 1970 impulsado nuevamente por una coalición, que lo había escogido entre varios aspirantes, entre ellos el escritor Pablo Neruda³⁶, quien fue propuesto por el Partido Comunista.

Allende enfrentó a Jorge Alessandri, candidato de la derecha, y a Rodomiro Tomic, de la democracia cristiana, resultando ganador con un 36,62% de los votos, frente a un 35,27% y

³³ Uno de los mayores ataques llevados a cabo por Sendero Luminoso fue el atentado en el aeropuerto internacional de Lima en diciembre de 1985. En cuanto al MRTA, sólo en 1985 se registraron 580 acciones de su parte y en 1989 protagonizó una fuga masiva de 47 de sus miembros.

³⁴ Para las elecciones presidenciales de ese año, la primera vuelta fue ganada por el escritor Mario Vargas Llosa, seguido de Alberto Fujimori, quien en el balotaje obtuvo un 62,7% de los votos frente a un 37,6 el futuro Nobel de literatura.

³⁵ Sobre los dos gobiernos de Alan García en el Perú y especialmente su giro a la derecha en las elecciones de 2006, ver: Tanaka, Martín, "Del voluntarismo exacerbado al realismo sin ilusiones: el giro del APRA y de Alan García", en: *Nueva Sociedad* 217 (Sep/Oct, 2008), Caracas, pp. 172-184.

³⁶ En relación con la reconocida adscripción de Pablo Neruda al comunismo chileno, otros intelectuales fueron activos militantes o simpatizantes de los partidos comunistas de sus respectivos países como César Vallejo en el Perú; Diego Rivera, David Siqueiros y Xavier Guerrero en México; y Jorge Amado, el pintor Cândido Portinari y el arquitecto Óscar Niemeyer en Brasil.

28,11% de los otros candidatos respectivamente³⁷, porcentajes que se reflejaron en la distribución del Congreso, en donde la Unidad sólo alcanzó poco más de la tercera parte de las curules. Así, Allende debió gobernar sin mayorías parlamentarias y con una fuerte oposición. Con todo, ostenta el registro de ser el primer presidente socialista en el mundo en ser elegido mediante el voto popular en unas elecciones con candidatos de otras tendencias en competencia.

El gobierno de la Unidad Popular en Chile se encomendó en la tarea de generar un régimen de transición hacia un modelo de producción socialista bajo las condiciones de un sistema democrático liberal, y en tal sentido, Allende impulsó la nacionalización del cobre y la “toma” de grandes empresas en otros sectores económicos estratégicos para el país, bien mediante la expropiación o bien a través de la compra mayoritaria de acciones por el Estado, tal como sucedió con la banca. También aceleró el proceso de reforma agraria y urbana, que facilitó el acceso a la tierra a campesinos sin propiedad y ofreció soluciones de vivienda a ciudadanos pobres en las ciudades, además de otros cambios en los regímenes de educación, salud y cultura, fenómenos en los que los trabajadores jugaron un importante papel como aleccionadores o defensores de las acciones que derivaban de las medidas correspondientes.

La “vía chilena al socialismo” que por medio del reformismo perseguía la consolidación de un Estado popular que controlara la economía generó, sin embargo, efectos adversos a pesar de los índices positivos en materia de política social. Así, a fenómenos como el déficit fiscal vinieron aparejados otros como la inflación, provocada por las emisiones monetarias dirigidas a combatir precisamente el problema deficitario. Además, la implementación de las nuevas medidas económicas generó complicaciones en el abastecimiento, inconvenientes a los que se sumaron la especulación, el acaparamiento y el sabotaje, circunstancias que favorecieron las críticas de la oposición, que llegó a las elecciones parlamentarias de 1973 buscando obtener la mayoría calificada que le permitiera impugnar al presidente. Sin embargo, estos comicios fueron ganados por la Unidad Popular, que alcanzó casi la mitad de los votos, lo que cerró a los opositores la vía institucional para cambiar al gobierno. De acuerdo con Bitar,

“para el Partido Nacional, el programa mismo de la UP constituía una amenaza fundamental, su objetivo era detenerlo, aun a costa del quiebre del régimen democrático. En la Democracia Cristiana, una fracción se fue alineando en posiciones similares las del PN (...) La acción conjunta podía servir a ambos propósitos. Al PN y al ala conservadora de la DC le permitía bloquear el aparato institucional para imposibilitar la acción del gobierno, acusarlo de actuar ilegalmente y crear condiciones para un golpe”³⁸.

Estos antecedentes arrojaron como consecuencia el asalto al Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973, que terminó con la muerte de Allende y el ascenso de Pinochet al poder,

³⁷ Ver: Gómez Leyton, Juan Carlos, "La elección presidencial de 1970 en Chile. (Una mirada desde la teoría económica de la democracia de Anthony Downs)", en: *Estudios 57*. Primavera-Verano, Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, México, D.F., 1999, p. 61.

³⁸ Bitar, Sergio, *Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro*, Pehuén, Santiago de Chile, 1995, p. 154.

quien estableció una dictadura durante diecisiete años, cuyos resultados generales, especialmente en materia de Derechos Humanos, producen aún hoy en día profundas divisiones en el seno de la sociedad chilena.

En cuanto a sus efectos, la experiencia de la Unidad Popular en Chile tuvo dos importantes repercusiones: por un lado, comprobó históricamente las posibilidades materiales de triunfo de la izquierda en el escenario electoral, pero por otro, sirvió para reafirmar la posición de aquellos que consideraban a la violencia como la única opción real de acceder al poder, aún desde antes del triunfo de Allende y con mayor fuerza tras su derrocamiento. Es por ello que la lucha armada constituyó un común denominador en diferentes países del subcontinente, teniendo su caso emblemático en la Revolución Cubana, que triunfa en 1959 enarbolando banderas que, irónicamente, en su momento no defendían un discurso plenamente socialista, aun cuando sus reivindicaciones sí podrían considerarse como alternativas.

La victoria del Movimiento 26 de Julio, cuyo gobierno establecido sigue en el poder después de 58 años, alimentó la utopía de la lucha armada en América Latina, con emuladores a lo largo del subcontinente, bajo el denominador común de la influencia del marxismo, aunque con diferentes matices que varían desde la orientación leninista o maoísta de las organizaciones y su consecuente alineación con la Unión Soviética, Cuba o China, hasta el carácter nacional propio de sus reivindicaciones, relacionadas en muchos casos con el régimen de propiedad de la tierra, el dominio de los grandes medios de producción, los derechos de los trabajadores o la lucha contra las élites internas.

Es así como se tuvieron experiencias guerrilleras en Nicaragua, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional que aparece en 1961, como “continuator” de la resistencia ejercida por Augusto Sandino a finales de los años 20 frente a la ocupación norteamericana. Tras dieciocho años de guerra contra el Estado, el FSLN, liderado por Daniel Ortega, logra derrocar la dictadura de Somoza en 1979 e instaurar un gobierno revolucionario, convirtiéndose de esta manera en la segunda experiencia de lucha armada victoriosa en la región luego del triunfo de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba veinte años atrás. La reacción del gobierno de los Estados Unidos durante la administración Reagan fue la financiación de los grupos paramilitares conocidos como los *Contras*, que durante la década del 80 llevaron al país a una guerra civil.

En Guatemala, por su parte, surgió el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) hacia 1962, suscitado por la dictadura que reemplazó a Arbenz, y si bien desapareció nueve años después, fue reemplazado por una nueva agrupación que se hizo llamar el Ejército Guerrillero de los Pobres. Más tarde, en 1979, se creó la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) que junto al EGP, combatió al Estado hasta 1996, año en que se firmó un acuerdo de paz que puso fin a la que se conoció como la Guerra Civil de Guatemala, la cual dejó más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, de acuerdo con cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas³⁹.

³⁹ Las conclusiones de la Comisión pueden ser consultadas en: http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

En Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros aparece hacia 1964, con un fuerte periodo de lucha armada entre 1968 y 1972, luego del cual es apresada la mayoría de sus dirigentes, entre ellos José Mujica, posterior presidente del país. En 1985 se decretó una amnistía general, tras la cual los Tupamaros se transformaron en una organización política legal, adscrita al Frente Amplio. En Colombia, durante el mismo año de 1964 ven la luz las FARC y el ELN; en 1967 el EPL y en 1974 el M-19, cada uno con sus propias reivindicaciones y orientaciones políticas. Existieron, además, agrupaciones guerrilleras indígenas, campesinas y obreras que desaparecieron a finales de los 80. En Bolivia, el Che intentó crear un grupo en 1967⁴⁰ que fue disuelto luego de su apresamiento y muerte a manos del ejército.

Los años 80 distaron mucho de ser tranquilos y sumado a los fenómenos guerrilleros ya referidos que se desarrollaban en otros países, surgieron nuevas organizaciones armadas como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, en 1980, que agrupó distintos movimientos armados durante la guerra civil que azotó a ese país hasta 1992 cuando se firmó un acuerdo de paz. Entretanto, en el Perú aparecen Sendero Luminoso, en 1980, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, en 1984, ambos desaparecidos durante el gobierno de Fujimori, quien logra apresar a los principales dirigentes del primero, entre ellos Abimael Guzmán, aún encarcelado, y liquidar a los del segundo, con fuertes intervenciones militares como la recuperación de la embajada de Japón en Lima en 1997.

En la década del 90, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México se constituyó en la primera experiencia de una aventura guerrillera fundada después de la Guerra Fría, fenómeno quizá sólo visto también en Paraguay con el Ejército del Pueblo Paraguayo, surgido hacia 2008. Empero, en el caso del EZLN, éste detuvo su movilización operativa en el año 2000, y en el del EPP se conserva apenas un pequeño reducto con capacidad restringida. De modo que según lo recopilado, al comenzar el siglo XXI el único país en el que persiste la lucha guerrillera es Colombia, con el mantenimiento del alzamiento en armas de las FARC, el ELN y algunas disidencias del EPL⁴¹.

A pesar de los exitosos procesos de desmovilización en el gobierno Barco, que a finales de los 80 permitió la desintegración de cinco organizaciones guerrilleras, a saber, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Armado Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, la desmovilización de las FARC y el ELN no fueron posibles. Así, los que han sido tal vez los grupos más poderosos, en términos de pie de fuerza, presencia territorial y capacidad económica y operativa, se mantuvieron activos. El papel que jugarán específicamente las FARC durante las siguientes dos décadas serán determinantes en el devenir de la política

⁴⁰ La experiencia frustrada del Che Guevara en Bolivia obedece a una estrategia guerrillera conocida como *Foquismo*, la cual, en relación con América Latina, defendía que el inicio de la chispa revolucionaria en una parte del continente provocaría que esta se propagara por el resto del territorio. De allí que Bolivia, ubicada en el centro de Sudamérica, fuera la mejor opción para una visión foquista de la revolución. Sobre el foquismo, véase: Pizarro Leongómez, Eduardo, *Insurgencia sin revolución: la guerrilla colombiana en una perspectiva comparada*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1996, p. 56 y ss. Sobre los últimos días del Che, véase: Guevara, Ernesto, *El diario del Che en Bolivia*, Círculo de Lectores, Bogotá, 1985.

⁴¹ También podría hacerse referencia a la reactivación de Sendero Luminoso en el Perú, con algunas acciones desde 2002 y con mayor fuerza a partir de 2012, aunque su capacidad operativa sigue siendo limitada.

colombiana en general y de la izquierda en Colombia, en particular. Este elemento diferenciador, como se tratará de demostrar más adelante, resultará concluyente para explicar la imposibilidad material de ascenso al poder presidencial que tiene la izquierda colombiana.

2. El socialismo del siglo XXI: la izquierda llega al poder por la vía electoral

En un anterior apartado se arriesgó la hipótesis de varios elementos en común que facilitaron el ascenso de movimientos políticos de izquierda al poder presidencial en diversos países de América Latina. A manera de resumen, entre tales elementos se encontraban el desprestigio generalizado de las clases dirigentes nacionales, representadas en los partidos políticos de tradición; una percepción extendida acerca de los efectos negativos de la política económica de apertura, reflejada en una profunda desindustrialización y el aumento correlativo del desempleo; la restricción de la democracia al escenario de las elecciones periódicas, las cuales actuaban estratégicamente como mero legitimador del sistema político en su conjunto; el desinterés de Estados Unidos por la región, en principio por la desaparición del fantasma comunista latinoamericano tras la caída del muro de Berlín, y luego del 11 de septiembre de 2001, por el cambio de los intereses en su agenda de política exterior; y por último, la aparición de líderes carismáticos que supieron interpretar el momento histórico de sus países y ubicarse a la cabeza de movimientos alternativos que reaccionaban contra los males descritos.

En términos generales, hubo dos procesos que contribuyeron a un ambiente generalizado con esas características. Por una parte, el agotamiento del modelo cepalino⁴² fue enfrentado mediante la introducción de una fuerte política de apertura económica, al abrigo de una doctrina neoliberal. Por otra, los golpes militares dejaron de ser medida común frente a los desajustes institucionales o la amenaza de movimientos populares. En este sentido, uno a uno, todos los países de la región empezaron a implementar medidas aperturistas al tiempo que se erradicaban para siempre las dictaduras militares. Así, la combinación de profunda economía de mercado y democracia fue el común denominador en América Latina a partir de los 90.

Sin embargo, esta receta tuvo diversas repercusiones. Como ya se ha mencionado, se produjo una fuerte contracción en las economías nacionales que trajo consigo fenómenos de desempleo, concentración excesiva de la riqueza y consecuente desigualdad, falta de distribución equitativa de los recursos, políticas tributarias regresivas, etc⁴³. Igualmente, mientras que las clases políticas a las que se les “devolvió” el poder bajo la promesa de no

⁴² El modelo cepalino, también conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones (Modelo ISI) fue el modelo de desarrollo adoptado por la mayoría de los países de América Latina desde los años 30 y hasta principios de los 80, cuando se dio inicio al proceso de apertura neoliberal. De acuerdo con Bielschowsky, “La atención prestada a la vulnerabilidad externa y a la escasez de divisas, que junto con la falta de ahorro e inversión eran vistas como el principal obstáculo al crecimiento, conduciría al análisis de las causas determinantes del proceso de industrialización, es decir, de la dinámica de la sustitución de importaciones”. Bielschowsky, Ricardo, “Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo”, en: *Revista CEPAL* 97, abril 2009, p. 184.

⁴³ Ver: Varios, “El neoliberalismo en América Latina”, en: *Realidad* No. 54, Noviembre-Diciembre 1996, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, p. 751.

ser nunca más usurpado por los militares - práctica a la que contribuyó decididamente la política intervencionista norteamericana en la región, impulsando no pocos golpes en el subcontinente - aquellas se vieron envueltas en constantes escándalos de corrupción, sin mencionar el enorme divorcio que se evidenciaba entre el sentir de las masas y los intereses de sus gobernantes.

Este malestar ya era percibido a comienzos de la década de los 90 en Venezuela, país que vivía una bonanza petrolera pero al mismo tiempo conocía las denuncias de corrupción contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1988-1993) y era víctima de sus procedimientos represivos⁴⁴. Este fue el motivo invocado por un grupo de militares que, irónicamente en defensa de la democracia, intentó dar un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992⁴⁵. A la cabeza del grupo golpista se encontraba un teniente coronel del Estado de Barinas, llamado Hugo Chávez, quien luego de la intentona fue enviado a prisión. A raíz de la amnistía decretada por el nuevo presidente, Chávez recobró su libertad en 1994 y casi de inmediato inició su actividad política.

Siendo militar, Chávez había fundado un movimiento dentro del ejército con ocasión de los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar (MBR-200), que además del fuerte ascendente bolivariano, que influirá en la orientación política de Chávez hasta su muerte, tuvo aportes y relaciones con sectores de la izquierda venezolana. Esta posibilidad de militancia política de los militares ha sido una constante a lo largo de la historia de Venezuela y se explica en una particular asimilación del profesionalismo castrense en este país. Como Straka lo resalta,

“la oficialidad siente que precisamente por profesional tiene el deber y, sobre todo, el derecho de intervenir en los asuntos internos del país (...) cuando eso ocurre, pues, Bolívar es vuelto a ser traído a colación. (...) Aunque el MBR-200 es una vertiente que aún está por estudiarse, responde al mismo criterio de que los militares son los que pueden y deben desencadenar los grandes cambios del país; bien que sean ahora con una connotación distinta, ahora se trata de cambios revolucionarios”⁴⁶.

Ya fuera del ejército y en libertad, Chávez fundó en 1995 un movimiento llamado Quinta República (MVR) y recorrió Venezuela impulsando inicialmente la abstención electoral con la bandera de la ilegitimidad de los partidos y proponiendo la conformación de una asamblea nacional constituyente. Sin embargo, más tarde decidió involucrar a su agrupación en el ejercicio proselitista, lo que lo llevó a participar de las elecciones parlamentarias de

⁴⁴ Un hecho que marcó el periodo de Pérez en Venezuela fue el llamado *Caracazo*, del 27 de febrero de 1989, cuando las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron más de trescientas personas durante una manifestación que inició en Caracas pero tuvo alcance nacional, y en la que la gente protestaba por las medidas de apertura y privatización del gobierno.

⁴⁵ El 27 de noviembre de 1992 hubo un nuevo intento de golpe de Estado contra Pérez, también infructuoso. Finalmente, el presidente es destituido por el Congreso en marzo de 1993. Sobre el ambiente que precedió los intentos de golpe y el gobierno de Carlos Andrés Pérez en general, véase: Suárez, Dulce, “La segunda transición democrática en Venezuela”, en: *Estudios sobre transiciones democráticas en América Latina*, Universidad de Oviedo, 1997, pp. 135-161.

⁴⁶ Straka, Tomás, “Guiados por Bolívar: López Contreras, bolivarianismos y pretorianismo en Venezuela”, en: *Militares y poder en Venezuela*, Domingo Irwin et al (eds.), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2005, pp. 101, 102.

noviembre 1998, en las que el MVR obtuvo 58 escaños en la Asamblea Nacional⁴⁷, poco más del 20% de las curules. Esto impulsó su candidatura a la presidencia, en la que además de su propio movimiento, fue apoyado por otras organizaciones de izquierda. Finalmente, fue elegido presidente el 6 de diciembre de 1998, con 3.670.000 votos que representaban el 56,20% del total⁴⁸. De inmediato, inició el proceso constituyente cuyo resultado fue la constitución bolivariana de 1999, lo que le permitió ser reelegido en 2001, 2006 y 2012. Al asumir su cuarto periodo presidencial, en enero de 2013, su delicado estado de salud lo obligó a delegar sus funciones en Nicolás Maduro, quien tras la muerte de Chávez, sería elegido presidente hasta 2019.

La doble fórmula de apertura económica y transición a la democracia produjo efectos similares en otros países de la región, en los que el fin de la Guerra Fría, además de la erradicación aparentemente definitiva de las dictaduras militares⁴⁹, significó un fuerte rezago de la industria nacional, desempleo, concentración de la riqueza y corrupción administrativa. Esta mezcla explosiva, aprovechada por discursos alternativos y figuras carismáticas capaces de movilizar el descontento social a través de los mecanismos electorales institucionales, facilitó la conquista del poder presidencial en otras latitudes. Así, en Brasil, por ejemplo, tras el fin de la dictadura en 1985, luego de las primeras elecciones democráticas en más de veinte años, se introdujo una nueva constitución en 1988, a cuya expedición siguió una serie de protestas generadas por la crisis económica y la hiperinflación. Esta coyuntura facilitó el triunfo de Fernando Collor de Melo en 1990, quien saldría del poder tres años después bajo graves acusaciones de corrupción. Tras un gobierno de transición, en 1994 es elegido Fernando Henrique Cardoso, quien se mantuvo en la presidencia hasta 2002.

A pesar de sus antecedentes como intelectual socialdemócrata, con reconocimiento incluso dentro de la academia europea y norteamericana, Cardoso desplegó una ambiciosa agenda neoliberal durante su gobierno, la cual ya había iniciado en su papel como Ministro de Hacienda de Itamar Franco, durante la transición. En síntesis, sus medidas se orientaron a una reducción estricta de la inflación, a un programa de privatizaciones de empresas y servicios públicos y a un ajuste fiscal extremo, a la luz de las recomendaciones del FMI. La crisis de los Tigres Asiáticos en 1997⁵⁰ tuvo efectos colaterales sobre otros mercados emergentes y en consecuencia, Brasil vivió una grave afectación económica entre 1998 y 1999 que se reflejó particularmente en el desempleo que aumentó en dos puntos porcentuales. El “giro a la derecha” de Cardoso permitió el surgimiento de figuras alternativas, que promulgaban por una política de mayor inclusión social y ofrecían un discurso contra la crisis.

⁴⁷ Fuente: <https://operaciontransparencia.files.wordpress.com/2013/04/cronologc3ada-electoral-venezolana-1998-1.pdf>

⁴⁸ *Ibíd.*

⁴⁹ Además de la ya referida dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990), otros países de la región tuvieron gobiernos militares durante la segunda mitad del siglo XX. Tal es el caso de Argentina, que vivió un régimen entre 1976 y 1983, Uruguay (1973-1984), Bolivia (1971-1978), Paraguay (1954-1989), República Dominicana (1931-1960), Perú (1968-1975), Brasil (1964-1985), Ecuador (1972-1976), Nicaragua (hasta 1979), Colombia (1953-1957), entre otros.

⁵⁰ Sobre la crisis de los países del Sudeste asiático a finales de los años 90, ver: Guillén, Arturo, “Crisis asiática y reestructuración de la economía mundial”, en: *Comercio exterior*, enero de 1999, México, pp. 16-23.

En medio de este panorama, la imagen de Lula Da Silva aparece como novedosa aunque él mismo ya había sido candidato presidencial en tres oportunidades anteriores, entre 1989 y 1998. Sin embargo, ahora su aspiración se tornaba viable porque a la vez que lograba congregarse distintos movimientos y organizaciones políticas y sociales alrededor de su propuesta, supo proyectarse como un candidato surgido del seno de la clase popular con la que millones de brasileros se sentían identificados. Sin duda, el carisma y el perfil delineado de Lula lo catapultaron a la presidencia de su país. Así lo sostienen Meyenberg y Souki cuando afirman que:

“el proceso de 2002 puede considerarse como simbólico en el camino de la consolidación de la democracia en Brasil porque la victoria de Lula significó el fin del miedo histórico a los gobiernos de izquierda. Y la audacia del electorado no quedó ahí, apostó a un hombre de origen humilde, con baja escolaridad. La confianza del electorado en este candidato se fundamentó en la buena actuación de su partido en la gestión local, además del amplio conocimiento del candidato, que ya había participado en tres campañas presidenciales previas. Su triunfo obedeció también a una sólida capacidad de concertación que mostró, con gran éxito, durante la campaña”⁵¹.

Lula fue reelegido presidente en 2006 y reemplazado en el 2010 por Dilma Rousseff, su copartidaria, quien también obtuvo la reelección en 2014. En mayo de 2016, el senado de Brasil le inició un juicio político por escándalos de corrupción y la suspendió por seis meses en el cargo. Empero, en agosto siguiente, una vez se resolvió el *impeachment*, la presidenta fue destituida y reemplazada por su vicepresidente, en lo que muchos calificaron como un golpe de Estado parlamentario.

En cuanto a Argentina, allí los efectos de la crisis económica fueron mucho más palpables, ya que debido a la política económica de Menem, alineada en la conocida receta de las privatizaciones y el ajuste fiscal, además de la política de convertibilidad, el país se vio enfrentado a una recesión progresiva desde agosto de 1998, que elevó la tasa de riesgo y forzó la intervención del FMI a finales del año 2000, ya bajo la presidencia de De la Rúa. De acuerdo con Castro, “La intervención del FMI en el mes de diciembre del 2000 evitó que la Argentina entrara en cesación de pagos. Sin embargo (...) a partir de febrero del 2001 la tasa riesgo país comenzó a subir nuevamente ante la evidencia de que la Argentina no volvía a crecer, esto es, que el financiamiento internacional no le otorgaba al país los instrumentos del crecimiento económico”⁵². Así las cosas, pesar de los esfuerzos, que apelaban empero a soluciones propuestas por la misma dogmática neoliberal que llevó a Argentina a la crisis, esta llegó a una inevitable cesación de pagos en diciembre de 2001, que derivó en una ola de protestas. Como respuesta, el gobierno inició la implementación de medidas dirigidas a evitar la descapitalización del sistema bancario, lo que se conoció coloquialmente como el

⁵¹ Meyenberg, Yolanda; Souki, Léa G., “Las campañas políticas de Fox en México y Lula da Silva en Brasil. El vaivén de los medios de comunicación”, en: *Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, vol. 2, núm. 1, primer semestre, 2006, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México, p. 316.

⁵² Castro, Jorge, *Política y economía en la Argentina de los 90*, Visiting Resource Professor Paper, Universidad de Texas, Austin, Agosto de 2001. Disponible en: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/castro.pdf>

“Corralito financiero”, que afectó ostensiblemente a la población general para proteger a la banca.

Como culpables de esta debacle se señalaron a los dirigentes políticos tradicionales que tras la renuncia de De la Rúa y varias interinidades, que incluye un capítulo en el que durante una misma semana Argentina tuvo cinco presidentes distintos, convocaron a unas elecciones en abril de 2003 que en primera vuelta fueron ganadas por Carlos Menem. No obstante, este renunció a su candidatura en el balotaje, lo que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia, la que ejerció durante cuatro años, dando paso luego a su esposa, quien estuvo en el poder hasta 2015. Kirchner murió en 2010, mientras que Menem terminó condenado por contrabando de armas y corrupción.

En Uruguay, el acceso de la izquierda al poder fue mucho más estructural, a pesar de que tardó más de treinta años, pues desde 1971 existía el Frente Amplio como un conglomerado de organizaciones políticas y sociales de izquierda, muchas de las cuales fueron perseguidas durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1984. Con el regreso de la democracia y el decreto de la amnistía general para los presos políticos⁵³, muchos miembros del Frente recuperaron su libertad, al igual que integrantes de los Tupamaros, que ya como agrupación política sin armas, adhirió a la coalición, la cual participó de las elecciones generales ese mismo año, obteniendo algunas curules en el legislativo nacional.

Aunque para los comicios de 1989 el Frente consiguió casi el mismo reducido número de escaños en la Asamblea y tan sólo la quinta parte de los votos para presidente, ganó la intendencia de Montevideo con el candidato Tabaré Vázquez, quien se convierte así en el primer miembro de un movimiento de izquierda en acceder a un cargo de gran importancia en Uruguay. Su reconocida labor allí lo impulsará para ser candidato presidencial del Frente en 1994, 1999 y 2004, elecciones en las que la coalición tuvo un aumento progresivo de sus votos y por esa vía, también de curules en la Asamblea, y que finalmente llevaron a Vázquez a erigirse como presidente, con más de la mitad de los votos depositados. Desde entonces, el Frente Amplio se ha mantenido como partido de gobierno, con el triunfo de José Mujica en 2009 y otra vez del propio Tabaré, quien ejerce nuevamente como presidente desde marzo de 2015.

En el caso de Chile, la transición ha sido menos radical que en otros países, ya que tras el fin de la dictadura, los candidatos que se eligieron como presidentes contaban con un respaldo mayoritario de fuerzas políticas de distintos espectros políticos (especialmente del centro y de la izquierda) que los llevaron a ejercer gobiernos de coalición y con participación de sectores diversos, bajo lo que fue conocido como La Concertación. Es así como Patricio Aylwin, quien resultó elegido en 1990 y había sido uno de los principales impulsores del No en el referendo que Pinochet convocó en 1988 para sostenerse en el poder nueve años más, dio cabida a representantes de distintas agrupaciones políticas. Con todo, su política económica no se distanció mucho de la precedente, que había encaminado a Chile, antes que

⁵³ En marzo de 1985, mediante una ley del congreso uruguayo, fue establecida una amnistía general para los presos políticos.

ningún otro país de América Latina, en la senda aperturista y dio lugar al denominado “Milagro chileno”⁵⁴.

Para 2005, la Concertación presentó como candidata presidencial a Michelle Bachelet, que si bien pertenecía a la misma coalición de partidos que había permitido las elecciones de sus predecesores desde 1990, se distinguía en esta oportunidad por haber sido una víctima directa de la dictadura, no sólo por el encarcelamiento y posterior muerte de su padre, quien había sido un militar leal a Allende, sino porque ella junto a su madre fueron también apresadas y luego forzadas a huir del país. Además de este elemento diferenciador, Bachelet, quien fue ministra en varias oportunidades antes de llegar a la presidencia, se destacó por desarrollar una importante política social, que favoreció en especial al sector educativo y de seguridad social. Tras un gobierno de centro-derecha, con Sebastián Piñera entre 2010 y 2014, Bachelet regresó a la presidencia de Chile para un segundo periodo en el que ha estado lejos de la popularidad que alcanzó en su primera administración.

En Ecuador, entretanto, la conquista de la presidencia por parte de Rafael Correa a finales de 2006, se dio como una consecuencia de la inestabilidad política e institucional que reinaba en el país desde los 90, primero por el conflicto con el Perú, suscitado en medio de la implementación de reformas de corte neoliberal que caracterizaron el gobierno de Durán Ballén, y luego por la destitución por incapacidad que el Congreso hizo al presidente Bucaram en 1997. Tras un gobierno interino y una reforma constitucional de por medio, es elegido presidente Jamil Mahuad, quien sale derrocado en el año 2000 tras una serie de movilizaciones ciudadanas en protesta por la crisis económica y las acusaciones de corrupción que recaían sobre del gobierno. Una nueva administración transitoria, seguida de nuevas elecciones, dio el triunfo a Lucio Gutiérrez, quien en 2005 es también destituido por el Congreso en medio de una nueva ola de protestas en el país.

La llegada de Correa a la presidencia cierra este periodo de desorden e interinidad, por un lado, gracias a las reformas institucionales llevadas a cabo, entre las cuales se incluyó la reelección que le permitió permanecer en el poder hasta mayo de 2017, pero que abordaron desde los poderes legislativo y judicial hasta las entidades económicas del Estado ecuatoriano. Por otro lado, un manejo aceptable de la política económica, con un gran componente social y considerables desarrollos en infraestructura le brindaron estabilidad a su gobierno. A su triunfo contribuyó, sin duda, su imagen apolítica, ya que provenía de la docencia, y la asunción de un discurso alternativo en materia económica, alejado de las medidas neoliberales de sus antecesores. “Cuando Rafael Correa llega a la presidencia a fines de 2006 es un actor político de aquellos que se conocen como *outsider*. Sin un pasado político que lo cobije, sin estructura partidista que lo respalde y desconocedor de las lógicas de cómo se hace la política ‘por dentro’, su primera etapa tiene como objetivo mantenerse en el poder

⁵⁴ De acuerdo, con Altman: “En muy resumidas palabras, podemos señalar que el ‘milagro’ chileno se sustenta en cuatro columnas vertebrales: (1) Un equilibrio fiscal marcado (incluyendo una norma aceptada, aunque no exista ley, sobre la necesidad de disponer de un 1% de superávit estructural); (2) una integración y apertura internacional unilateral (sin pasar por acuerdos intermedios regionales como MERCOSUR); (3) privatización de muchas aunque no todas las áreas sensibles de la política social, especialmente la seguridad social; (4) ‘encaje no remunerado sobre todos los ingresos de capitales (con excepción de la inversión extranjera directa)”. Altman, David, “Continuidades, cambios y desafíos democráticos en Chile (2006-2009)”, en: *Colombia Internacional* No. 64, Julio-Diciembre 2006, Universidad de los Andes, Bogotá, p. 26.

y dar pasos seguros hacia la generación de un proyecto político propio”⁵⁵. Tras dos reelecciones, en 2008 y 2013, Correa se aseguró el poder en Ecuador hasta mayo de 2017, como ya se señaló, cuando fue remplazado por su copartidario Lenín Moreno.

Bolivia, por su parte, tras el fin de la dictadura se encaminó en una serie de gobiernos que orientaron la economía hacia el modelo de apertura, tal como había ocurrido en todos los países de la región. Para principios del siglo XXI, la fuerte política intervencionista de los cultivos ilícitos afectó al sector cocalero y a los campesinos en general, en medio de un descontento popular que fue capitalizado por Evo Morales, figura representativa del Movimiento al Socialismo, al que llegó luego de destacarse como líder de trabajadores cocaleros precisamente. Tras adicionar a la bandera campesina y de cultivadores de coca una propuesta enfocada en la nacionalización de los hidrocarburos, se presentó como aspirante a la presidencia en las elecciones de 2002, siendo superado por un muy estrecho margen por el candidato oficialista. Sin embargo, su partido obtuvo un buen número de curules en el legislativo, lo que le permitió ejercer una sólida oposición al gobierno de Sánchez de Lozada, quien se vio forzado a renunciar un año después, en medio de protestas por el aumento de los impuestos.

Esta interinidad abrió las puertas a unas elecciones anticipadas que Morales ganó en diciembre de 2005 con más del 53% de los votos⁵⁶. Para Gratiús, “sin movilización popular o populismo desde abajo (recordando que en sus orígenes el populismo fue un movimiento rural contra la modernización industrial), la llegada al poder de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) no hubiera sido posible.”⁵⁷ Los ejes de su política, aparte de la ya referida estatización del petróleo, incluyen una democratización y descentralización de la política, el reconocimiento de la multiétnicidad y la plurinacionalidad y un fortalecimiento al sector agrario, todo lo cual quedó inserto en la constitución de 2009, la cual además le ha facilitado sus sucesivas reelecciones (a finales de 2009 y de 2014) y le han asegurado el poder hasta principios de 2020.

En Nicaragua, como ya se ha relatado, el FSLN logró derrocar la dictadura de Somoza en 1979 e instaurar un gobierno revolucionario fuertemente combatido por el gobierno norteamericano, que apoyó grupos contrainsurgentes en territorio nicaragüense. Esto condujo a una guerra civil en el país que generó numerosas muertes y desplazamientos en medio de la implementación de medidas económicas de corte socialista⁵⁸. En 1984, el gobierno sandinista convocó a elecciones que fueron ganadas por el FSLN, por lo que Daniel Ortega se convirtió en presidente de 1985 a 1990, año en que perdió unos nuevos comicios frente a

⁵⁵ Basabe-Serrano, Santiago, “Rafael Correa: el antes y el después de la política ecuatoriana”, en: *Revista Iberoamericana*, Año XIII (2013) Nueva época No. 50 Junio de 2013, FLACSO, Quito, p. 168.

⁵⁶ Ver: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, *Resultados electorales 2005-2009: Primer ciclo de gobierno indígena en Bolivia*, p. 8.

Disponible en: https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ciclo_resultados.pdf

⁵⁷ Gratiús, Sussane, *Reflexiones sobre izquierda y populismo en América Latina*, Colección de Estudios Internacionales, Número 6, año 2009, Universidad del País Vasco, p. 17.

⁵⁸ Sobre las reformas en Nicaragua, especialmente en el sector agrario, tras el triunfo de la revolución, ver: Rocha, José Luis, “La década de los años 80: revolución en Nicaragua, revolución en la caficultura nicaragüense-2”, en: *Anuario de Estudios Centroamericanos* 29(1-2), Universidad de Costa Rica, San José, 2003, 69-99.

la candidata de derecha Violeta Chamorro. Ya como líder de la oposición, Ortega se presentó a todas las elecciones presidenciales subsecuentes, siendo elegido finalmente en la de 2006, en pleno auge del “giro a la izquierda” de la región latinoamericana. Gracias a las posibilidades constitucionales, fue reelegido en 2011 y en 2016, con lo que se asegura la presidencia hasta principios de 2022.

En el mismo 2006, Manuel Zelaya gana las elecciones presidenciales en Honduras en representación del Partido Liberal. Aunque en la contienda derrotó al candidato de la derecha, en un principio su propuesta política no se alejaba de la agenda tradicional. Empero durante sus primeros meses de gobierno se fue acercando a los países con presidentes de izquierda en la región, especialmente Venezuela, hasta que en 2008 anunció oficialmente el carácter socialista de su gobierno e inició el trámite del ingreso de Honduras al ALBA. Aunque su política económica aún distaba de una orientación radical alternativa y sus acciones se llevaban a cabo con moderación, “en el contexto político local las acciones de Zelaya, por graduales y moderadas que hayan sido, si no lo pueden clasificar como un presidente de izquierda, seguramente lo clasifican como un presidente a la izquierda tanto de su propio programa electoral, cuanto de sus antecesores y del sistema político hondureño mismo”⁵⁹.

Quizá el momento culmen de este inesperado giro se dio en junio de 2009 cuando en medio de la asamblea de la OEA, desarrollada en territorio hondureño, apoyó abierta y formalmente la reaceptación de Cuba en ese organismo. Apenas tres semanas después fue derrocado por un golpe de Estado. De acuerdo con Cunha Filho:

“El golpe de Estado propulsado por la derecha hondureña en su contra, además, refuerza la confirmación de que el gobierno de Manuel Zelaya se encontraba en ese momento, por lo menos en el contexto local, en la franja izquierda del espectro político. Al menos en el ámbito local, Zelaya era percibido como una amenaza al statu quo que ameritaba una respuesta dura, aun cuando la misma significase el rompimiento del orden legal democrático”⁶⁰.

Otro caso de terminación abrupta de gobiernos de izquierda democráticamente elegidos, como ya se observó, ocurrió en Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016 a manos del Congreso⁶¹, idéntico mecanismo utilizado en Paraguay en 2012 con el presidente Fernando Lugo, quien había sido proclamado como presidente cuatro años atrás. Lugo era un sacerdote católico, promovido a obispo en 1994, formado en el ámbito de la

⁵⁹ Cunha Filho, Clayton y otros, *Un giro de la derecha a la izquierda? Un análisis del caso hondureño*, Ponencia presentada en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Buenos Aires, 28-30 de julio de 2010, p. 5.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 6.

⁶¹ Rousseff fue investigada por una comisión de la Cámara de Diputados tras una denuncia por presunta incursión en delitos de responsabilidad, derivados de la utilización de fondos de bancos públicos para cubrir programas del gobierno. De acuerdo con la acusación, la Presidenta violó normas fiscales para ocultar la realidad del déficit presupuestal. Esto le valió un juicio político en el que finalmente el Senado, tras una primera suspensión de seis meses en el ejercicio de su cargo, decidió destituirlo de manera definitiva, siendo reemplazada por su vicepresidente.

teología de la liberación⁶² y perseguido por la dictadura de Stroessner⁶³ a principios de los 80. Tras el fin del régimen militar, regresó a su país, donde años más tarde empezó a destacarse como líder defensor de causas campesinas y en 2006 promovió la conformación de un movimiento que agrupaba organizaciones políticas de izquierda, sindicatos y grupos de la sociedad civil⁶⁴. En aras de este propósito recibió un permiso especial por parte del Papa, el cual le permitía participar en política sin perder del todo sus prerrogativas clericales.

Una coalición denominada Alianza Patriótica para el Cambio lo avaló como candidato a la presidencia en el 2008, resultando ganador con el 41,2% de los votos, superando a la representante del oficial Partido Colorado y al General Lino Oviedo, quien protagonizó varios incidentes político-militares en la década del 90. El triunfo de Lugo en Paraguay estuvo precedido de años difíciles para la economía y la política paraguayas, tras el fin del gobierno militar. Entre 1995 y 1998, una fuerte crisis afectó al sistema financiero y la inestabilidad política fue constante entre 1998 y 2003, periodo en el cual cinco personas diferentes ocuparon el cargo de presidente, en medio de destituciones por el Senado, persecuciones judiciales, renunciaciones y exilios, que se cierran con la elección de Nicanor Duarte, cuyo gobierno impulsó reformas económicas que tuvieron un fuerte rechazo dentro de la oposición paraguaya, liderada por Lugo. Durante el gobierno de este último se empiezan a implementar ambiciosas medidas sociales y Paraguay ingresa a UNASUR, alineándose con el bloque de gobiernos alternativos de América Latina. Tras un polémico juicio político, es destituido por el Congreso de su país en junio de 2012 bajo la acusación de mal desempeño de sus funciones⁶⁵. El que fue conocido también como un “golpe parlamentario”, de acuerdo con Rivarola “viola sistemáticamente el pacto de transición a la democracia que se realizó luego de Stroessner”⁶⁶ y se encuadra dentro de lo que Tokatlián denomina “neogolpismo”, el cual

“está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia

⁶² La teología de la liberación es una doctrina católica cuya preocupación principal es la injusticia de la pobreza sufrida por los desvalidos en América Latina y que aboga por el empoderamiento de los pobres, en tanto sujetos modernos, con el fin de una transformación radical de la sociedad. Este enfoque le ha valido ser relacionado con el marxismo. Al respecto, ver: Silva, Sergio, “La teología de la liberación”, en: *Teología y Vida*, Vol. L, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2009, pp. 93-116.

⁶³ Stroessner gobernó en Paraguay desde 1954 hasta 1989.

⁶⁴ El denominado Frente Guasú agrupó a ocho partidos políticos, además de organizaciones civiles y de trabajadores.

⁶⁵ En concreto, el presidente fue acusado de haber dado mal manejo a la toma de una finca realizada por campesinos, que, tras la intervención de la policía, dejó diecisiete muertos, entre civiles y policiales. Sin embargo, muchos consideraron (entre ellos UNASUR y varios gobiernos extranjeros) que ese no era un motivo suficiente para cesar al presidente en su cargo, sino un pretexto para sacarlo del poder.

⁶⁶ Rivarola, Milda, “La rescisión del contrato social”, en: Carbone Locco y Lorena Soler (eds.), *Franquismo en Paraguay*, El 8° Loco, Buenos Aires, 2012, p. 43.

(por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso”⁶⁷.

En El Salvador, tras la firma del acuerdo de paz en 1992, el FMLN pasó a la vida civil como organización política sin armas y pronto comenzó a efectuar alianzas y a admitir militantes que no provenían del cuerpo insurgente desmovilizado. Tal fue el caso del periodista Mauricio Funes, quien luego de desarrollar una exitosa carrera en la radio y la televisión de su país, fue cooptado por el partido de izquierda salvadoreño para representarlo en las elecciones presidenciales de 2009, en las que resultó ganador con más del 50% de los votos⁶⁸. Su campaña se basó en un fuerte discurso contra el gobierno del partido derechista ARENA, que estaba en el poder desde 1989 y que a lo largo de dos décadas, aún después del fin de la guerra, no mostraba avances significativos en la reducción de la pobreza, el desempleo o la violencia, en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo. Funes se asiló en Nicaragua en 2016, luego de recibir amenazas contra su vida en El Salvador, cuyo gobierno sigue en poder del FMLN, que en 2014 obtuvo la victoria con Salvador Sánchez Cerén como candidato, este sí antiguo comandante guerrillero.

El breve repaso precedente se cierra con la elección de Ollanta Humala en el Perú en 2011, en su segundo intento por llegar a la presidencia luego de las elecciones de 2006, en las que perdió frente a Alan García, quien representaba al APRA pero con una propuesta derechista, según se ha referido. Humala era un oficial del ejército peruano, que recibió su baja en el 2004 bajo el grado de teniente coronel, lo que originó un alzamiento en una base comandada por su hermano. Tras su retiro, inició su actividad política con críticas al modelo de apertura y a los partidos políticos tradicionales, buscando emular, en parte, la gesta de Chávez en Venezuela, como militar retirado y *outsider* en materia electoral, los cuales “retan al sistema de partidos al postularse no como miembros de los partidos políticos establecidos, sino como candidatos independientes (...) Atacan a los políticos tradicionales al mostrarlos como élites que defienden intereses privados, y, en contraste, se presentan como alternativas no-partidarias, libres de asociación con la corrupción y la intriga endémica dentro de las instituciones públicas de la nación”⁶⁹.

Para las elecciones de 2011, Humala contó con el apoyo de varias organizaciones de izquierda y derrotó a Keiko Fujimori con un cerrado 51,4% frente a un 48,5% de la hija del expresidente⁷⁰. Debido al acompañamiento que tuvo durante su campaña se esperaba que su gobierno constituyera un nuevo caso de “marea rosa” en la región, pero la constante inestabilidad política, llegando a tener seis gabinetes distintos a lo largo de su administración, la retractación en varias de sus posturas de su época de candidato y su criticada gestión, que

⁶⁷ Tokatlián, Juan Gabriel, “Neogolpismo”, en: *Página 12*, edición del 13 de julio de 2009. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/128159-41146-2009-07-13.html>

⁶⁸ Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, *Memoria Especial Elecciones 2009*, p. 86. Disponible en: <http://www.tse.gob.sv/documentos/MEMORIAS%20ESPECIAL%20DE%20LABORES%20TSE/Memoria2009.pdf>

⁶⁹ Cameron, Maxwell A., “El giro a la izquierda frustrado en Perú: el caso de Ollanta Humala”, en: *Convergencia*, Revista de Ciencias Sociales, Núm. Esp. IA 2009, Universidad Autónoma del Estado de México, p. 276.

⁷⁰ República del Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales, *Resultados elecciones 2011*. Disponible en: <https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/2davuelta/>

finalizó en 2016, llevan a dudar si Perú también hizo parte de esta tendencia. De cualquier forma, cuando su triunfo se presentó, lo hizo al abrigo de propuestas de izquierda.

3. Las izquierdas latinas: semejanzas y diferencias entre países

El recuento general previo muestra tres características y permite arribar a una conclusión preliminar: por una parte, se puede establecer que los gobiernos de izquierda en la región persisten, bien de manera continua o interrumpida, a través de **i)** la reelección de presidentes, quienes son elegidos de nuevo en forma inmediata y sucesoria, como ha pasado en Ecuador, Argentina, Venezuela (en la era Chávez), Bolivia, Nicaragua y Brasil; **ii)** una nueva llegada al poder, luego de un tiempo durante el cual la presidencia fue ejercida por un gobernante de distinta orientación política, como en el caso de Chile, o por un presidente de la misma tendencia, como sucedió en Uruguay; y **iii)** por la elección de un copartidario del presidente en ejercicio, quien sucede al gobernante para continuar con sus políticas, como se observa en Brasil luego del período de Lula Da Silva; en Uruguay, con la elección de Mujica tras la salida de Vázquez y ahora en viceversa; y en Argentina y Venezuela, tras las muertes de Kirchner y Chávez respectivamente.

Por otra parte, es importante resaltar que tanto las características como la fuerza que han tenido las medidas implementadas en los diferentes países de la región con gobiernos alternativos, han variado de conformidad con la naturaleza de cada administración. Como se advirtió al comienzo de este escrito, los gobiernos de izquierda en la región no han sido homogéneos, pues debido a diferencias en factores idiosincráticos, es decir, relacionados con la personalidad de los líderes de los movimientos que los llevan al poder; sociales, como los elementos que caracterizan precisamente a estas agrupaciones políticas; económicos, por las visiones que se tienen sobre el modelo de desarrollo; e incluso culturales, por la concepción o tradición democrática en un respectivo país o la consideración como legítima de la posibilidad de ascenso al poder de una propuesta distinta a las tradicionales, van a delinear disímiles tendencias de izquierda.

En particular, acudiendo a la clasificación ofrecida por Pablo Alegre⁷¹, se han identificado dos corrientes generales: por una parte, una izquierda moderada “que acepta las reformas de mercado de segunda generación, que procura políticas macroeconómicas ortodoxas y aplica correctivos a las reformas liberales, básicamente a partir de la extensión o reforma de los programas sociales existentes”⁷², a lo que podría agregarse que mantiene un ambiente de apertura política, tanto a nivel interno como externo; y por otra parte, una izquierda populista-radical, la cual “rechaza las reformas de mercado y aboga por el retorno al estatismo”⁷³, acudiendo, además, a un discurso de exacerbación del nacionalismo, a promover la integración regional con base en afinidades políticas y a adoptar una posición contestataria

⁷¹ Alegre, Pablo, “Los giros a la izquierda en el Cono Sur: gobiernos progresistas y alternativas de desarrollo en perspectiva comparada” en: Pablo Alegre (et al.), *Las izquierdas latinoamericanas. De la oposición al gobierno*, CLACSO, Buenos Aires. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/izquierdas.pdf> (consultado el 23 de marzo de 2015).

⁷² *Ibíd.* p. 33.

⁷³ *Ibíd.*

frente a la política exterior de Estados Unidos. Para Jorge Castañeda⁷⁴, según se vio, la primera sería la izquierda “buena”, caracterizada por ser moderna, democrática, transparente, sensible y favorable al mercado, y en dicho grupo se incluiría a los gobiernos de Chile (por excelencia), Uruguay, Brasil y en menor medida, Ecuador. En contraposición, la izquierda “mala”, además de populista, sería autoritaria, corrupta, estatista y fiscalmente irresponsable, y de ella harían parte los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

Independientemente de las diferentes características generales que identifican a cada una de estas corrientes, la distinción también puede darse, por ejemplo, en términos del liderazgo que sus gobernantes ejercen. Así, para el caso de las izquierdas radicales, sus gobernantes serían líderes populistas, mientras que las moderadas tendrían líderes regionales, “que siguen políticas internacionales más conciliatorias con los Estados Unidos y procuran desarrollar políticas amigables con los principios del libre mercado”⁷⁵. Siguiendo con esta tesis, el tipo de liderazgo preponderante surge como resultado del contexto institucional del país correspondiente, por lo que en el caso de los líderes populistas, estos se han presentado en lugares con sistemas de partidos fragmentados o eventualmente disueltos, mientras que los socialdemócratas han emergido en sitios con sistemas de partidos altamente institucionalizados. En el caso de las izquierdas moderadas, se “privilegia la forma partidaria de la representación y actúa dentro de las instituciones representativas de la democracia liberal”⁷⁶ manteniendo “vínculos privilegiados con el movimiento sindical y otras organizaciones de la sociedad civil, los cuales, a su vez, establecen fuertes vínculos representativos con el Estado y los partidos socialdemócratas”⁷⁷. En tanto que en las populistas predomina la lógica de la representación personalista, la cual es “fuertemente antiinstitucional, con un discurso anti-*statu quo*, que denuncia las instituciones y partidos dominantes” y que además “supone una relación directa entre el líder y el pueblo soberano por encima de los arreglos institucionales”⁷⁸. En todos estos elementos radicaría la diferencia entre Bachelet, Lula, Rouseff, Mujica y Vázquez, de una orilla; y Chávez, Maduro, Ortega, Morales y los Kirchner, de la otra. Llama la atención el caso de Ecuador, pues si bien en tanto gobierno podría considerarse como parte de la izquierda “buena”, el liderazgo desplegado por el presidente Correa se acerca más al populista. Igual consideración podría plantearse sobre Ollanta Humala en el Perú, con las salvedades a las que se hicieron referencia con anterioridad.

Otros criterios que se utilizan para establecer una diferencia entre ambos tipos de izquierda en América Latina son la economía política y la orientación de la política exterior. En el primer caso, se considera que los gobiernos populistas-radicales se dieron en países rentistas y con alta dependencia de la explotación de específicos recursos naturales, mientras que los moderados se observaron en países en donde el sector industrial y de servicios estaría más desarrollado. Con respecto a la política exterior, la de los gobiernos radicales estaría más atravesada por elementos ideológicos, es decir, en ellos prevalece la política como

⁷⁴ Ver: Castañeda, *Op. Cit.*, p. 32.

⁷⁵ Alegre, *Op. Cit.* p. 33.

⁷⁶ Panizza, Francisco, “Nuevas izquierdas y democracia en América Latina” en: *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, No. 85/86, Barcelona, mayo 2009, p. 83.

⁷⁷ *Ibíd.*

⁷⁸ *Ibíd.*

determinante para la integración; mientras que en los moderados sería más pragmática, con preponderancia de la economía con miras a los procesos integrativos⁷⁹.

A pesar de la tipología ofrecida en las líneas anteriores, resulta indispensable anotar que las categorías planteadas, al igual que los rasgos que las identifican, distan mucho de ser absolutas. Por el contrario, la amplitud descriptiva, derivada de la imposibilidad de definir particularidades concretas para distinguir a un tipo de izquierda del otro, implica que varios gobiernos o líderes puedan estar a la vez en diferentes espacios del espectro político esbozado. Por ello, gobiernos considerados moderados pueden contener elementos propios de uno radical y viceversa, así como los liderazgos pueden mostrarse populistas para unos asuntos y socialdemócratas para otros. Por consiguiente se torna difícil encuadrar de manera definitiva a Ecuador y Perú, como se resaltó, o aún más paradójica resulta la política exterior de Venezuela frente a Estados Unidos. Como bien lo señaló Gardini,

“en orden a lograr sus objetivos ideológicos y estratégicos, la administración Chávez no ha rechazado tácticas pragmáticas. Después de años de chavismo, los Estados Unidos siguen siendo el mayor comprador de petróleo venezolano y el primer socio comercial de Caracas. La renta petrolera y el comercio con Norteamérica son indispensables para sostener el régimen y fundamentar sus iniciativas”⁸⁰.

De manera que, en el caso registrado, la misma política exterior puede ser ideológica y pragmática a la vez. En igual sentido, cualquiera de los gobiernos bajo análisis puede ser radical-populista y moderado-socialdemócrata de forma simultánea, sin que ello implique necesariamente una contradicción, a partir de la consideración del liderazgo ejercido por el presidente en ejercicio, la orientación de la política económica o la alineación de las relaciones internacionales. De allí que, sin menospreciar la utilidad que puede ofrecer la clasificación de la izquierda latinoamericana en las corrientes expuestas, es preciso relativizar las posiciones, a fin de evitar un reduccionismo analítico para el estudio de este interesante fenómeno.

Desde otra perspectiva, se encuentran los estudios que han abordado la izquierda latinoamericana con base en elementos teóricos explicativos, entre los que vale la pena mencionar el enfoque que algunos autores le han dado como una expresión de populismo, el cual, de acuerdo con estas posiciones, ha renacido en nuestras latitudes. Al respecto, Bassé intenta llevar a cabo una reconstrucción del concepto de populismo acudiendo a su registro en los discursos académico, político y uno más que denomina “burocrático”, concluyendo que “(el) discurso populista radica en la posibilidad de jugar sobre la polisemia de la noción de pueblo”⁸¹ por lo que no se limita a una mera retórica, sino que tiene una pretensión de legitimación política. De allí que termine definiéndolo “un principio de legitimación

⁷⁹ Para Gardini, una política exterior ideológica privilegia principios y soluciones doctrinarias sobre la adaptabilidad y las consecuencias prácticas de aserciones y acciones. Por su parte, una política exterior pragmática se basa sobre el principio de que la utilidad, la laboriosidad y la practicidad de ideas, políticas y propósitos constituyen su mérito. Ver: Gardini, Gian Luca, *Latin American Foreign Policies. Between ideology and pragmatism*, Palgrave, Mcmillan, New York, 2011, p. 17.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 19.

⁸¹ Basset, Yann, “Aproximación a las nociones de populismo y gobernabilidad en los discursos contemporáneos sobre América Latina”, en: *Opera 2006-2007*, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 42.

fundamentado sobre la voluntad del pueblo de manera absoluta (todo lo que quiere el pueblo tiene que ser realizado), y exclusiva (no se reconoce otro principio de legitimación)”⁸².

Es por ello que el populismo aparece como un fenómeno aparejado a la democracia, tanto por el apego a la voluntad del pueblo, que es en últimas donde reside la soberanía en el constitucionalismo moderno, como porque al encuadrarse dentro de esta tradición, se somete al sistema de controles que el Estado constitucional de derecho le impone. “Así, el populismo es necesario a la democracia. Se aleja de ella cuando se vuelve un absoluto que pasa por alto la herencia liberal de democracia. Puede, así, justificar ciertos tipos de autoritarismos”⁸³. Por lo tanto, si bien puede ser un canal de legitimación, su mal uso o desvío hacia las opciones de fuerza lo convierten en un factor de inestabilidad e ingobernabilidad.

Por su parte, Carlos de la Torre intenta mostrar, primero, que el populismo es una etapa histórica en América Latina; luego, como fenómeno que aparece en épocas de crisis; y por último, que su triunfo se debe, en parte, a las condiciones sociales de las “masas” que lo siguen. Para su primer propósito se apoya en Gino Germani, quien propone que el populismo es una etapa del proceso de modernización en la región al que se incorporan masas históricamente excluidas del juego político. En concreto, lo define como “la forma en la cual los sectores excluidos han accedido a la participación política, que se ha basado en discursos que dividen a la sociedad en dos campos antagónicos y en la visión de la democracia como la aclamación plebiscitaria a redentores más que en los modelos idealizados de los teóricos de la modernización de lo que debería ser la democracia”⁸⁴.

De esta manera, el populismo, que sería propio de los gobiernos de izquierda “radical”, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, está caracterizado por la aparición de líderes carismáticos, que se mostrarían a sí mismos como los “salvadores” o los poseedores de la fórmula para solucionar los problemas de sus países. Por supuesto, para que estas figuras aparezcan y su discurso resulte efectivo, es necesario encontrarse en un período de crisis, que para De la Torre, es el ambiente que favorece la emergencia de las opciones populistas. No obstante, “debido a que el populismo es visto como la expresión de una crisis, se lo considera como un fenómeno transitorio y excepcional”⁸⁵. De allí que resulte interesante revisar, bien si la crisis que afectaba a la región a comienzos de siglo no se ha superado, o bien si el populismo tiene por el contrario la tendencia a tornarse permanente.

Finalmente, De la Torre subraya que el carácter discursivo del populismo busca, como ya se indicó, generar una división de la sociedad (si se quiere, entre “buenos” y “malos”, lo cual implica una pretensión de superioridad moral), y que en el caso particular de América Latina, va dirigido a que los sectores históricamente excluidos puedan sentirse parte del sistema político, a través del uso de las herramientas electorales, castigando a las organizaciones políticas que se consideran culpables de dicha exclusión. Aquí es necesario señalar una

⁸² *Ibíd.*, p. 43.

⁸³ *Ibíd.*

⁸⁴ De la Torre, Carlos, “Populismo, ciudadanía y Estado de Derecho”, En: Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (editores), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, FLACSO-Ecuador, Quito, 2008, p. 24.

⁸⁵ *Ibíd.* p. 25.

diferencia frente a las denominadas izquierdas moderadas o socialdemócratas, pues como se han resaltado, sus liderazgos no son populistas sino regionales y el discurso que utilizan tiene como público objetivo a amplios sectores de la sociedad y no únicamente a las masas populares.

Kenneth Roberts también analiza la izquierda como una manifestación del retorno del populismo, el cual, en su criterio, había aparecido a mediados del siglo XX como producto de las teorías de la dependencia y la aplicación del modelo ISI en la economía regional. Para Roberts, el populismo, que define como “la movilización política de masas, de arriba hacia abajo, conducida por líderes personalistas que desafían a los grupos de élite a favor de un pueblo vagamente definido”⁸⁶, renace en América Latina durante la era neoliberal, por cuanto la consolidación de la economía de mercado generó desempleo, caída en los salarios reales y una ola de informalidad en el trabajo, lo cual excluyó a millones de personas de los sistemas de seguridad social. El giro programático hacia el neoliberalismo que tuvieron los gobiernos y los partidos políticos tradicionales de los que hacían parte a finales de los ochenta y principios de los noventa, generaron crecientes inconformismos y una convicción compartida en la gente de no sentirse representada por las estructuras políticas habituales. Esta “orfandad” de las instituciones de intermediación entre la sociedad civil y el sistema político y el desgaste de la imagen de la clase dirigente, generó un vacío que podía ser aprovechado por *outsiders*, como efectivamente ocurrió, quienes encontraron en el discurso de izquierda las propuestas radicales de cambio político y socioeconómico, que calaron fácilmente en la población.

En relación con los estudios que se ocupan de las características que diferencian a un gobierno de izquierda frente a otros, si bien se ha hecho énfasis en la extensión de las políticas sociales, no obstante, como ya se ha advertido también, hay quienes consideran que las administraciones izquierdistas, incluidas las radicales, tal vez con excepción de Venezuela, no han incurrido en estrategias de gasto irresponsable de los recursos públicos, sino que por el contrario han manejado con estrictos controles las finanzas del Estado. En este sentido, su gestión no sería tan diferente a la de gobiernos anteriores. Esa es la idea defendida, por ejemplo, por autores como Canamutto, quien afirma

“La literatura coincide en remarcar que estos nuevos gobiernos no representan una vuelta al populismo macroeconómico de viejo cuño, supuestamente irresponsable en su énfasis redistributivo, sino que han logrado mantener ciertos equilibrios básicos, como el externo y el público. De hecho, hay acuerdo en que estos gobiernos (salvo quizás el caso venezolano) no han apelado al Estado *contra* el mercado, sino que han diseñado su política social sobre la base de aceptar el mercado como institución básica de asignación de bienes y recursos, con una llamativa ausencia de medidas radicales”⁸⁷.

⁸⁶ Roberts, Kenneth, (2008), “El resurgimiento del populismo latinoamericano”, en: Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (editores), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, FLACSO-Ecuador, Quito, 2008, p. 58.

⁸⁷ Cantamutto, Francisco, “¿Giro a la izquierda? Nuevos gobiernos en América Latina”, en: *RELACSO* No. 2, FLACSO México, marzo de 2009, p. 6, 7.

Así las cosas, medidas como la nacionalización de empresas o el establecimiento de controles al consumo seguirían estando dentro de la lógica del mercado, más allá de la orientación social en la distribución de los recursos. Con relación a este último punto, Canamutto considera que estrategias como la división de la población en diversos segmentos ha dificultado la consolidación de redes solidarias amplias, “y dado que no se cuestiona la prevalencia del mercado para asignar los recursos, gran parte de la política social está orientada a rearticular los grupos objetivo de la intervención con el mercado laboral, como si éste no fuera causa originaria de los problemas que se busca atender”⁸⁸. Además, existiría también un alejamiento de los nuevos gobiernos latinoamericanos con los movimientos sociales, cuya movilización ayudó en muchos casos a la llegada al poder de los dirigentes de izquierda.

La postura crítica de los gobiernos alternativos en la región es seguida de cerca por autores como Jorge Castañeda, a quien se ha hecho constante referencia por su clasificación de la izquierda latinoamericana en “buena” y “mala” y que define la izquierda en general como

“esa corriente de pensamiento, política y *policy* que coloca el mejoramiento social por encima de la ortodoxia macroeconómica, la distribución igualitaria de la riqueza por sobre su creación, la soberanía política por sobre la cooperación internacional, la democracia (al menos cuando está en la oposición, aunque no necesariamente una vez que llegan al poder) por sobre la efectividad gubernamental”⁸⁹.

Sin embargo, en su parecer esta tendencia tiene dos matices en la región, pues, por un lado, se encuentra una izquierda “buena” que sería moderna, democrática, transparente y sensible y favorable al mercado, mientras que al otro lado hay una izquierda “mala”, que se caracteriza por ser populista autoritaria, corrupta, estatista y fiscalmente irresponsable, como ya se ha señalado en líneas anteriores. En esencia, el argumento de Castañeda contra la izquierda populista consiste en que sus políticas sociales y macroeconómicas resultan fiscalmente insostenibles en el largo plazo, pues el constante otorgamiento de subsidios y la actitud paternalista del Estado frente a los menos favorecidos, generará tarde o temprano un déficit insalvable en las finanzas públicas, lo que derivará en crisis económicas peores que las vividas bajo la sombra del neoliberalismo.

Es por esto que en su parecer “la izquierda (populista) debería abandonar sus últimos vínculos nostálgicos a la bandera de la soberanía nacional y la no intervención para en su lugar promover un nuevo orden jurídico regional e internacional”⁹⁰. Esta, por supuesto, es una crítica a la retórica nacionalista que se encuentra impregnada en los discursos de la nueva izquierda, la cual al autor en comentario le resulta arcaica y contraproducente en el ámbito de una economía globalizada, en la que “Estados Unidos es, hasta ahora, el mercado más grande del mundo”⁹¹, por lo que los países latinoamericanos deben apuntar hacia el norte si buscan volver a andar la senda del crecimiento económico. Este tipo de apreciaciones le han valido

⁸⁸ *Ibíd.* p. 9.

⁸⁹ Castañeda, *Op. Cit.*, p. 32.

⁹⁰ Castañeda, Jorge, *Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas*, Taurus, México, 2010, p. 242.

⁹¹ *Ibíd.* p. 92.

reproches, como el de Ardití, para quien la dicotomía de la izquierda planteada por Castañeda apunta a guiar la política exterior del gobierno norteamericano frente a América Latina para que se acerquen a los que militen en la izquierda buena y se contenga a quienes se acerquen a su contraparte⁹².

En un enfoque también contrario al de Castañeda, autores como James Petras, critican a las izquierdas moderadas y consideran más interesantes o, al menos más plausibles, las propuestas políticas de la izquierda radical. En particular, a Petras le llaman la atención las posibilidades que tienen los movimientos sociales con el Estado a partir de su relación con los partidos alternativos que, en su criterio, se han visto reducidas por la cooptación de aquellos por las organizaciones políticas socialdemócratas. Es decir, la censura que eleva ante la izquierda “buena” es el hecho de neutralizar la capacidad de movilización de los movimientos sociales, bien sea por el fraccionamiento de su base popular, la burocratización de sus dirigentes o porque se diluyen tras la consecución de avances coyunturales, mínimos y moderados. En últimas, considera que este tipo de izquierda es nociva para la agitación social, por lo que es necesario preguntarse si el acercamiento de las organizaciones sociales a los partidos socialdemócratas

“ha aumentado la calidad y cantidad de bienes, servicios y poder político recibido por sus electores, y ha ampliado su control del Estado y la economía [...] y si estas alianzas han mejorado la posición estructural de las masas en la economía, han creado nuevas formas de representación directa, han contribuido a aumentar su capacidad de movilización social, han reducido la fiscalidad regresiva y los aumentos arbitrarios en los precios de los transportes y servicios públicos o si por el contrario han llevado a la desmovilización de los movimientos, la cooptación de sus dirigentes, la división y la fragmentación”⁹³.

Y es que la defensa de los logros de la izquierda radical ha sido otro de los enfoques dados a los estudios sobre el fenómeno en la región. Tal es el caso de FLACSO Chile, que en conjunto con el *Woodrow Wilson International Center for Scholars*, presentó en 2009 un documento de trabajo⁹⁴ en el que registra la reducción de la pobreza y la desigualdad en aquellos países con gobiernos alternativos. Aunque desde el comienzo se advierte que “la tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad ha sido mucho mayor entre la izquierda populista que entre sus homólogos socialdemócratas”⁹⁵, lo interesante de este estudio es que demuestra con cifras que entre 2000 y 2006 la concentración del ingreso se redujo en al menos doce países de la región, que la pobreza extrema disminuyó en seis (Argentina, Brasil Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México) y que la pobreza moderada cayó en ocho (los previamente mencionados más Perú y Guatemala). El método comparativo que se aplica, en el que se incluyen variables tanto econométricas como de estadística descriptiva, le permite al autor sostener, a modo de conclusión, que “los regímenes de izquierda han logrado reducir la

⁹² Ver: Ardití, *Op. Cit.*, p. 234.

⁹³ Petras, James, “Social Movements and Alliance-Building in Latin America”, en: *The Journal of Peasant Studies*, vol. 35, núm. 3, p. 482.

⁹⁴ Arnson, Cynthia et al (compiladores), “Pobreza, desigualdad y la ‘nueva izquierda’ en América Latina” En: *Gobernabilidad Democrática y la ‘Nueva Izquierda’*, Woodrow Wilson Center Update on the Americas, FLACSO Chile, octubre 2009.

⁹⁵ *Ibíd.* p. 1.

desigualdad y la pobreza más rápido que los gobiernos anteriores y los contemporáneos que no son de izquierda. Los resultados (...) parecen indicar que los regímenes populistas son los más exitosos en materia de reducir la pobreza y la desigualdad”⁹⁶.

Ahora, bien sea que la izquierda latinoamericana en general, y en su tipología en particular, se haya estudiado con el fin de revisar sus antecedentes teóricos e históricos, describirla, criticarla o realizar proyecciones, no cabe duda del interés que despierta en la academia, como lo demuestran los pocos trabajos que se han referido aquí. No obstante, será necesaria la profundización en ellos y el acudimiento a otros enfoques, con el fin de obtener un panorama más estructurado de lo que representa el fenómeno de la izquierda en América Latina.

Conclusiones preliminares

La anterior reconstrucción puede llevar a concluir que la izquierda latinoamericana no está tan cerca de su fin como en algunos escenarios se ha planteado, sino que por el contrario, con base en los resultados de algunas elecciones presidenciales de los últimos años en diferentes países de la región, tiende a mantenerse. Este interesante fenómeno, que se inició en 1998 con el primer triunfo de Hugo Chávez, fue rápidamente extendido a muchos otros países de América Latina y durante más de una década logró sostenerse en la mayoría de ellos. Así, salvo los casos de Honduras, Paraguay y Brasil, donde los presidentes de izquierda democráticamente elegidos fueron cesados en sus cargos de manera abrupta, o de Argentina, Perú y Chile, donde la derecha recuperó el poder entre 2015 y 2017, en los demás lugares donde ya se experimentó, el “giro” a la izquierda latinoamericana persiste, con avances y retrocesos, los cuales son fruto tanto de sus aciertos, visibles especialmente en términos de políticas sociales, como de sus errores, que abren paso a las múltiples críticas de las que son objeto. Es por esto que, así como la primera década del siglo XXI estuvo marcada por esta tendencia, en la segunda siguió teniendo un protagonismo relativo. De allí la importancia de realizar este análisis, que además de revisiones descriptivas, también busca asumir una posición crítica.

Para este fin es necesario reconocer, como trató de hacerlo el presente capítulo, que el fenómeno de la marea rosa en América Latina es sin duda reciente, pero la izquierda política en la región cuenta con amplios antecedentes que al menos durante el siglo XX cobraron protagonismo en cada uno de los países que la conforman. Este protagonismo, según se propuso, se dio en un plano ambivalente, por una parte, con un elaborado contenido teórico que trató, en términos generales, de adaptar la retórica socialista clásica a las condiciones propias del subcontinente, en algunos casos desde una perspectiva nacional, generando en ocasiones un dualismo entre reforma y revolución. Tal aporte de ideas fue fundamental para que la izquierda desarrollara una faceta práctica, por otra parte, la cual asumió una igualmente bifurcada opción que se debatió entre el proselitismo y la movilización partidaria y social, de un lado, y el alzamiento en armas como forma de lucha, del otro. La definición de la estrategia de acceso al poder determinó una dicotomía recurrente en la literatura sociopolítica de la segunda mitad del siglo, entre la denominada izquierda democrática y la armada. Si bien esta

⁹⁶ *Ibíd.* p. 9.

última tuvo comprobaciones empíricas de triunfo, como sucedió en Cuba y Nicaragua, con el fin de la Guerra Fría perdió su pilar histórico, y por el mismo camino su legitimidad quedó en entredicho, por lo que la década de los 90 presencié la desmovilización de las organizaciones guerrilleras que permanecían en la región y abrió en muchas partes las posibilidades reales de poder a la izquierda democrática. Sólo en Colombia la insurgencia sobrevivió al siglo XXI y este será un factor determinante para evitar el ascenso de movimientos políticos alternativos.

Como se señaló en su momento, la victoria de Allende en 1970 fue la experiencia más importante de elecciones presidenciales ganadas por la izquierda en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX⁹⁷ y su pronto derrocamiento, cuando la insurgencia apenas aparecía en otros países, animada por el triunfo de la Revolución Cubana, contribuyó a la idea de que al poder sólo podría llegarse mediante las armas. En efecto, el ascenso y caída de la Unidad Popular en Chile marca un hito, el de la llegada al poder por la vía electoral, el cual sólo podrá repetirse casi tres décadas después de sangrientas y dolorosas dictaduras militares. Y sólo cuando la región se encaminó en un sistema democrático, tras la caída del muro de Berlín, la generalizadamente aceptada inutilidad de la lucha armada llevó a la apuesta plena por el juego electoral, en el que esta nueva ola de dirigentes alternativos supo salir adelante.

En su ejercicio, esta izquierda reciente en el poder ha tomado dos grandes tendencias, con las enormes salvedades que se han presentado acerca de las características de ambas corrientes que coexisten en varios países o la pertenencia simultánea del mismo país a una y/u otra dependiendo del elemento que se ponga bajo análisis. Con todo, hay quienes sostienen la insuficiencia de esta diferenciación y proponen que el éxito o fracaso de la izquierda en la región debe depender de su capacidad para profundizar la democracia. “Esto presenta a los gobiernos de izquierda latinoamericanos con una tarea común que, al mismo tiempo, requiere ser implementada de manera diferente en cada país. Los principios de la construcción democrática en un marco de democracia representativa son los mismos para todos los países, pero las prioridades para la ‘democratización de la democracia’ varían de acuerdo con el juego de las diferentes lógicas representativas en cada país”⁹⁸. A la hora de realizar una evaluación o balance de la marea rosa, tras casi veinte años de su germinación (como se tratará de llevar a cabo en el siguiente apartado del trabajo), este factor guardará especial relevancia.

⁹⁷ Teniendo en cuenta que Bosch también lo hizo en República Dominicana en 1963 y Arbenz en Guatemala en 1950, con las particularidades que en su momento se señalaron.

⁹⁸ Panizza, *Op. Cit.*, p. 88.

Capítulo II

Representación y crítica de la izquierda

Introducción

En el capítulo precedente se llevó a cabo una breve recapitulación del proceso de ascenso de gobiernos de izquierda reciente en la región, recabando sobre los antecedentes que esta tendencia política había tenido en América Latina durante el siglo XX, bien a través de planteamientos teóricos, o bien mediante el ejercicio de la práctica política, en este último caso de manera electoral o con el uso de las armas. Los procesos por los que movimientos alternativos se movilizaron de la mano de organizaciones sociales o bajo estructuras militares, en ambas vías dirigidos a sustituir el gobierno vigente, que por lo general estaba en manos de partidos políticos y/o élites tradicionales, dan cuenta de que la historia de la izquierda en esta parte del mundo es bastante amplia, por lo que la “marea rosa” de las últimas dos décadas es apenas una parte de ella.

Con todo, es preciso indicar que ese “giro” a la izquierda sólo fue posible en el subcontinente luego de las tristes experiencias arrojadas por las dictaduras militares en buena parte de los países de la región, que tras el ocaso de la Guerra Fría y la dilución del fantasma del comunismo internacional, dejaron de ser necesarias a los intereses de contención de esa amenaza. Así, la transición a la democracia, la desaparición del socialismo real y la propia pérdida de interés de los Estados Unidos en estos países, facilitaron el posicionamiento de propuestas políticas alternativas que surgieron o fueron apoyadas, más allá del contenido de sus tesis programáticas, por representar una crítica contra una inveterada clase dirigente alejada de los problemas de sus ciudadanos y contra el modelo de apertura que generó estragos en las economías nacionales.

Justamente por haber acaecido como movimientos reactivos o de rechazo a tradiciones políticas o a formas de gobernar que habían hecho carrera en el continente, más que como plataformas ideológicas consolidadas, es que vale la pena preguntarse, en primer lugar, qué debe entenderse por izquierda en la actualidad y cómo esa comprensión debe ser asimilada en América Latina. El problema de la definición no pierde relevancia, toda vez que es con base en ella que se ha venido afirmando que la mayoría de los países de la región han tenido gobiernos “diferentes” en los últimos años. Sin embargo, parece claro que la disertación teórica clásica que confería características precisas a cada una de los extremos del espectro político ha perdido vigencia, por lo que buena parte de estas cualidades han variado y así, disímiles expresiones políticas (como el progresismo, por ejemplo) pueden ser calificadas de una manera u otra, o simplemente la dicotomía recurrente ya no es suficiente para dar cuenta de la evolución de la realidad en un mundo mucho más complejo después del fin del conflicto Este-Oeste.

En segundo lugar, la claridad que se pueda tener sobre los elementos distintivos de los gobiernos de izquierda permite revisar con mayor énfasis las medidas que los distinguieron y que, bien sea de manera genuina o al abrigo del eco de los grandes medios de comunicación, han suscitado críticas desde diferentes sectores, tanto políticos como académicos. Aunque en su mayoría estos reproches se han dirigido contra gobiernos pertenecientes a la tendencia

populista o radical de la izquierda latinoamericana, la corriente socialdemócrata o moderada tampoco ha estado exenta de recriminaciones, las cuales, a grandes rasgos, se han circunscrito al manejo de la política macroeconómica, las violaciones a los Derechos Humanos, la concentración del poder por vía de reformas constitucionales y en algunos casos también, a la orientación de la política exterior. Como respuesta, estos gobiernos, además de desvirtuar varias de las críticas que se les han puesto de presente, pueden dar cuenta de sus logros en materia social, provocando una dinámica de flujos y reflujos en la región alrededor de sus resultados.

En tercer lugar, las disquisiciones previas deben generar un debate sobre la democracia en general, primero, porque es a través de ella que estos gobiernos pudieron darse en la región, después de décadas de negación por obra de las dictaduras o del cierre a la participación en el sistema político, y segundo, porque, tal como lo expuso Panizza, el fortalecimiento de la democracia debe ser el objetivo primordial de toda administración que se repunte de izquierda. Es por ello que se dedicará un acápite a reflexionar sobre el sometimiento definitivo de los movimientos alternativos a la lógica electoral, que por una parte, les da la posibilidad de ganar o perder en unos comicios, y por otra, hace que su postura como gobierno u oposición no sea permanente, lo cual les permite atenuar su esencia crítica y avanzar hacia esquemas propositivos programáticos, esto es, estar mejor preparados para gobernar cuando llegue su turno.

Así las cosas, el presente capítulo pretende servir de marco teórico respecto de lo que la izquierda reciente ha sido en América Latina, tanto en lo teórico como en lo práctico, en este último caso con sus logros y desaciertos, de manera que resulte útil para establecer un paralelo con su recorrido en Colombia, desde las manifestaciones del siglo XX hasta el escenario de post-conflicto que se avizora con el fin de las FARC a partir de 2017.

1. ¿Qué es la izquierda hoy? ¿Qué es en América Latina?

Con el fin de entrar a hablar sobre los recientes gobiernos de izquierda en América Latina es necesario remontarse primero al origen del vocablo “izquierda” para pasar luego a tratar de establecer unas características que permitan clasificar un modelo político, tanto a nivel discursivo como de implementación programática, como izquierdista. Más adelante, es importante revisar si la tendencia que se ha experimentado en esta región del mundo tiene rasgos particulares que permitan elaborar una nueva tipología, es decir, precisar si puede hablarse, en efecto, de una (o varias) izquierda latinoamericana.

En relación con la procedencia de la distinción entre izquierda y derecha en términos políticos, valga señalar que históricamente se ha aceptado que esta división proviene de los días de la Revolución Francesa, cuando el hemiciclo de la Asamblea Nacional era ocupado en cada uno de sus lados por una facción política diferente. Tras el estallido de los acontecimientos a mediados de 1789, las tendencias políticas comenzaron a vislumbrarse desde temprano. En una etapa posterior de la Revolución, las facciones políticas no sólo se radicalizaron, sino que también evolucionaron en sus maneras de realizar proselitismo. De esta manera, a través de diarios y en las tertulias adelantadas en los clubes, se fueron denotando con mayor claridad las tendencias que serían rivales en la configuración de la

nueva Francia. Así, durante la Convención, los *Girondinos*, quienes representaban el ala conservadora de los militantes revolucionarios, defendiendo ideas como el mantenimiento de los valores legales tradicionales y un eventual retorno a la monarquía, se ubicaban a la derecha del escenario, visto desde el punto en que se situaba el presidente de la Asamblea. Por su parte, los *Jacobinos*, quienes propugnaban por un desarrollo radical de los principios que inspiraron la Revolución, se establecieron al lado izquierdo del recinto. En el centro quedaba un grupo imparcial, comúnmente conocido como los Marsima.

Para 1814, con la Restauración, la diferencia entre izquierda y derecha terminó de consolidarse, cuando en la Asamblea Legislativa aquellos grupos que no estaban de acuerdo con el retorno a la monarquía y que promovían el mantenimiento de los ideales republicanos que orientaron el proceso revolucionario, se ubicaron definitivamente a la izquierda del hemiciclo, desde la perspectiva del presidente del cuerpo colegiado, mientras que las demás facciones se situaron a la derecha y pasaron a denominarse coloquialmente como de este espectro político. Ya desde entonces se advertía que el izquierdismo sería contradictor de las posturas conservadoras, aunque en un principio al abrigo de la fuerza impregnada por las ideas del liberalismo clásico.

No obstante, con el tiempo, si bien la noción de izquierda permanecía como antagonista de las posiciones políticas conservadoras, fue alejándose de las ideas liberales para acercarse al pensamiento socialista, emergente y en boga para mediados del siglo XIX. En este sentido, afirma Emmanuel Berl que “la izquierda reunía a los oprimidos, los humildes, para ellos exigía la libertad, pretendía defender a los pequeños de los potentados, oponía el número a la fuerza”, pero a la vez, en un sentido crítico, reprocha que la izquierda “admite que las democracias populares impongan a sus obreros, si es preciso, unos ritmos de trabajo similares a los que imponía el capitalismo inglés (...) Comprende o adivina, que el progreso social depende más de la producción que de la repartición y de la equidad. En una palabra, la izquierda está dividida entre su mística de la producción y su mística de la justicia”⁹⁹.

De manera que la izquierda se fue relacionando como un discurso contrario a la derecha, aunque ya no desde un punto de vista liberal, como se observó en los inicios de la distinción, durante la Revolución Francesa, sino ahora en una postura más radical y distante del conservadurismo. Además, la izquierda resultaba ahora crítica y contraria de la misma esencia liberal, la cual era considerada como propia del espíritu burgués y en últimas del modelo capitalista. Es por eso que con la irrupción del socialismo como doctrina política, desarrollado mayormente desde una perspectiva marxista, la noción de izquierda adquirió un nuevo significado, por el que se establecía como contraria al establecimiento, que representaba la derecha en sus fundamentos, bien fuera este de orientación conservadora o liberal. De igual forma, bajo este nuevo significado, el concepto de revolución tenía ahora una carga ideológica distinta, entendida como un motor histórico de cambio, que si bien produjo la era capitalista actual, era necesario que se presentara de nuevo con el fin de dar paso a una era socialista. La nueva revolución, como pronto se vería, podría darse por la vía armada, como se inició en muchos lugares alrededor del mundo - entre ellos América Latina - o por la vía democrática-electoral, que fue el camino elegido por la socialdemocracia europea, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial.

⁹⁹ Berl, Emmanuel, *Essais. Les temps, Les idées, Les hommes*, Juillard, París, 1986, p. 115.

Ahora bien, como acertadamente lo resalta García Mateo, en un comentario a la obra de Leszek Kolakowski, “el papel de la izquierda no es sólo negar o destruir lo que la derecha defiende, sino a la vez construir una alternativa”¹⁰⁰. Por este motivo, la izquierda deja de ser la simple negación o el antónimo de la derecha para pasar a constituirse en una posibilidad, que a nivel discursivo está atravesado por la utopía, la cual es “un estado de la conciencia social correspondiente a un movimiento que busca transformaciones radicales de la sociedad, sin llegar, del todo, a alcanzarlas, sino quedando en una forma idealizada y mistificada que impulsa el cambio de las realizaciones concretas”¹⁰¹. Es por esto que la izquierda se erige como una manifestación del deber ser, esto es, como una representación de la sociedad deseada, en términos de equidad y justicia social, lo cual exige el cambio de paradigmas económicos, políticos y también culturales. De este modo, la izquierda se constituye, por tanto, en una pauta política deontológica.

Sin embargo, restringir el ámbito de la izquierda a lo estrictamente discursivo sería negar sus posibilidades prácticas, incurriendo en contradicción con sus principios de apego al materialismo histórico, que como se vio, constituye su base teórica tras la irrupción del marxismo en el siglo XIX. Por ello, la eventualidad en la realización material de sus propuestas implica que la izquierda también goce de un contenido programático que se desarrolla en la concreción de las “políticas” que la fundamentan. De allí que, con independencia de la estrategia de acceso al poder por la que se haya optado, la izquierda tiene una vocación de gobierno, por lo que su papel no se limita a protestar en contra o criticar el establecimiento. En otras palabras, su rol no es meramente contestatario, ni su lugar es por naturaleza la oposición, sino que persigue apoderarse del sistema político a fin de desplegar en él una agenda propositiva.

Ahora bien, tanto como discurso del deber ser social y como elemento práctico latente, la izquierda guarda una importante relación con el progresismo, lo cual se debe, en parte, a los fundamentos teóricos marxistas que dominaron en sus orígenes y que conciben la historia a manera de espiral, en el que cada estadio histórico nuevo es, de hecho, más desarrollado que el anterior. De allí que el “inevitable” paso de la economía de mercado al socialismo, mediado por una revolución, se convierte en una inexorable necesidad causada por el inatajable avance de las fuerzas productivas. Más allá de este tipo de consideraciones, la izquierda, al menos en sus cimientos originales, apunta a un progreso permanente de la sociedad¹⁰².

No obstante, en la sociedad global parece advertirse una separación entre izquierda y progresismo, que se da a nivel filosófico en cuanto aquella aparece como crítica del establecimiento y propositiva del cambio de régimen, es decir, aboga por una sustitución de los elementos tradicionales de poder a cambio de una nueva sociedad. No obstante, en la era postmoderna y tras la caída del socialismo real, la perspectiva economicista, propia del marxismo, es remplazada por una importancia creciente de la cultura, como campo de lucha

¹⁰⁰ García Mateo, Rogelio, “¿Cuál es la filosofía de la izquierda?”, en: *El Ciervo*: revista mensual de pensamiento y cultura No. 352-353, Barcelona, 1980, p. 21.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Al respecto, vale la pena anotar que, en tanto productos de la Modernidad, tanto el liberalismo como el marxismo se basan en una idea de progreso del tipo “el presente es mejor que el ayer, pero el futuro será mejor que hoy”, idea que resulta esencial en el proyecto moderno.

del pensamiento político y en este nivel, el izquierdismo aboga por una posición de resistencia. Así, la lucha de clases ha dado paso a una lucha de culturas. Empero, esta sólo se puede hacer apelando a posturas tradicionales, conduciendo entonces a una aporía ocasionada por la imposibilidad de disociación entre el estado de cosas cultural y el deber ser de la sociedad, disgregación que sólo sería posible si se deslegitimara lo primero, pero es este nuevo escenario (la cultura) en el que la izquierda desarrolla principalmente su disputa contra las demás posiciones políticas. Como bien lo señala Grañó Ferrer,

“Por esta razón, la izquierda se ha visto envuelta en una situación paradójica. En consecuencia, con su diferenciación entre el *statu quo* y el deber ser social, su posición constitutiva en el clivaje tradición/progreso - tal y como corresponde a su herencia ilustrada - está claramente en el polo del progreso, de la autonomía, de la emancipación. Sin embargo, su nuevo proletariado, las naciones no occidentales, etc., se sitúan en el extremo opuesto de este mismo clivaje, a saber, en la más absoluta tradición. Tenemos entonces que la izquierda defiende a sociedades ultratradicionales frente a otras secularizadas, y comienza a ver problemática su posición clásica respecto al dilema autonomía-tradición...”¹⁰³

Al respecto, en relación con la suscitación reciente de gobiernos de izquierda en América Latina elegidos mediante voto popular, Eduardo Gudynas plantea una separación similar entre aquella y el progresismo en la región, entendiendo este como una “fe en el progreso, con sus particulares modos de organizar la economía, las relaciones sociales y la apropiación de los recursos naturales”¹⁰⁴. Esta divergencia se da en diferentes ámbitos, especialmente en la concepción del modelo de desarrollo, que en la visión izquierdista latinoamericana busca ser alternativo, ajeno a las concepciones convencionales, guiadas, primero por el papel prevaleciente otorgado a estos países como proveedores de materias primas, y luego por el auge de la apertura económica acontecido desde los años 80 y con mayor fuerza en los 90. Por el contrario, el progresismo “ha abandonado en buena medida este debate y acepta las bases conceptuales del desarrollo. Festeja el crecimiento y los extractivismos (...) prevalece la inserción en el capitalismo”¹⁰⁵.

Otro escenario donde se observa el alejamiento de izquierda y progresismo es en la concepción de la democracia, pues si bien para la primera la apelación a las urnas se convirtió en la estrategia predilecta, con abandono total de la vía armada, la experiencia democrática no se agota en el ejercicio del voto sino que apunta a una profundización de la misma a través de mecanismos de participación que la hagan más abierta e incluyente. En cambio, el progresismo “se contenta con el instrumento electoral clásico, las elecciones. Profundiza la democracia delegativa y llega a extremos hiperpresidencialistas”¹⁰⁶.

¹⁰³ Grañó Ferrer, Guillermo, “De la izquierda clásica a la nueva izquierda: la cuestión de Occidente”, en: *Cuadernos de Pensamiento Político* No. 23, Julio-Septiembre, 2009, FAES, Madrid, p. 209.

¹⁰⁴ Gudynas, Eduardo, “10 tesis sobre el ‘divorcio’ entre izquierda y progresismo en América Latina” en: *Diario Página Siete* www.paginasiete.bo/a/plantillas/5/includes/modulos/imprimir.asp?id=13367&tip=noticia (Consultada el 10 de febrero de 2015).

¹⁰⁵ *Ibíd.*

¹⁰⁶ *Ibíd.*

Además, el divorcio referido se encuentra también en espacios como los Derechos Humanos, fundamentales para la izquierda, pero relativizados por el progresismo; el orden constitucional, que para la primera debía ser el marco básico compartido, mientras que para el segundo se ha transformado en un instrumento adaptable a las necesidades del Jefe de Gobierno; la integración, que apuntaba al principio a sinergias políticas y conformación de bloques económicos alternativos, pero que luego se ha diluido en compromisos bilaterales, competencia entre países y aceptación generalizada de la gobernanza comercial global; la independencia y la crítica, al comienzo con una estrecha relación con los intelectuales y el respeto por sus opiniones, pero más tarde con poca aceptación de los reproches y en algunos casos censura y persecución.

A partir de las consideraciones previas, es posible arrojar entonces la hipótesis de que la izquierda en América Latina, en términos generales, alberga dos facetas, reconocibles desde un punto de vista cualitativo y temporal. En primer lugar, una caracterizada por el manejo de un discurso de avanzada y con propuestas radicales de cambio en los modelos tradicionales de los respectivos Estados donde se presentaban. Esta faceta se dio con el impulso inicial que traían los movimientos y/o líderes que lograron llegar al poder por primera vez en varios países de la región. Tal izquierda “original”, siguiendo la tesis de Gudynas, se destacaba entonces por proponer un modelo alternativo de desarrollo, avanzar hacia un sistema de democracia participativa, lograr una extensión en el reconocimiento y garantía de derechos a los ciudadanos, establecer un nuevo marco de reglas de juego de la sociedad - plasmado en la constitución -, luchar enconadamente contra la corrupción en el Estado, mantener una relación estrecha y activa con los movimientos sociales, apostar por una justicia social a todos los niveles, fomentar la integración política y económica regional y garantizar la diversidad y la autocrítica.

En segundo lugar, se ha generado una izquierda “progresista”, posterior a la original, y que se presenta como un producto del ejercicio práctico del poder y de la extensión en el tiempo, a veces indefinida, de los gobiernos izquierdistas. Este progresismo se caracteriza por adaptarse al modelo de desarrollo dominante, conformarse con la democracia representativa tradicional y concentrar el poder en cabeza de la figura presidencial, relativizar los Derechos Humanos, moldear la constitución a lo requerido por el gobernante de turno, incurrir en casos de corrupción o cooptación del Estado similares a los que se presentaban en los gobiernos tradicionales anteriores, estar distanciada del movimiento social, asumir la equidad sólo en términos de redistribución del ingreso, desacelerar los procesos de integración y estimular la competencia nacional en los mercados externos, y ser intolerante a la crítica, llegando incluso al acoso de los opositores intelectuales o políticos.

Lo anterior podría conducir a dos conclusiones preliminares adicionales: por una parte, considerar que la izquierda latinoamericana habría perdido su esencia, que se expresa en los rasgos particulares “originales” que se mencionaron, los cuales, como propuestas, constituyeron sus posibilidades reales de triunfo en los países donde llegó al poder. Desde este punto de vista, la izquierda ya no sería más izquierda sino una tendencia progresista, entendida en el sentido anotado. Pero por otra parte, puede asumirse que la izquierda simplemente se ha adaptado a las condiciones históricas correspondientes, como consecuencia inevitable de la experiencia en el ejercicio del poder, lo cual ha mostrado las limitaciones prácticas de una implementación acelerada de sus contenidos programáticos,

pero que a pesar de las atenuaciones, sigue representando en el fondo un discurso y una agenda alternativos, contrarios a lo que personifica la derecha. Como el mismo Gudynas lo reconoce,

“El progresismo nació como una expresión reciente en el seno de la izquierda latinoamericana. Maduró como una particular mezcla e hibridización de distintas condiciones culturales y políticas, pero quedó enmarcado en las ideas occidentales del desarrollo. No es una postura conservadora ni neoliberal, lo que explica que sus defensores lo presenten como una expresión de izquierda, y como ha sido exitoso en varios frentes, cuenta con apoyos electorales”¹⁰⁷.

De igual manera, es importante subrayar que el progresismo no se asume siempre bajo una connotación negativa. Por ejemplo, González Acanda lo defiende en términos cercanos a los que servirían para referirse a la izquierda original que se ha descrito en líneas precedentes, cuando afirma que:

“Un pensamiento progresista ha de ser contrahegemónico. No basta sólo con que busque formas de resistencia, sino que tiene que proponer alternativas válidas, por imaginativas y creadoras, en un mundo en que el cambio no es una opción sino una exigencia (...) Pensamiento crítico, totalizador, decosificador, antihegemónico. Aristas distintas pero orgánicamente presupuestas que califican la voluntad de ser progresista en materia de pensamiento”¹⁰⁸.

En resumen, la aparente contradicción entre izquierda y progresismo, tanto a nivel filosófico como en el contexto latinoamericano, se ha resuelto, bien por la vía de la bifurcación, que contrapone una visión original, asimilada como la única y verdadera izquierda, frente a una posición progresista que se alejaría de la anterior y por momentos se desdibujaría en tanto discurso y práctica izquierdista. O bien, la divergencia se resuelve por medio de la aceptación del progresismo como una expresión válida de la misma izquierda, que se ha adaptado a unas circunstancias históricas concretas y como resultado del ejercicio real del poder.

Y es que en todo caso, aun tratándose de la izquierda latinoamericana “genuina”, sus problemáticas han tenido que ser adaptadas. No sólo por la emergencia de la cultura como escenario preponderante de lucha en el ámbito de la globalización, en detrimento de la economía¹⁰⁹, sino por los acontecimientos que la precedieron o la rodearon y que implicaron una nueva realidad a ser analizada, con particular importancia por los efectos generados en la región.

¹⁰⁷ *Ibíd.*

¹⁰⁸ González Acanda, Jorge Luis, “¿Qué significa ser progresista en materia de pensamiento?” en: *El Catoblepas: Revista crítica del presente* No. 10, Madrid, Octubre de 2002, p. 5.

¹⁰⁹ Gramsci ya había tenido el mérito de demostrar que la *superestructura* (el metarrelato que en la prédica marxista aseguraba la dominación ideológica de las clases oprimidas, del que hacían parte la cultura, la religión, la educación, la política y otros sistemas sociales, y se contraponía a la *base*, como escenario de las relaciones económicas) era un medio más efectivo que la economía para ejercer dominación y que por este motivo la emancipación sólo se lograría por el desarraigo de los instrumentos ideológicos. Al respecto, ver: Gramsci, Antonio, *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, p. 124 y ss.

Resulta incontrovertible que para la década de los 90 el mundo ya no era el mismo de la Guerra Fría. Tras la caída del muro de Berlín y una posterior generalización del paradigma neoliberal de la economía, se vislumbraba, al menos teóricamente, la consolidación de un modelo político, económico y cultural con tendencia a ser permanente. El fenómeno de la globalización, que siguió al fin del socialismo real, pretendía establecer una visión unívoca y perenne del mundo, presumiéndolo libre de conflictos ideológicos. De allí que se hubieran sostenido tesis como la célebre del fin de la historia¹¹⁰, que afirmaba la estabilización de la sociedad mundial alrededor de los valores liberales y democráticos.

Sin embargo, la historia llegaría pronto a desvirtuar esa creencia, pues al resurgimiento de los nacionalismos y la emergencia de nuevas luchas religiosas, vino aparejado un choque cultural y una resistencia frente a los modelos uniformadores de Occidente. Sin contar con las disímiles visiones frente a la democracia, los efectos de un sistema global de mercado sobre las pequeñas economías, y aun los estragos del mismo en países desarrollados, generó el espacio suficiente para oponer, por un lado, críticas en cuanto a las bondades del modelo en general, y por otro, alternativas en las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. De este modo, la premisa de “otro mundo es posible” se convirtió en la frase plan de múltiples movimientos sociales alrededor del mundo, y en América Latina, debido a una acumulada experiencia de dependencia y subdesarrollo, sumada a las recientes consecuencias negativas del neoliberalismo, encontró un excelente caldo de cultivo.

Es por eso que la izquierda, que estuvo abrigada a la luz del socialismo desde mediados del siglo XIX, debía utilizar ahora un discurso, que en primer término fuese modulado, esto es, que ya no apelara a la retórica radical tradicional propia del lenguaje marxista, abandonando de paso muchas de sus categorías básicas de análisis, propósito en el que coincidieron algunos reconocidos intelectuales latinoamericanos de izquierda¹¹¹. Aunque esto implicara una posible debilidad o inconsistencia desde el punto de vista teórico-argumentativo, aunado a la que ya se evidenció entre izquierda y progresismo - atada a la disonancia tradición/progreso que ofrecía un sistema global donde la cultura prevalece sobre la economía como escenario de lucha - y sin contar con las discrepancias que en el plano metodológico traía consigo una amalgama entre planteamientos académicos socialistas y preocupaciones propias latinoamericanas, prevaleció un manejo discursivo pragmático, que resultó eficaz al llevar su mensaje al público objetivo.

Por otro lado, era necesario que la izquierda también ofreciera nuevas propuestas concretas, que aparte de hacer contrapeso a las acostumbradas temáticas de las habituales organizaciones políticas de sus respectivos países, posaran como críticas de los problemas acarreados por esa inveterada dirigencia, y además se tornaran propositivas, mostrando soluciones prácticas, relativamente prontas y en esencia alternativas a los repetidos y

¹¹⁰ Al respecto, véase: Fukuyama, Francis, *El fin de la historia y el último hombre*, Plantea, Barcelona, 1998.

¹¹¹ Entre ellos se puede mencionar, sólo a manera de ejemplo, a Ernesto Laclau, quien propone la superación de categorías marxistas clásicas como la de clase, Estado y hegemonía, por considerarlas limitantes, sin que ello implique un abandono o negación total del marxismo. Al respecto, véase: Laclau, Ernesto, “El pueblo, lo popular y el populismo”, en: *Pensando el mundo desde Bolivia: I Ciclo de Seminarios Internacionales*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2010, p. 141-154.

fracasados intentos del establecimiento. En este punto, la censura permanente al modelo económico imperante y la propuesta de un sistema alternativo resultó determinante para una asimilación eficaz del discurso y del contenido programático. Como lo señala Panizza, al tratar de explicar el ascenso de gobiernos izquierdistas en la región, “para la oposición de izquierda, que había usado los ataques al llamado modelo neoliberal como un parche que le permitió sobrellevar sus propias falencias ideológicas, la coyuntura económica le sirvió para darle resonancia electoral a sus promesas de cambio”¹¹². Sin embargo, como él mismo lo advierte, “prometer el cambio no significa que los partidos de izquierda hayan llegado al Gobierno con un modelo alternativo de cambio, ni que ese cambio fuera necesariamente del tipo y de la dimensión del que las bases sociales de la izquierda anticipaban o que la izquierda había postulado históricamente”¹¹³.

En efecto, es preciso reconocer que tras la obtención de triunfos electorales y una vez instalados en el poder presidencial, muchos de los gobiernos de izquierda en América Latina, comenzaron a percibir diferencias entre lo que se había visualizado en tiempos de campaña y lo que efectivamente se empezó a implementar. Uno de los casos característicos de esta disonancia se ve en el cubrimiento de derechos sociales, por la vía del gasto público, ya que su aumento no fue ampliamente significativo en relación con administraciones anteriores. Contrario a lo que pudiera pensarse, la mayoría de los gobiernos de izquierda en la región han tenido un manejo responsable de las finanzas públicas y no han incurrido en un egreso desaforado de sus recursos con el fin de cubrir las necesidades básicas de su población. Esto no quiere decir que la inversión social no haya sido mayor a la que se tuvo en épocas pasadas, sino que el crecimiento de la misma o la ampliación de la cobertura en elementos como la salud, la educación, la nutrición o la vivienda no se dio en un principio al ritmo que se esperaba.

Otras variables en que las posibilidades avasallaron a las expectativas fueron la reducción del desempleo y la pobreza y la distribución equitativa del ingreso. Con relación a lo primero, si bien la tasa se redujo a un dígito en la mayoría de países de la región, lo cual “es un logro básico que indica que el auge, por lo menos en una parte, contribuyó a mejorar la ocupación”¹¹⁴ también es cierto que “aunque los desocupados hayan disminuido eso no quiere decir que la calidad del trabajo haya sido adecuada”. En cuanto a la reducción de la pobreza, esta ha sido mayor en aquellos países cuyos gobiernos de izquierda se han considerado como “radicales” o “populistas”, en relación con los moderados o socialdemócratas, como se verá más adelante. Igual sucede con la distribución, que ha presentado leves mejorías en países en donde se han instalado gobiernos alternativos, todo lo cual será objeto de análisis en el cuerpo desarrollado del presente capítulo.

En el mismo sentido de los fenómenos precedentes, la nacionalización de empresas, tanto industriales como explotadoras de recursos primarios, no implicó que aquellas fueran más productivas o competitivas ni contribuyó a un mayor crecimiento de la economía nacional, convirtiéndolas en algunos casos en fortines burocráticos del partido de gobierno y

¹¹² Panizza, *Op. Cit.*, p. 79.

¹¹³ *Ibíd.*

¹¹⁴ Delgado Selley, Orlando, “Respuestas ante la crisis: Estados Unidos, América Latina y sus gobiernos” en: *Revista Economía UNAM* Vol. 7 No. 21, México, 2011, p. 93.

favoreciendo así prácticas de corrupción. Y en términos generales, el manejo estricto de la política monetaria, el control al consumo y la lucha contra los monopolios y oligopolios sectoriales, todos ellos medidas primordiales de los gobiernos de izquierda en América Latina, no han podido suscitar la emergencia de un modelo alternativo de desarrollo, pues en esencia el Estado continúa figurando como un mero regulador del mercado, en el que él mismo a veces participa, pero sin un papel preponderante en el manejo de la economía, como pudo haberse esperado en los días previos a los triunfos electorales de los movimientos que los llevaron al poder.

Habría que discutir si las disimilitudes entre lo prometido y lo desarrollado estuvieron atravesadas por el manejo pragmático que tuvo el discurso, simplemente como parte de una estrategia de acceso al poder, o si fue en cambio producto de la dificultad que implica el paso de la teoría a la práctica, cuando una tendencia política, que tradicionalmente estuvo acostumbrada a ejercer oposición, se encontró pronto frente a la posibilidad material e inmediata de oficiar como gobierno. Quizá este “choque de frente” con la realidad conllevó a la modulación de las posiciones, la desaceleración en la implementación de medidas o a la demora en la consecución de los resultados esperados al comienzo de las administraciones.

2. Crisis y relegitimación (recesos y continuidades)

En el año 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, el presidente provisional de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a elecciones presidenciales en las que él mismo fungió como candidato y a la postre resultó vencedor, para un período de seis años más. Sin embargo, a pesar de la reciente desaparición del comandante, lo que le permitió una relegitimación internacional de su imagen, la victoria electoral de Maduro se dio con apenas un 50,66% de los votos, frente a un 49,07% del candidato opositor¹¹⁵. El estrecho margen que le permitió al PSUV mantenerse en el poder presidencial de Venezuela dio pie para pensar, si bien no tanto en una crisis del modelo contemporáneo de socialismo, sí en un desgaste de los gobiernos alternativos de izquierda en la región, ante su aparente debilitamiento en el país que lo representa por excelencia.

No obstante, las sucesivas reelecciones o regresos al poder de la izquierda en distintas partes de América Latina, parecieron demostrar lo contrario. En el caso de Chile, por ejemplo, a finales del 2013 la expresidenta Michelle Bachelet resultó elegida como nueva mandataria, luego de un gobierno de centro-derecha (Sebastián Piñera) que le sucedió tras su paso por el Palacio de la Moneda entre 2006 y 2010 y luego a partir de 2018. De igual manera se experimentó en Brasil en 2014, con el nuevo triunfo (también apretado) de Dilma Rousseff, entonces presidenta en ejercicio y candidata del PT, quien a su vez siguió en 2011 a Lula Da Silva, quien fuera presidente desde 2003. En Bolivia, Evo Morales fue también reelecto, por segunda vez en 2014, tras sus dos primeras administraciones, iniciada la primera en 2006 y la segunda en 2010. Y en Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ya fuera también presidente de ese país entre 2005 y 2010, se alzó con la victoria en representación del Frente Amplio para gobernar hasta 2020, sucediendo la reconocida gestión de José Mujica.

¹¹⁵ Fuente: Consejo Nacional Electoral. Disponible en:
http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html?

Experiencias similares se vivieron en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa fue reelegido en 2013 para un período de cuatro años más, luego de haber llegado a la presidencia de su país por primera vez en 2006 y haber sido reelecto en 2009. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández asumió el poder en 2007, tras la muerte de su esposo Néstor Kirchner, quien a su vez había sido elegido en 2003. Para 2011, Fernández alcanzó la reelección, por lo que su período se extendió hasta el 2015. En Nicaragua, Daniel Ortega ejerció como Jefe de Estado entre 1985 y 1990 durante la *Reconstrucción Nacional* y una vez restablecidas las elecciones libres y periódicas, tuvo intentos fallidos de llegar a la presidencia en 1990, 1996 y 2001, pero en 2006 fue elegido con un 37,99% de los votos, porcentaje que aumentó a 62% en las elecciones de 2011 y a 72,5% en las de 2016¹¹⁶, obteniendo un nuevo mandato para el período que va hasta el 2021. Mientras tanto, en El Salvador, el FMLN retuvo la presidencia tras las elecciones de 2014.

Como se vio, en otros países de la región también se han tenido gobiernos de izquierda, los cuales fueron interrumpidos de forma abrupta, por acciones políticas o militares llevadas a cabo por distintas fuerzas al interior de cada Estado. Tal es el caso de Honduras, donde el presidente elegido para el período 2006-2010, Manuel Zelaya, luego de un acercamiento al gobierno de Chávez y tras facilitar el ingreso de su país al ALBA, fue derrocado mediante una maniobra golpista a mediados del 2009, lo que le valió a Honduras una suspensión en su membresía a la OEA, que se extendió hasta 2011. Por su parte, en Paraguay el ex obispo Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales en 2008 para un período de cinco años. No obstante, en junio de 2012, la Cámara de Diputados de su país le realizó un juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones, proceso que culminó con su destitución, al amparo de una norma constitucional que lo permitía. El acto, que fue descalificado como antidemocrático por algunos Estados de la región, le mereció a Paraguay su suspensión del Mercosur y de la UNASUR durante casi un año. Algo similar aconteció en Brasil en 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue primero suspendida por el Congreso y luego destituida, en un nuevo caso de golpe de Estado parlamentario. Tras estos sucesos, en ninguno de dichos países ha regresado la izquierda al poder.

Mención especial merece el caso de Perú, donde el presidente Ollanta Humala fue elegido en 2011 con un discurso crítico del modelo económico neoliberal y de los partidos políticos tradicionales en su país. Además, contó con el apoyo de organizaciones políticas de izquierda, varias de las cuales ya lo habían acompañado en su aspiración frustrada de 2006¹¹⁷. Empero, una vez en el poder, Humala moderó sus posiciones, tanto que es posible cuestionarse si se debe o no encasillar en la tendencia que se viene revisando. En todo caso, estuvo a la cabeza del gobierno hasta 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia, a la que renunció en marzo de 2018.

El anterior recuento muestra que el fenómeno de la izquierda en América Latina, aunque matizado, sigue vigente a pesar de su aparente deterioro y de las recurrentes críticas que se le endilgan. Ahora bien, si estos gobiernos han sido merecedores de tantos reproches, ¿cómo

¹¹⁶ Ver: <http://registronacional.com/nicaragua/elecciones/>

¹¹⁷ Entre ellas el Movimiento Nueva Izquierda, Patria Roja, el Partido Comunista del Perú y el Partido Socialista.

es que en algunos casos logran sostenerse, incluso con amplio respaldo, o relegitimarse a través de una nueva victoria luego de haber estado alejados del poder por un tiempo mientras la presidencia fue ejercida por un partido político opositor? La explicación podría encontrarse en que si bien pueden ser objeto de graves reparos, también han logrado importantes resultados, lo que crea un proceso de avances y retrocesos que, en una lógica de gobierno-oposición, los reafirma en el juego democrático.

Con relación a las críticas, estas se han presentado, en términos generales, en cuatro grandes grupos: en primer lugar, a los gobiernos de izquierda se les ha señalado de un manejo irresponsable de la política macroeconómica. El fundamento de la irresponsabilidad es el aparente exacerbado incremento del gasto social, con miras a reducir la población bajo la línea de pobreza, sin atención a la disponibilidad de recursos del Estado, o el aumento inusitado del salario mínimo, pasando por alto las consecuencias que un incremento inmediato del circulante en la población puede acarrear en materia de inflación.

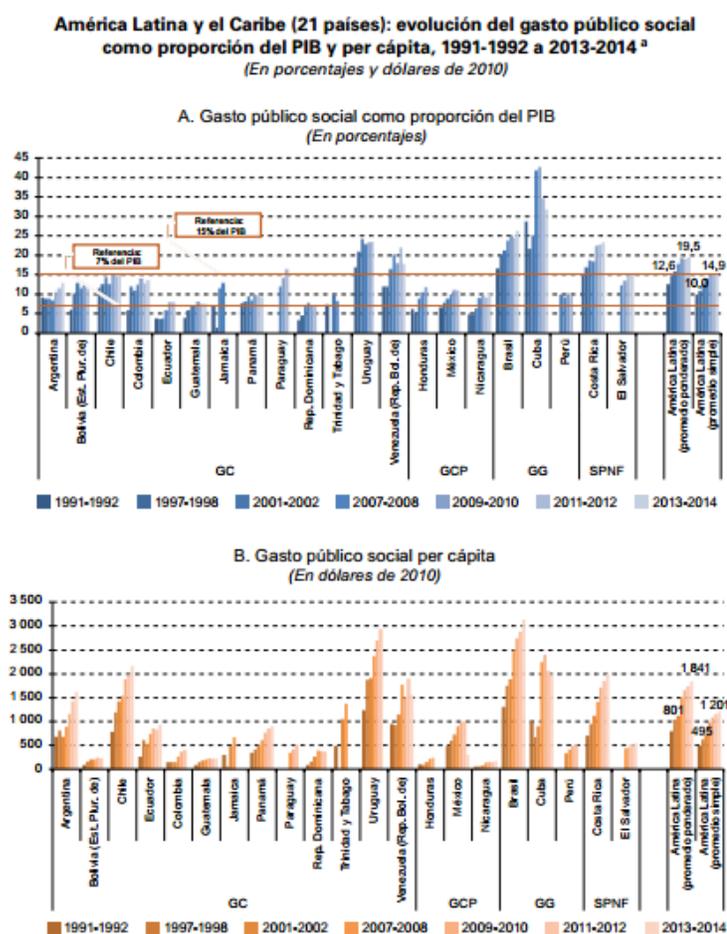
Y es que después de una década de implementación de un modelo económico neoliberal, el cual sometía a la sociedad a las estrictas reglas del mercado, los movimientos alternativos que conquistaron el poder en muchos de los países de la región abogaron en su discurso por un papel más activo del Estado en la economía, que si bien en algunos lugares se suponía por el establecimiento en la constitución nacional de un Estado social, dicha fórmula política no se había desarrollado a cabalidad. Desde este punto de vista, una diferencia cualitativa entre los gobiernos de derecha (bien fueran considerados neoliberales, por su orientación económica, o conservadores en la dimensión política) y los de izquierda, sería la inclinación de los primeros por un Estado mínimo, garante de libertades civiles y políticas (aquellas llamadas libertades negativas o derechos de primera generación)¹¹⁸ apenas regulador de la actividad económica y sólo interventor en casos de extrema necesidad; mientras que los segundos se inclinarían por un rol efectivo del Estado como garante de derechos sociales (o de segunda generación). Estos últimos se diferencian de los anteriores en su carácter prestacional, es decir, requieren de una acción positiva de contenido económico por parte del Estado para ser efectivamente garantizados. Esto implica que los derechos de segunda generación son esencialmente progresivos, ya que sólo pueden garantizarse en la medida en que el Estado cuente con los recursos materiales suficientes para hacerlos efectivos. Por esta razón, son derechos mediatos o, según ciertas corrientes jurídicas, ni siquiera son derechos sino meras expectativas de los mismos.

De igual forma, en el caso de los derechos civiles y políticos, existe la posibilidad de un reclamo frente al Estado cuando son vulnerados o amenazados, contrario a lo que sucede con los derechos sociales, que requieren ser demandados para su efectivo reconocimiento, y en este sentido, el sistema jurídico-político no los garantiza por iniciativa propia, sino que su necesidad debe ser visibilizada para que el aparato estatal se movilice hacia su cumplimiento¹¹⁹. Sin embargo, en relación con los gobiernos recientes de izquierda en

¹¹⁸ Los derechos civiles y políticos no necesitan, en términos generales, de una intermediación estatal para poder realizarse y en esta medida pueden considerarse como inmediatos o derechos subjetivos en estricto sentido, ejercidos por los individuos de manera directa.

¹¹⁹ “El cumplimiento de los derechos sociales, o sea, el cumplimiento de las obligaciones positivas correlativas, depende de las posibilidades fácticas y jurídicas de realización de las demandas legítimamente elevadas”. Arango, Rodolfo, *El concepto de derechos sociales fundamentales*, Legis, Bogotá, 2006, p. 111.

América Latina, esta previsión doctrinaria parece haberse contrarrestado, gracias a la ampliación del gasto social, el cual se entiende como “la suma de todos aquellos gastos que realice el Estado que poseen una connotación social”¹²⁰ y que van orientados a formar las capacidades de las personas que les permitan llevar una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. Por lo general abarca los recursos destinados a nutrición (especialmente en niños) y erradicación del hambre, salud, educación, vivienda, previsión social, justicia e inversión social, para debilitar el déficit de consumo de las personas y mejorar su condición socioeconómica, en otras palabras, luchar contra la pobreza. De acuerdo con Franco, el gasto social es *directo* cuando “el aporte fiscal se convierte en transferencias monetarias o bienes y servicios entregados directamente a las personas (subsidios)” y es *efectivo* aquella “parte del gasto directo que llega a los sectores más pobres de la población”¹²¹. En cifras, según lo afirmado por la CEPAL, hubo un significativo aumento del gasto social en la región de la década del 90 a la del 2000, tanto en porcentaje del PIB como en participación sobre el gasto público total. La gráfica siguiente muestra un aumento mayor en aquellos países con gobiernos de izquierda, especialmente en los últimos diez años:



¹²⁰ Franco, Rolando, “Los paradigmas de la política social en América Latina”, en: Carlos Arteaga y Silvia Solís (coordinadores), *La política social en la transición*, UNAM, México, 2001, p. 37.

¹²¹ *Ibíd.*

Fuente: CEPAL, *Panorama social de América Latina 2015*, Documento informativo, p. 27. Disponible en: <http://www.cpalsocial.org/documentos/262.pdf>

Caso particular fue el de Venezuela durante la primera década del chavismo, en la que el inusitado aumento fue posible “gracias a la reorientación de la renta petrolera hacia el gasto social, sin paralelo en otros países de la región y excepcionalmente alta en los últimos años. Esta fuente extraordinaria de divisas (disminuyó) el influjo de las restricciones que pesaban sobre otros gobiernos de izquierda dependientes de los capitales y las instituciones financieras internacionales”¹²². La caída en los precios internacionales del petróleo, registrada desde octubre de 2014 hasta finales de 2016 cuando mostró signos de leve recuperación, representó una merma en el tamaño del gasto social en ese país, lo que trajo consigo una reducción en la provisión de servicios sociales por el Estado, incluyendo los productos de consumo básico, debido a un serio problema de abastecimiento.

En cuanto a la reducción de la pobreza y a pesar de no haber podido alejarse de los dictámenes de la ortodoxia económica, la izquierda en América Latina ha tenido resultados positivos. Como ya se resaltó, se registra una importante reducción de la pobreza y la desigualdad en aquellos países con gobiernos alternativos, “mucho mayor entre la izquierda populista que entre sus homólogos socialdemócratas”¹²³, aunque estos últimos “países han experimentado una reducción de la desigualdad y la pobreza más rápida que los países bajo gobiernos que no son de izquierda y que la izquierda populista”¹²⁴. Además de demostrar el descenso de la pobreza extrema en seis países a saber, Argentina, Brasil Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México, el *Woodrow Wilson Center* resalta cómo entre 2000 y 2006 hubo una significativa reducción de la concentración del ingreso en doce países de la región. Además, la pobreza moderada se redujo en ocho países, incluyendo los seis con decrecimiento de la extrema, junto a Guatemala y Perú. Con todo, el mismo estudio advierte dos preocupaciones: por una parte, que los gobiernos de izquierda populista hayan aprovechado un auge en los precios internacionales de productos primarios para disminuir la desigualdad sin que hubieran tenido un desempeño mejor que otros países y que, en casos como el de Venezuela, sus ingresos sean “sumamente sensibles a la evolución de los precios de las materias primas”.¹²⁵ Por otra parte, si bien se espera que el reciente retroceso de la desigualdad no sea revertido por afincarse en elementos estructurales como el acceso a la educación básica, tal regresión empero “no sería algo sin precedentes en la historia de la región”¹²⁶, por lo que los logros sociales de los gobiernos alternativos sobre este particular, bien podrían ser desmontados.

Con respecto al salario mínimo, aunque en algunas oportunidades ha experimentado aumentos mayores al 10% en países como Venezuela, El Salvador y Uruguay, al efectuar un comparativo de su aumento real durante el periodo 2000-2011, sólo en el último caso el poder de compra tuvo una mejora significativa, tal como sucedió en Argentina, Brasil y en menor medida, en Ecuador y Chile, según lo muestran los siguientes gráfico y cuadro:

¹²² Rodríguez Garavito, César; Barrett Patrick; Chávez, Daniel (eds.), *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Norma, Bogotá, 2005, p. 41.

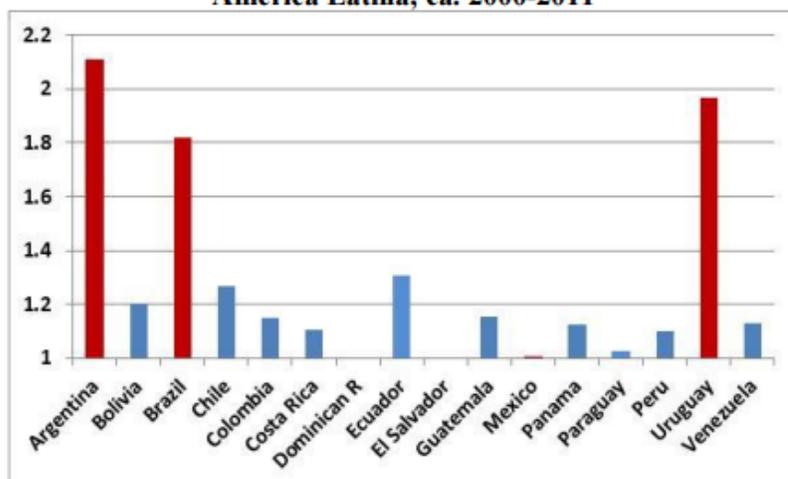
¹²³ Arnson, Cynthia et al, *Op. Cit.* p. 1.

¹²⁴ *Ibíd.* p. 9.

¹²⁵ *Ibíd.*

¹²⁶ *Ibíd.*

**Evolución del Salario Mínimo real
América Latina, ca. 2000-2011**



Fuente: Maurizio, Roxana, *Instituciones laborales y desigualdad: el impacto distributivo del salario mínimo en América Latina en el nuevo milenio*, Universidad Nacional de General Sarmiento y CONICET, Argentina, 2013, p. 8. Disponible en: http://www.social-globalization.uni-kassel.de/wp-content/uploads/2013/06/Instituciones-laborales-y-desigualdad_Maurizio.pdf

Cuadro. América Latina (16 países): Salarios mínimos en dólares ajustados por poder de paridad de compra

(en dólares corrientes)

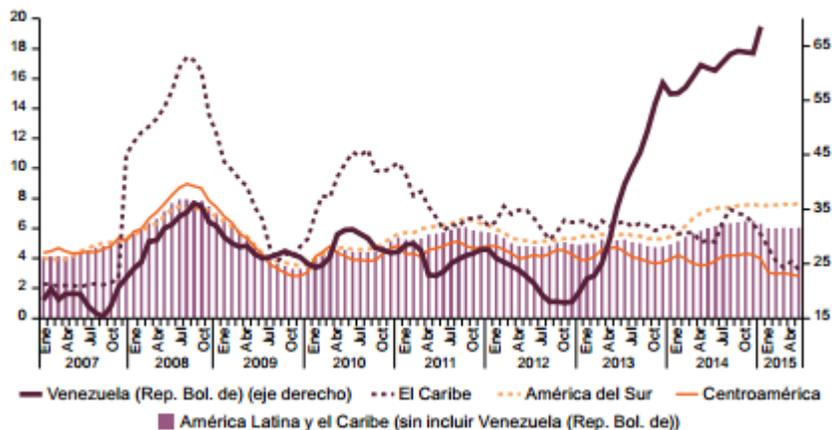
País	2000 (US\$)	País	2011 (US\$)
Uruguay	99,1	México	173,9
Nicaragua	99,8	República Dominicana	216,6
Brasil	124,8	Nicaragua	241,6
Honduras	131,4	Bolivia (Estado Plurinacional de)	242,7
México	137,1	Uruguay	294,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	142,0	Brasil	297,4
República Dominicana	175,0	El Salvador	308,0
Perú	233,9	Perú	368,5
El Salvador	236,4	Guatemala	385,2
Guatemala	242,6	Colombia	396,5
Chile	260,2	Panamá	461,2
Colombia	263,4	Ecuador	463,2
Ecuador	264,2	Chile	468,1
Costa Rica	332,8	Honduras	470,9
Panamá	338,5	Costa Rica	488,0
Paraguay	420,7	Paraguay	578,2
Promedio América Latina	218,9	Promedio América Latina	365,9

Fuente: Marinakis, Andrés (ed.), *Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina: el peso de los factores económicos e institucionales*, OIT, Santiago de Chile, 2014, p. 20. Disponible en:

http://www.obela.org/system/files/Incumplimiento%20con%20el%20salario%20m%C3%ADnimo%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.%20El%20peso%20de%20los%20factores%20econ%C3%B3micos%20e%20institucionales_FAO_OIT.pdf

Quizá la razón por la que los excesivos aumentos porcentuales del salario mínimo en Venezuela no se reflejaron en un adecuado poder de compra se encuentra en los altos niveles de inflación que viene afrontando ese país desde 2013, en ritmos muy por encima del promedio del resto de la región. De acuerdo con la CEPAL, en 2014 fue superior al 65%, pero en 2015, tal como lo registró el Banco Central de Venezuela, fue de 180%¹²⁷, siguiendo a partir de entonces un proceso de agudización, llegando, según el FMI a 254% en 2016, 652% en 2017 y con proyección de cerrar el 2018 en 2.349%.

América Latina y el Caribe: tasas de variación del índice de precios al consumidor (IPC) en 12 meses, promedio ponderado, enero de 2007 a mayo de 2015
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, *Estudio económico de América Latina y el Caribe*, Santiago, 2015, p. 48. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf

Las anteriores cifras muestran que, salvo el caso de Venezuela, todos los demás países con gobiernos alternativos tuvieron desempeños aceptables, en algunas ocasiones con mejores resultados que países en los que se mantuvieron gobiernos neoliberales o conservadores, aunque debe señalarse que los gobiernos de izquierda se ciñeron, en general, a las fórmulas macroeconómicas del grueso de la región. Esto tal vez se deba a la tensión entre un ala social que busca llevar el Estado hacia una opción posneoliberal y otra que se mantiene dentro de los límites de la ortodoxia económica contemporánea, dilema que lleva a plantearse “si la nueva izquierda latinoamericana tiene una alternativa acabada y cierta frente al modelo neoliberal”¹²⁸ o busca solamente desarrollar políticas sociales en medio de un esquema dominante.

Lo precedente desnuda las dificultades para la implementación de un modelo alternativo y lleva a cuestionarse si se ha construido. Sobre el particular, Canamutto considera que, al menos en materia económica, el denominado giro a la izquierda es simplemente retórico, pues en su opinión, no se encuentran “cambios sustantivos en lo económico que permitan

¹²⁷ Véase: <http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso150116.pdf>

¹²⁸ Rodríguez Garavito *et al.*, *Op. Cit.*, p. 43.

diferenciar a estos gobiernos de otros ideológicamente distantes”¹²⁹. Como lo muestra en la siguiente tabla para sustentar su aseveración, con independencia de la orientación política del gobierno, los resultados económicos fueron relativamente similares:

Condiciones y resultados económicos de los gobiernos de AL. 1997-2009.

Variable	Gobiernos			Unidad de medida
	Neoliberales	Conservadores	Populares	
Crecimiento	4.24	2.58	4.12	variación interanual, %
Inflación	8.44	8.94	8.25	variación interanual, %
Salario medio	0.49	0.32	0.05	variación interanual, %
Salario mínimo	1.32	1.33	6.30	variación interanual, %
Pobreza urbana	-0.45	-0.44	-1.70	variación interanual, % de la población urbana
Desigualdad	0.01	0.00	-0.01	variación interanual índice de Gini
Gasto social	12.37	10.70	17.62	% del PBI
TDI	99.44	96.43	106.37	1997=100
Ingreso de Capitales	3205.923	2885.447	39.556	millones de US\$

Fuente: Cantamutto, *Op. Cit.*, p. 8.

Así las cosas, las críticas en cuanto a un manejo inapropiado de la política económica deben ser rechazadas, con excepción del caso de Venezuela, que se ha sumido en una profunda crisis de caída del ingreso, crecimiento estancado y falta de provisión de bienes básicos, en un proceso, por el momento irreversible, que se presenta como consecuencia de la enfermedad holandesa que ha venido sufriendo. En efecto, la evidente desindustrialización, el incremento del desempleo y la generalización de una economía rentista, demuestran con suficiencia el terrible contagio de la economía venezolana, fenómeno ante el cual, la estrategia se ha limitado a apelar a la constante devaluación del Bolívar y a ejercer un estricto control sobre las divisas. Por este motivo, su base productiva se encuentra seriamente afectada y su única posibilidad es un repunte en los precios internacionales del crudo que, paradójicamente, contribuirán más a su problema a largo plazo, por la dependencia excesiva de sus ingresos en un producto primario.

Dentro del segundo grupo de críticas a los gobiernos de izquierda, se ha denunciado una progresiva y sistemática violación de los Derechos Humanos de los opositores políticos y en general, una persecución a los contradictores del gobierno. Esta persecución se lleva a cabo a través del desconocimiento de garantías básicas como el derecho a la protesta por vía de su criminalización, de la libertad de prensa por medio de la censura, o el propio ejercicio de la crítica, a menudo perseguido judicialmente por instigación del ejecutivo. Especial atención merece el caso de Venezuela, donde de acuerdo con Human Rights Watch, se “ha permitido que el gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos. Dirigentes políticos de oposición fueron arbitrariamente detenidos, juzgados y condenados (...) Miembros de las fuerzas de seguridad han cometido graves violaciones de derechos humanos contra personas que participaron en manifestaciones contra el gobierno y durante operativos de seguridad

¹²⁹ Cantamutto, *Op. Cit.*, p. 9.

pública”¹³⁰. A esto se añade que la independencia judicial ha sido virtualmente eliminada, con graves consecuencias sobre el derecho de defensa de los presos políticos.

Ahora bien, se debe señalar que las denuncias por presos políticos son mínimas en otros países de la región con gobiernos de izquierda, y a pesar de las dificultades institucionales, producto de las reformas normativas llevadas a cabo, o la falta de igualdad en la competencia democrática, las elecciones periódicas han dejado clara la posibilidad que tiene la oposición de organizarse. De hecho, en la propia Venezuela, la oposición ganó a finales de 2015 las elecciones parlamentarias, con una mayoría que teóricamente le podría permitir impugnar al presidente Maduro, aunque debido a la neutralización de la rama judicial por parte del gobierno, sus intentos de control político al ejecutivo han sido imposibles en la práctica.

En Ecuador, por su parte, el gobierno de Correa fue duramente criticado por su enfrentamiento con la prensa, que llevó a la persecución de periodistas críticos de sus políticas, a cierre de medios contradictores y a un incremento de los medios de comunicación oficiales o afectos al gobierno. Como lo afirman Punín Larrea y otra, “el control, la censura y el ataque han sido parte de las estrategias de gobierno, como lo evidencia el caso relacionado con diario El Universo y el editorial de Emilio Palacio, que provocó su salida del país. La acumulación de fuerzas mediáticas por parte del gobierno de Correa es un tema preocupante para los propietarios de los medios privados y analistas de comunicación”¹³¹. En Venezuela, la persecución a la prensa crítica ha evidenciado una estrategia similar, que apela, o bien a perseguir judicial y/o políticamente al medio o al periodista que expresa sus inconformidades, o bien a la cooptación de la prensa por la proliferación de medios oficiales o la apropiación de los privados.

En tercer lugar, se le ha reprochado a los gobiernos de izquierda el haber llevado a cabo reformas constitucionales y legales con el fin de concentrar el poder, lo cual, además, ha generado profunda inseguridad jurídica. Al respecto, las reformas constitucionales han sido la regla general en estos países tras el ascenso de un presidente de izquierda, y el componente común a todas esas modificaciones ha sido la introducción de la reelección presidencial bajo diferentes modalidades, tanto inmediata e ilimitada, como mediada al menos por otro periodo y con restricción en el número de oportunidades que se puede ser elegido presidente. Tal ha sido el caso de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.

Bajo un diseño del sistema de pesos y contrapesos basado en periodos presidenciales únicos, estas reformas han permitido la concentración del poder en cabeza del ejecutivo, con capacidad de incidir en la nominación de funcionarios que institucionalmente tendrán la facultad de controlarlo, lo cual ha generado una drástica reducción del papel del legislativo

¹³⁰ Human Rights Watch, *Venezuela: Examen Periódico Universal*, Octubre de 2016, p. 1. Disponible en: <https://www.hrw.org/es/news/2016/10/31/venezuela-examen-periodico-universal>

¹³¹ Punín Larrea, M. Isabel; Gutiérrez Ríos, Benazir, “Cronología del Periodismo de investigación: Poder, abusos y medios en Ecuador”, en: *Comunicación y Periodismo. Cinco versiones de la historia*, Cuadernos Artesanos de Comunicación, 99, La Laguna (Tenerife), 2015, p. 99.

dentro de los respectivos sistemas políticos¹³² y una fuerte cooptación de la rama judicial y otras instituciones “independientes” por parte del presidente.

Este hiperpresidencialismo derivado de reformas constitucionales ha permitido la delegación en cabeza del presidente de otras reformas normativas, bajo la figura de facultades especiales extraordinarias, que pese a su carácter excepcional han devenido genéricas y han instaurado periodos prolongados de “legislación por decreto”. La concentración de poder también ha influido decididamente en la orientación de la política exterior en la que ha prevalecido la variable idiosincrática, sujeta a la personalidad del gobernante. Pero más allá de la carga ideológica que se pueda albergar, lo cierto es que, como lo señaló Gardini, la política exterior de estos gobiernos ha sido pragmática. Por ello, las críticas que en cuarto lugar se han fundamentado en la forma como estos gobiernos han manejado su política exterior, de forma contestataria y utilizada estratégicamente a través de la conformación de bloques internacionales, de integración económica y política, tales como el ALBA o UNASUR, parecieran quedar en entredicho. “Como consecuencia, se observa una proliferación de iniciativas que incluyen esquemas de cooperación y concertación política, cooperación económica e integración regional, todas ellas parte de un cada vez más diverso regionalismo latinoamericano (...) Existen otros elementos que destacan de esta nueva realidad regional. Algunos de ellos son contradictorios, pues, en el ámbito político y funcional del regionalismo”¹³³. De allí que se hubieran presentado fenómenos como el ingreso de Venezuela al Mercosur, la conformación de la Alianza del Pacífico o la persistencia de la Comunidad Andina tras el retiro de la propia Venezuela.

3. Bajo las reglas del juego democrático: el esquema gobierno-oposición

Según se ha visto hasta aquí, el reciente fenómeno de la izquierda en América Latina ha sido objeto de diversos análisis. Estos podrían clasificarse, a grandes rasgos, entre aquellos que realizan una revisión descriptiva de la forma en que se presentó en la región, es decir, una especie de recuento histórico de los hechos que rodearon el ascenso de esta tendencia en diversos países latinoamericanos. Por otra parte, se encuentran los que la han examinado a la luz de diferentes elementos teóricos, como por ejemplo, aquella corriente que asume la izquierda como una expresión del retorno del populismo o los que buscan elucidar acerca de los contenidos políticos que la misma encierra. De igual manera, hay quienes han asumido la izquierda como objeto de crítica, para lo cual se recurre a una censura de las medidas implementadas por estos gobiernos alternativos durante sus años de vigencia, aunque otros estudios buscan reivindicarla acudiendo a datos estadísticos para demostrar, por ejemplo, sus logros en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

¹³² Sobre la cooptación del legislativo por el ejecutivo en diferentes países de la región, ver: Santos, Manoel Leonardo y otros, “El control presidencial de la agenda legislativa en América Latina”, en: *Revista de Ciencia Política*, Vol. 34, No. 3, Santiago, 2014, pp. 511-536.

¹³³ Briceño Ruiz, José, “Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional en América Latina”, en: *Estudios Internacionales* 175, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2013, pp. 35, 36.

Dentro del primer grupo, podríamos considerar el interesante texto de Benjamín Arditi¹³⁴, en el que intenta dar cuenta de los criterios de razón práctica que facilitaron el ascenso de la izquierda en América Latina. Sobre el particular, considera que son tres los factores que incidieron para que se presentara este suceso. En primer lugar, la experiencia histórica de los logros y derrotas de la izquierda en la segunda mitad del siglo XX. Como lo señala Arditi,

“Si la década de 1960 fue la época de gloria en la que el entusiasmo generado por la Revolución Cubana y la experiencia guerrillera del Che Guevara en Bolivia auguraba un futuro socialista, la de 1970 y buena parte de la de 1980 fueron las décadas perdidas para la izquierda. Luego de un éxito inicial en Chile con la elección de Salvador Allende en 1970, la seguidilla de golpes de Estado y la subsecuente militarización de las respuestas del Estado a las protestas populares marcaron un período de derrota política, persecución, desmovilización y exilio”¹³⁵.

Este período de decadencia de la izquierda produjo el efecto de “desradicalizarla”, por lo cual, en búsqueda de una relegitimación (y en algunos casos, de supervivencia), atenuó su discurso socialista revolucionario y abrió su público objetivo a sectores sociales más allá de las clases populares. Así, las propuestas radicales que en un principio acompañaron la retórica izquierdista, con una fuerte influencia teórica del marxismo y la referencia histórica del socialismo real en Cuba, Nicaragua, China y la cortina de hierro, fueron suavizándose, por lo que los temores relacionados con la desaparición de la propiedad privada o el establecimiento de una economía planificada pronto desaparecieron de la opinión pública de la región.

En segundo lugar, se observa la relación con el exterior como marco regulatorio para la acción y el tratamiento a quienes se han considerado como enemigos del “pueblo”, figura que antes estaba encarnada por los terratenientes, luego lo fue por los regímenes militares (en los países que sufrieron dictaduras) y más recientemente, por el neoliberalismo, el cual se presenta como una faceta renovada del imperialismo que la izquierda reprochó en otras décadas. Respecto del militarismo, valga decir que la nueva agenda “suave” de la izquierda estaba direccionada a la consecución de mayor democracia y en últimas al establecimiento de regímenes democráticos permanentes, que dejaran en el pasado, de manera definitiva, las difíciles experiencias de las dictaduras. Así, la democracia se convirtió en una bandera de la renovada izquierda, por lo cual, tras el retorno a la misma, se consolidó como una opción política válida dentro del espectro electoral.

De igual manera, las políticas de apertura neoliberal, adoptadas por todos los países latinoamericanos una vez finalizaron los regímenes militares, produjeron una serie de efectos negativos en las economías nacionales, generando desindustrialización y retroceso del agro, y en consecuencia, desempleo, pobreza y criminalidad. Arditi lo ilustra, señalando que “ya para mediados de la década de 1990 las certezas de la hoja de ruta trazada por el consenso de Washington estaban siendo reevaluadas a la luz de las promesas incumplidas en materia de empoderamiento y bienestar económico”¹³⁶. Esta suerte de desencantamiento del desarrollo

¹³⁴ Arditi, *Op. Cit.*, p. 232-246.

¹³⁵ *Ibid.* p. 235.

¹³⁶ *Ibid.* p. 236.

económico que se vislumbraba como producto inevitable de la economía liberal generó un clima de inconformismo social, que pronto se tradujo en manifestaciones concretas. “Los gobiernos de la región se enfrentaron con una mezcla desestabilizadora de crecimiento modesto con fuerte desigualdad y de política electoral con protestas sociales recurrentes”¹³⁷. Las más significativas fueron las de las víctimas del corralito financiero en Argentina, adoptado tras la caída del presidente De la Rúa como consecuencia de la terrible crisis de diciembre de 2001, el movimiento de los “Piqueteros” en el mismo país, los cocaleros en Bolivia, los “Sin tierra” en Brasil, los Mapuches en Chile y campesinos pobres en Paraguay.

A lo anterior, como factor externo se agregó el temprano desinterés que los Estados Unidos tuvieron en la región una vez entrado el Siglo XXI, toda vez que tras los sucesos del 9/11 sus prioridades en materia de política exterior se dirigieron hacia otras regiones del mundo. Esto permitió, por una parte, que América Latina dejara de preocupar como foco de amenazas externas para el hegemón, por lo que la dinámica política de nuestros países cesó de estar influenciada por el gobierno norteamericano. Por otra parte, este “abandono” de los países latinoamericanos en momentos de crisis sirvió para potenciar el discurso crítico contra el imperialismo, que se veía ahora reflejado en la doctrina neoliberal y que además se asumía como aliado de las clases dirigentes nacionales. De este modo, las secuelas de la apertura económica y el alejamiento de los Estados Unidos convirtieron a la “oligarquía” y a los partidos políticos tradicionales en los chivos expiatorios de la problemática interna de los países de América Latina.

El tercer factor se encuentra en las manifestaciones simbólicas de la izquierda, es decir, en el discurso que profesa y por el cual, pretende, por un lado, explicar críticamente la incidencia negativa en nuestros países de los dos primeros factores, y por otro, ofrecer una idea de lo que representa América Latina como tal, esto es, tratar de responder a la pregunta clásica de lo que somos y de lo que debemos ser. En resumen, siguiendo siempre a Arditi, “tomados en su conjunto, los fracasos de los gobiernos latinoamericanos para dar respuesta a las demandas de bienes simbólicos y especialmente materiales, el repliegue intelectual y político de la ortodoxia neoliberal y el vacío creado por la distancia tomada por Estados Unidos hacia la región fue creando un escenario propicio para el resurgimiento de la izquierda”¹³⁸.

Bien sea a través de sus elementos descriptivos, de sus propuestas teóricas o de las críticas en sus discursos, lo importante a resaltar en este breve repaso de la izquierda reciente en la región es que con el advenimiento de la democracia (por la desaparición de las dictaduras), el desvanecimiento de la amenaza comunista como efecto del fin de la Guerra Fría y el abandono de la lucha armada, la izquierda latinoamericana comprendió que la única vía de acceso al poder institucional (teniendo en cuenta que otras tendencias abogaron por un empoderamiento de los sectores populares, sin enfocarse en propósitos electorales específicos) eran las elecciones. De esta forma se sometió a las reglas del juego democrático, que bajo el esquema gobierno-oposición permite ganar o perder unas elecciones. Las mismas reglas establecen la aceptación de la derrota por parte del perdedor y su establecimiento como oposición al gobierno. En este punto, hay que llamar la atención, primero, sobre la capacidad que ha tenido la izquierda para reconocer sus reveses eleccionarios, y luego, sobre la faceta

¹³⁷ *Ibíd.*

¹³⁸ *Ibíd.* p. 237.

opositora que le ha caracterizado y que lamentablemente, ha impedido una genuina preparación para gobernar, a diferencia quizá de los casos de Uruguay y Chile, y en menor medida, Brasil, donde, como se anotó en su oportunidad, los movimientos que impulsaron candidaturas alternativas contaban con una mejor estructura e importantes antecedentes de movilización.

En relación con lo primero, líneas atrás se hizo referencia a la mínima mayoría con la que el presidente Maduro ganó las elecciones en Venezuela en 2013 y luego a la victoria de la oposición en los comicios legislativos de diciembre de 2015. Aún con las restricciones que ha presentado frente a las facultades de la Asamblea Nacional, Maduro reconoció la derrota de su partido. Experiencias similares se presenciaron en Argentina, tras el triunfo de Macri ese mismo año, y en Chile, en el 2010, luego de que Piñera ganara las elecciones. Esto es indicativo de que a pesar de las reformas adelantadas y dirigidas a reelecciones y conservación prolongada del poder, por lo general, cuando el resultado en las urnas es adverso, la izquierda tiende a reconocer esa pérdida, lo cual da muestra de un grado de madurez política y de respeto por las reglas del juego democrático.

Sin embargo, esta aparente preparación para aceptar las contrariedades electorales pareciera no haberse tenido para ejercer el gobierno. En este sentido, la izquierda, previo a su llegada al poder, no se comportó como una auténtica oposición, esto es, como una alternativa propositiva permanente, que además de reprochar las políticas que considerara equivocadas del gobierno de turno, comunicara las opciones que promulgaba, a través de un discurso o un modelo político alternativo. Además, salvo casos excepcionales, nunca tuvo una organización fuerte y extendida que le permitiera mantener las coaliciones de cara a las elecciones siguientes. También puede ocurrir que se acostumbó a ser oposición, asumiendo una postura crítica, y por este motivo olvidó prepararse para gobernar, como si su papel fuera esencialmente la contradicción al ejercicio del poder.

Por eso se señala que, exceptuando a Uruguay, donde el Frente Amplio acumuló veinte años de movilización antes de hacerse a la presidencia, y a Chile, donde la Concertación sirvió, incluso durante la misma vigencia de la dictadura, como preparación para el gobierno por parte de organizaciones políticas alternativas, en todos los demás países donde se dio el giro a la izquierda, esta no se encontraba lista para asumir su nuevo rol como gobierno. Quizá en parte eso explique el desarrollo de posturas caudillistas, al abrigo de reformas constitucionales que facilitarían la concentración y la prolongación del poder.

Aquí es necesario realizar una aclaración teórica esencial para los fines del trabajo, la cual está relacionada con la comprensión del concepto de poder que se ha venido utilizando a lo largo del mismo. El poder se ha entendido como el acceso a la presidencia de los respectivos países, bien sea a través de unas elecciones, como se ha defendido que la izquierda contemporánea lo ha hecho en los últimos veinte años, o bien por medio de las armas, como se observó en las experiencias de las revoluciones cubana y nicaragüense. La asimilación de la conquista del poder con el ascenso a la presidencia cobra sentido bajo la consideración del carácter presidencialista de los sistemas políticos en América Latina, en los que la cabeza del ejecutivo reúne las calidades de jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa. Esta triple condición le confiere al presidente amplias facultades por lo que, a pesar de los diseños institucionales insertos en las distintas constituciones, dirigidos a

establecer un equilibrado sistema de pesos y contrapesos, la figura presidencial acumula mucho más poder que las demás ramas públicas. A esto se suma la imposibilidad práctica que en muchos de los países de la región existe para efectuar un efectivo control político o judicial a la actuación del gobernante de turno, al menos desde el punto de vista institucional.

Es por ello que en relación con el fundamento fáctico del presente escrito, la disquisición en torno al poder se limita a la victoria en las elecciones presidenciales, dejando de lado las reflexiones sobre el vínculo de los gobiernos con los movimientos sociales o el ejercicio de una práctica política por fuera de la lógica gubernamental, la que se daría, por ejemplo, con el empoderamiento de la sociedad civil (el cual sería, en últimas, unos de los propósitos o distintivos de la izquierda en comparación con otras opciones del espectro político en la región). De igual forma, este énfasis en la figura presidencial refuerza la postura de la excesiva importancia del factor idiosincrático, que apela a la personalidad del gobernante, en la configuración de la política interna y externa de los países con gobiernos alternativos, por lo que en muchos casos, estos derivan en fenómenos caudillistas o autoritarios, según se ha revisado. En este sentido, se acerca a la noción de democracia delegativa sobre la que O'Donnell sostiene que “se basa en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente”¹³⁹.

De conformidad con lo anterior, la acepción del poder expuesta tiene un carácter nacional, sin auscultar en las condiciones regionales o locales de cada uno de los países bajo estudio, en los que los movimientos que impulsan la elección de un candidato presidencial pueden o no tener incidencia política, electoral o de otra índole. Esta aclaración es indispensable, ya que indica el sometimiento de las elecciones presidenciales, que cubren todo el territorio nacional, a una lógica electoral diferente a la de sus subdivisiones político-administrativas, éstas regidas generalmente por dinámicas clientelistas, proliferación de gamonales o enfrentamientos entre élites locales, que además cuentan con distintos escaños o cargos de elección uninominal. Tal esquema aplicaría también a las elecciones legislativas, atadas al desenvolvimiento regional. Por su parte, los comicios para elegir a un presidente, aparte de girar alrededor de una sola posición, que representa el mayor poder político real en el país, como se enfatizó, permite un mayor margen de libertad al elector, no necesariamente cooptado por la lógica clientelar.

Esto permite agregar dos nuevos elementos a la disertación: por un lado, ganar la presidencia no implica por sí mismo ni una mayoría en el legislativo ni un amplio control sobre los gobiernos regionales o locales, por lo que el ejercicio del poder en estos casos se hace con la posterior colaboración de las organizaciones opositoras o con un reforzamiento unilateral de las facultades presidenciales. Por otro lado, brinda mayor oportunidad mediática a los discursos genéricos, que como los de los candidatos de izquierda reciente en la región, recogen componentes de fácil aprovechamiento por el electorado, facilitando la consolidación de una imagen salvadora en la figura del aspirante alternativo, la que probablemente por debajo del nivel nacional no sería posible afianzar.

¹³⁹ O'Donnell, *Op. Cit.*, p. 6.

De cualquier modo, bien sea que haya estado o no preparada para gobernar en todos los países del subcontinente, los triunfos de la izquierda en América Latina en las últimas dos décadas han sido en el escenario de elecciones libres y periódicas, aun a pesar de las subsecuentes reformas constitucionales dirigidas a la prolongación de los periodos presidenciales o las presiones y sospechas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales que organizan los comicios. El que esas victorias hayan sido por la vía democrática es algo que merece ser resaltado de nuevo pues, como se ha dicho, delinea el sometimiento definitivo a unas reglas de juego institucionalizadas y el consecuente abandono categórico de la opción armada como estrategia de acceso al poder, delimitando así los rasgos fundamentales del sistema político correspondiente.

Acudiendo a Luhmann, la caracterización de dicho sistema, el cual es autorreferencial, esto es, tiene la capacidad de resolver su propia complejidad interna, pero a la vez mantener puntos de comunicación con otros sistemas sociales, supone una cima escindida en la distinción gobierno/oposición, la cual funciona como un código binario que tiene un valor positivo y otro negativo a la vez. De este modo, la política constituye una dinámica constante de alternación en el poder y la posibilidad de las distintas organizaciones partidistas o programáticas de acceder al mismo, siendo estos grupos los mediadores entre la sociedad y el sistema. De acuerdo con Luhmann, “Precisamente porque no gobiernan ambos, porque no existe entonces ninguna imposición de un consenso, es instructivo el código. Produce continuamente informaciones internas al sistema, que regula lo que se atribuye al gobierno y a la oposición. Esto se consigue gracias a una pequeña diferencia temporal: la posibilidad de que los partidos en el gobierno y en la oposición cambien sus puestos en las siguientes elecciones”¹⁴⁰.

Este concepto de democracia permite que el sistema político haga frente a sus propias contingencias de manera autopoietica, gracias al código binario gobierno/oposición, que con todo, debe someterse a ciertos criterios de resolución, basados, primero en las propuestas programáticas de los partidos o movimientos políticos y luego, en la obligación de llevar a cabo el debate político en un escenario de amoralización, el cual implica el reconocimiento del opositor como elegible. A pesar del importante aporte conceptual para soportar el argumento de la alternación en el poder, la visión política de Luhmann se encuadra dentro de un modelo de democracia representativa, en el que la representación política recae en los partidos y las decisiones se toman con atención a la regla de mayorías. Así las cosas, en cuanto al esquema institucional refiere, la izquierda latinoamericana reciente ingresa en la lógica de la representatividad y obliga al debate alrededor de si su propósito de profundizar la democracia, elemento que lo diferenciaría de otras opciones del espectro político, implica necesariamente un modelo de democracia participativa y consensual, o si por el contrario se limita, bien discursivamente o por fuerza de las circunstancias materiales (el “choque” con la realidad de gobernar al que se hizo referencia anteriormente), a la tradicional representación.

Pese a estas limitaciones, la alternancia constituye entonces tanto la prueba de la aceptación por la izquierda en América Latina de las reglas de la democracia (representativa), como la muestra fehaciente de la posibilidad material de acceder al poder a través de la eventualidad

¹⁴⁰ Luhmann, Niklas, *Teoría política en el Estado de Bienestar*, Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 164.

tangible de ganar las elecciones presidenciales. Adicionalmente, indica que tal acceso al poder es temporal, pues una vez haya nuevos comicios, la tendencia que ejerce la oposición podrá salir victoriosa y convertirse en gobierno y viceversa, de manera que la política, desde este punto de vista, deviene cíclica. Así mismo, su ejercicio, que aparte del electoral sería un ejemplo genuino de práctica política, se torna necesariamente transitorio.

El ejercicio de una auténtica oposición o sometimiento a reglas del juego democrático implica entonces la posibilidad de perder el poder. Esto debe tomarse como algo saludable para la democracia, pues evita su concentración excesiva en una opción política o en una persona, y las consecuencias que en materia de corrupción y cierre del sistema político acarrea esa posibilidad. Por otra parte, la salida temporal del poder permite formar una oposición más estructurada, que presente una alternativa programática al gobierno de turno (casi como el gabinete en la sombra de los sistemas parlamentarios) y se mantenga vigente como una opción real (con vocación) de poder. Además, permite optimizar las capacidades y estar mejor preparados para gobernar cuando regrese su turno. En tal sentido, la izquierda puede aportar a ese propósito de profundizar la democracia, aún si no se encuentra en el poder.

Conclusiones preliminares

Estas breves disquisiciones sobre el significado de la izquierda en América Latina y sus repercusiones materiales dan cuenta de un proceso de adaptación de la retórica tradicional a las condiciones particulares de cada uno de los países de la región, en los que, al abrigo de distintas circunstancias históricas que generaron una crisis sobre las clases dirigentes tradicionales, se suscitaron exitosos fenómenos políticos electorales, con la fuerza suficiente para derrotar a las élites inveteradas en elecciones presidenciales bajo las reglas democráticas que ellas mismas habían establecido. La referencia a los orígenes de la izquierda en la Revolución Francesa supone unas raíces en la doctrina liberal clásica que, tras las experiencias del socialismo, opuesto con vehemencia a las opciones políticas acostumbradas, ha venido a ser rescatada en algunos de sus elementos, por lo cual, como se vio, la alternatividad política en el subcontinente aparece como una amalgama de posturas que han atenuado la retórica radical (de fundamento marxista), para dar paso a otro tipo de reivindicaciones, sin que impliquen un cuestionamiento generalizado del sistema vigente o propongan su destrucción o reemplazo¹⁴¹.

Esta adaptación, que ha propiciado una izquierda “a la latinoamericana” se presenta, no sólo como necesaria estrategia de acceso al poder en países donde el discurso sobre la lucha de clases o la temporalidad de los modos históricos de producción resultan anacrónicos, sino también como una reacción a la problemática específica en cada uno de ellos y a la vez como respuesta a las demandas de sus sociedades, no atendidas por la tradicionalidad política nacional. Lo anterior sirve para reafirmar que la izquierda experimentada en estas latitudes no puede ser comprendida a la luz de las categorías recurrentes, a manera de simple dicotomía con posturas conservadoras, sino que su significado debe interpretarse con base en las

¹⁴¹ Una explicación coloquial del significado actual de la izquierda en general y de la izquierda latinoamericana en particular pueda encontrarse en este fragmento de la película *Lugares comunes* del director Adolfo Aristarain: <https://www.youtube.com/watch?v=Iq0FhEtXN2g>

“políticas” adelantadas por cada gobierno en particular, atendiendo a las especificidades y las necesidades discursivas y materiales de sus países, que aunque críticas en sus pilares, suelen ser pragmáticas en su ejercicio, albergando tendencias más progresistas que radicales. Con todo, es necesario acotar que los resultados del giro en la región son mejores en el ámbito político-discursivo que en el económico.

Esta particularidad puede explicarse en los elementos históricos que le permitieron consolidarse como una auténtica opción de poder. En primer lugar, por los factores derivados del fin de la Guerra Fría que supusieron un tránsito definitivo hacia la democracia y la correlativa irreversible proscripción de las dictaduras en la región, además del fin del socialismo real y la desaparición de la amenaza comunista, que redujeron el interés de los Estados Unidos en América Latina, sin la imperiosa necesidad latente de gobiernos afines que contuvieran dicha amenaza. En segundo lugar, por las consecuencias que el modelo de apertura económica tuvo en el vecindario, los extendidos escándalos de corrupción y la crisis generalizada de las clases gobernantes tradicionales, que facilitaron la emergencia de un discurso crítico, el cual sólo debía dirigirse contra estos problemas y los responsables de los mismos, y a la vez proponer una alternativa política que participara de la dinámica electoral, esto es, que se encontrara al alcance del ciudadano común.

El triunfo de Chávez a finales de 1998 comprobó fácticamente, por primera vez desde la victoria de Allende en Chile veintiocho años atrás, la posibilidad de éxito de candidatos alternativos en unas elecciones presidenciales en la región. Tal vez este excepcional suceso permitió el inusitado ascenso de otras opciones no tradicionales a lo largo del subcontinente, que según el ejemplo del presidente venezolano, apelaron a discursos y estrategias similares que en pocos años les dieron el acceso al poder presidencial. No obstante, como se ha sostenido en diversos apartes, la disonancia entre la política proselitista, dominada por el discurso y las expectativas de cambio, y la política como ejercicio concreto del poder, impidió a estos novedosos gobiernos la materialización plena de una ambiciosa agenda social, al mismo tiempo que los llevó a incurrir en distintas acciones para la defensa de su posición gobernante o de las políticas públicas implementadas.

Estas acciones son el objeto de los reparos recurrentes que se han opuesto a la izquierda latinoamericana. En algunos casos, tales reproches tienen asidero, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, en especial, la libertad de expresión o el disenso, o cuando se critica la excesiva concentración del poder en cabeza del presidente. En otros casos, según se revisó, las críticas no se justifican completamente, como sucede con el manejo de la política macroeconómica o la orientación de la política exterior. De cualquier modo, estos reproches sólo pueden ser planteados en casos particulares y, salvo la situación de Venezuela, en los demás países donde se ha presentado, el giro a la izquierda ha distado de fracasar y ha terminado, en términos prácticos, adaptándose a los modelos institucionales vigentes, sin que se haya construido un genuino modelo alternativo ni se haya implementado una modificación revolucionaria del sistema.

Lo precedente no pretende señalar que los gobiernos de izquierda en la región hayan sido un intento frustrado de cambio, sino que, primero por las propias limitaciones que establece el modelo imperante, y después por las diversas reivindicaciones que expresa en la actualidad y de acuerdo con cada particularidad nacional, sus resultados también han de ser

relativizados. Quizá esto haga necesario abogar por un rasgo distintivo que permita medir un impacto significativo en el *statu quo* que lo distinga decididamente de otras posturas políticas. De allí que adquieran importancia propuestas como la de Panizza, quien defiende que el elemento diferenciador de un gobierno de izquierda debe ser el fortalecimiento de la democracia, la cual se entiende hoy en la lógica de gobierno/oposición.

Sea como fuere, la izquierda en el subcontinente ha sido una realidad, con importantes logros y serios reveses en su desempeño, con avances y retrocesos en su continuidad, y suscitada por razones históricas y coyunturales, que si bien fueron específicas en cada uno de los países donde se presentó, obedecieron a unos elementos estructurales también acontecidos en otros lugares donde la izquierda nunca ganó. Los motivos que podrían explicar esta ausencia de triunfo es precisamente la cuestión que intentará dilucidarse en el siguiente capítulo en relación con Colombia.

Capítulo III

Colombia y la excepción a la regla

Introducción

En los capítulos precedentes se vio cómo fue el ascenso de la izquierda en América Latina, sosteniendo, en primer lugar, que si bien como opción política de gobierno en ejercicio es un fenómeno reciente, como tendencia organizativa tiene antecedentes que datan de más de un siglo, tanto en el campo teórico, por lo que la región ha tenido variados, numerosos y reconocidos pensadores de corrientes alternativas, como en el práctico, que se ha expresado, por un lado, en la movilización política proselitista, bajo las reglas democráticas institucionales, y por otro, ha acudido a las armas como forma de lucha. En ambos casos, el propósito fundamental ha sido el acceso al poder como fin último de la política. En segundo lugar, tras la terminación del conflicto Este-Oeste, que supuso el cese en la necesidad de contención de la amenaza comunista en el subcontinente y en consecuencia la desaparición definitiva de las dictaduras (en muchos casos promovidas por los Estados Unidos), con una correlativa transición a la democracia y la implementación concomitante de medidas económicas neoliberales, se generó para la izquierda la posibilidad de triunfo en unas elecciones presidenciales, por el propio juego democrático y por los resultados del proceso de apertura. Esto, unido a la crítica generalizada sobre las clases dirigentes tradicionales y el surgimiento de líderes carismáticos que supieron leer las condiciones y canalizar la frustración de la gente a través de mensajes de cambio y salvación, permitieron el triunfo electoral de organizaciones políticas alternativas, cuyo único precedente era la victoria de Allende en 1970.

Una vez en el poder, esa alternatividad política se vio enfrentada con la realidad burocrática de la administración pública, con algunas inflexibilidades del sistema, con restricciones normativas incluso de nivel constitucional y con una feroz oposición, no sólo de sus contradictores políticos, sino también de los medios de comunicación y las élites empresariales. De la mayor o menor profundidad en la implementación de medidas dependió que la izquierda en cada país fuera calificada como populista-radical o moderada, según se revisó, y al mismo tiempo sirvió como fundamento a las críticas que desde distintos sectores se le opusieron. Estas críticas giraron alrededor de cuestiones como el manejo de la política económica y exterior, el desconocimiento de Derechos Humanos y el reformismo jurídico dirigido a prolongar el tiempo en ejercicio del poder. Aunque algunos de estos reparos son justificados, el fenómeno se mantiene y relegitima en varios países, siempre por la vía electoral, lo que lo encuadra de manera decidida en el ámbito de la democracia.

Ahora bien, las circunstancias que en muchas otras partes permitieron la llegada al poder de la izquierda también se han presentado en Colombia; algunas de ellas inclusive se mantienen vigentes. Empero, las posibilidades de triunfo de movimientos políticos alternativos en este país se ven distantes, lo que lleva a preguntarse por los motivos de esta diferencia. Igual que en el resto de América Latina, la izquierda en Colombia dista de ser un fenómeno reciente, y se encuentran antecedentes que provienen incluso del siglo XIX y que, además de las ya mencionadas alusiones al movimiento sindical de los años 20 o a las obras de autores críticos, como el caso de Ignacio Torres Giraldo, comprenden muchas otras experiencias tanto en el

terreno de las ideas como en el de la movilización política, bien a través de las urnas o de las armas.

La persistencia de actores armados de orientación socialista, aún después del fin de la Guerra Fría y de la transición a la democracia en el resto del subcontinente, podría ser el elemento distintivo que ha impedido la llegada a la presidencia de un candidato por fuera de las organizaciones políticas tradicionales. Desde este punto de vista, el aparentemente exitoso proceso de negociación con las FARC entre 2012 y 2016, la implementación de los acuerdos alcanzados y la instalación de diálogos con el ELN, siendo estas las únicas guerrillas activas en la región durante el siglo XXI, podrían dar luces acerca de un cambio en la visualización de la política alternativa en Colombia. Sin embargo, la distinción con otros países también derivaría de los terribles efectos que el mantenimiento de la insurgencia representó en materia de degradación del conflicto armado, que provocó la aparición de grupos ilegales de extrema derecha, que a veces con anuencia y apoyo del gobierno colombiano, persiguieron a los miembros de la izquierda y otros que identificaron con ella. Esto sin mencionar el aparato mediático de los canales masivos de comunicación que a menudo asumen posturas parcializadas en el manejo de la información, sin que las expresiones sociales y políticas disímiles tengan la suficiente difusión.

Es por eso que el presente capítulo pretenderá ser la comprobación empírica de la imposibilidad de un gobierno de izquierda en Colombia, a pesar de compartir con otros países las mismas características que en ellos facilitó el ascenso al poder de candidatos de esta tendencia política, para lo cual se mostrará, primero, un breve repaso de los antecedentes generales de la izquierda en Colombia; segundo, la replicación aquí de aquellas condiciones estructurales de la región; y tercero, los factores que se consideran distintivos y que en el párrafo precedente ya fueron concisamente anunciados.

1. La alternatividad política colombiana

Antecedentes sobre movimientos políticos críticos o alternativos en Colombia pueden rastrearse desde mediados del propio siglo XIX, por ejemplo, en las sociedades democráticas, que de acuerdo con Jaramillo, “se ha creído que (...) fueron organizaciones de clase, orientadas por una conciencia revolucionaria y que representaron la defensa de un futuro desarrollo industrial (...) pero en realidad sólo en limitada medida pueden atribuírseles estas características y estos objetivos. Sus orientaciones y propósitos fueron muy variados”¹⁴². Algunas de estas sociedades, en efecto, promovieron un proteccionismo frente a las importaciones, a pesar de alinearse con el naciente partido Liberal, el cual se dividió entre una facción *Draconiana*, afecta a los intereses de los artesanos, y otra ala *Gólgota*, la cual pregonaba algunas de las ideas socialistas (utópicas o pre-marxistas) en boga en la Europa de entonces. La sociedad de artesanos apoyó el golpe y el seguido efímero gobierno de José María Melo en 1854, que se ha considerado el primer (y quizá único) gobierno popular que ha existido en Colombia y que fue derrocado por la acción conjunta de las élites terratenientes

¹⁴² Jaramillo Uribe, Jaime, “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848”, en: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No. 8, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976, p. 9.

de la época. Dentro de estos antecedentes también podrían registrarse las numerosas guerras civiles que enfrentaron tradicionalmente a los partidos Liberal y Conservador, fundados hacia 1849, detrás de las cuales se escondieron motivos relacionados con la distribución de la tierra, el régimen de propiedad y la abolición de la esclavitud, entre otros.

Sin embargo, como se señaló en su momento, fue sólo hasta la segunda década del siglo XX que se experimentó una movilización social significativa impulsada por ideas políticas alternativas. La gran agitación vivida en Colombia por cuenta de la organización sindical que, al abrigo del ejemplo de la Revolución Rusa y con una fuerte influencia marxista, alcanzó un alto grado de convocatoria, con figuras emblemáticas, como el ya referido Ignacio Torres Giraldo o María Cano, se convirtió en un referente histórico de las luchas campesinas, de trabajadores y de pequeños comerciantes en el país. Durante este periodo, se observaron fenómenos curiosos como el de los Bolcheviques del Líbano, en el que un grupo de artesanos, dio inicio en el norte del Tolima a un levantamiento popular que se suponía nacional, pero que al final fue reprimido y fácilmente neutralizado¹⁴³. La euforia obrera de los años veinte desapareció abruptamente con el triste episodio de la Masacre de las Bananeras en diciembre de 1928¹⁴⁴ y muchas de las estructuras de trabajadores fueron cooptadas luego por el liberalismo que, ante un Partido Conservador dividido, ganó las elecciones presidenciales de 1930, poniendo fin a una hegemonía conservadora de más de cuarenta años, afincada desde la Constitución de 1886. Esta cooptación obrera fue lo que permitió en los años siguientes que los sindicatos se masificaran en Colombia. Según lo sostiene Urrutia, “el crecimiento del sindicalismo (en los años 30) no es por lo tanto el resultado de la primera legislación en la historia colombiana que reconoció y protegió el derecho de los trabajadores a organizarse. El desarrollo del movimiento obrero después de esa fecha se debió en un grado muy importante al apoyo informal pero decidido que la rama ejecutiva del Gobierno dio al sindicalismo”¹⁴⁵.

La transición a la República Liberal y las reformas adelantadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo entre 1934 y 1938, sirvieron como medida para la canalización de las demandas obreras y campesinas. Entre otras, se introdujo la función social de la propiedad que sentó las bases para una reforma agraria. La denominada Revolución en Marcha fue el primer intento de modernización del país con base en principios liberales de política y, especialmente, de economía. Sin embargo, la pausa en los ambiciosos objetivos experimentada durante los gobiernos posteriores (incluyendo el segundo del propio López Pumarejo), el continuo enfrentamiento entre las élites bipartidistas e inclusive el involucramiento del aparato militar en la vida política nacional, con un intento de golpe en 1944, además de ser una fuente de inestabilidad institucional, generaron una fragmentación en el liberalismo, que para las elecciones de 1946 llegó dividido entre dos facciones que serán

¹⁴³ Sobre la historia de este curioso movimiento, ver: Sánchez, Gonzalo, *Los bolcheviques del Líbano*, ECOE ediciones, Bogotá, 1981.

¹⁴⁴ El 6 de diciembre de 1928, tras un mes de huelga, los trabajadores de la United Fruit Company fueron citados a la estación del tren de Ciénaga (Magdalena) para una presunta cita con el Gobernador para tratar sus quejas. En lugar de la cita, fueron atacados por soldados apostados en el lugar aunque oficialmente la cifra de muertos es de sólo 9 personas, se cree que cientos o quizás miles murieron en esa masacre y sus cuerpos llevados en tren hasta el mar para ser arrojados. Sobre la historia de este acontecimiento, ver: Elías Caro, Jorge Enrique, “La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia. Una historia inconclusa”, en: *Andes* No. 22, Universidad Nacional de Salta, 2011, pp. 1-28.

¹⁴⁵ Urrutia, Miguel, *Historia del sindicalismo en Colombia*, Editorial La Carreta, Medellín, 1976, p.140.

constantes en décadas posteriores: una popular disidente, que apelaba a un discurso socialista, y otra oficial, que defendía la retórica liberal clásica pero era dominada por las élites dentro del partido¹⁴⁶.

La disidencia popular era liderada por Jorge Eliécer Gaitán, quien había tenido una formación ambivalente, que oscilaba entre un apego al socialismo, en sus años de estudiante de derecho¹⁴⁷, y una fuerte preparación en la doctrina positivista, cuando se especializó en Italia con representantes de la frenología criminológica. A pesar de no ser un *outsider*, Gaitán se perfilaba como la figura carismática populista ajena a la dinámica política tradicional, capaz de derrotar electoralmente a las dirigencias habituales de los partidos. No obstante, su insistencia en permanecer por fuera del liberalismo para los comicios de 1946, le significó a este la pérdida del poder y por ende el fin de la República Liberal, después de lo cual se sucedió un gobierno conservador excesivamente autoritario, que fomentó la persecución, inclusive armada, de sus opositores.

Con todo, es durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez que se presencia el inusitado ascenso de Gaitán, quien se perfila entonces no sólo como el candidato único del Partido Liberal, a cuyo oficialismo regresa luego de su frustrado intento disidente, sino también como el futuro presidente, amenazando con el regreso al poder del liberalismo, y a la vez, con establecer un gobierno de tinte popular, por fuera de la lógica elitista tradicional. Mientras en Bogotá se realizaba la X Conferencia Panamericana, en abril de 1948, Gaitán fue asesinado, lo que como reacción inmediata dio pie a un alzamiento violento registrado como el Bogotazo, pero que desencadenó en muchas partes del país, durante los años posteriores, el magro periodo de la Violencia, que para algunos se cierra en 1957, pero para otros es el antecedente verídico del conflicto armado interno que afectó a Colombia durante la segunda mitad del siglo XX¹⁴⁸ y que en principio o al menos parcialmente se cierra con el acuerdo de paz con las FARC a finales de 2016.

Sea que se considere en un sentido o el otro, es posible que el fenómeno de La Violencia guarde relación con el surgimiento de grupos rebeldes armados. La resolución del ciclo violento inicial se logra gracias a un pacto de élites que termina imponiendo por la fuerza al general Gustavo Rojas Pinilla, quien en junio de 1953 da un golpe contra el presidente conservador Laureano Gómez, sucesor de Ospina Pérez. Tres años después, a través de los célebres Pacto de Benidorm y Acuerdo de Sitges en España, las dirigencias bipartidistas convienen el final de la dictadura (que finaliza en 1957) y un ejercicio alternado del poder presidencial, a partir de 1958, con una repartición 1/1 entre los partidos de cada cargo

¹⁴⁶ Esta división en el Partido Liberal, por el que afronta una disidencia que luego regresa al oficialismo, va a ser una constante en buena parte del siglo XX, como sucede, por ejemplo, con la UNIR de Gaitán en los 40, el MRL de López Michelsen en los 70 o el Nuevo Liberalismo de Galán en los 80. Sobre los dos primeros casos, véase: Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia*, Tomo 3, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1977.

¹⁴⁷ La tesis de grado de Gaitán, como abogado de la Universidad Nacional de Colombia en 1924, se tituló *Las ideas socialistas en Colombia*. Ver: Gaitán, Jorge Eliécer, *Las ideas socialistas en Colombia*, Centro JEG, Bogotá, 1984.

¹⁴⁸ Esta es la postura de Daniel Pécaut, quien encuentra un hilo conductor entre la violencia bipartidista de mediados de siglo y la violencia guerrillera que surge durante los años 60. Al respecto, ver: Pécaut, Daniel, *La experiencia de la violencia: los desafíos del relato y la memoria*, La Carreta Editores, Medellín, 2013.

burocrático en el Estado durante dieciséis años¹⁴⁹. Este arreglo, que dio inicio a lo que se conoció como el Frente Nacional, cerró las puertas del sistema a expresiones políticas disímiles, generando una democracia altamente restringida, en la que la izquierda “democrática” resignó sus posibilidades y además fue políticamente perseguida. En parte, el Frente suscitó la aparición de la izquierda armada en Colombia, que inicia en 1964 con la fundación de las FARC y el ELN, prosigue en 1967 con el surgimiento del EPL, y se afianza con el M-19 en 1973. Este último caso es bastante particular, pues la Alianza Nacional Popular (ANAPO), como organización por fuera de la lógica bipartidista, participó de las elecciones presidenciales de 1970 teniendo como candidato a Rojas Pinilla, quien convocó a los sectores populares. Las irregularidades presentadas en la noche posterior a las votaciones, dieron lugar a pensar en un fraude coonestado por el gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo para facilitar el triunfo del conservador Misael Pastrana, quien en realidad habría perdido las elecciones frente al general¹⁵⁰. Este suceso motivó a muchos militantes de la ANAPO a abandonar la lucha política proselitista y tomar el camino de las armas, dando origen al M-19.

En cuanto a las FARC, estas surgen coyunturalmente como respuesta a un ataque militar perpetrado por la Fuerza Aérea contra campamentos campesinos en el sur del Tolima, que debido a sus actividades de autogestión, habían sido consideradas repúblicas independientes por políticos conservadores de la época. Estas absurdas ideas tuvieron eco en el presidente Guillermo León Valencia, quien ordenó los bombardeos en la zona, que generaron el desplazamiento de los campesinos y su decisión de alzarse en armas contra el Estado¹⁵¹. Estructuralmente, estos grupos eran sobrevivientes o herederos de las guerrillas liberales que combatieron al gobierno conservador durante la época de La Violencia, algunas de las cuales, tras los acuerdos de 1953, se habían desmovilizado, aunque otras se mantuvieron en armas hasta mediados de la década del 60.

Las bases políticas y sociales de cada una de estas agrupaciones guerrilleras fueron distintas: en unos casos, se trataba de intelectuales urbanos, formados en universidades, incluso con carreras profesionales consolidadas; en otros, las bases eran campesinas u obreras. Igual atención merece la orientación de su discurso político, pues, como se ha señalado, mientras unas eran pro-soviéticas, otras eran pro-cubanas o pro-chinas. Estas diferencias tenían como sustento la orientación leninista, guevarista o maoísta de su plataforma política, lo que influenciaba en su concepción de la guerra como forma de lucha. Por otra parte, la dicotomía entre reforma y revolución también estuvo presente en la guerrilla colombiana, por lo que agrupaciones como el M-19 o el Quintín Lame se han considerado reformistas, en tanto no perseguían una sustitución absoluta de la estructura socioeconómica del Estado y la sociedad colombiana, sino la introducción de reformas que permitieran una apertura del sistema político o el respeto por los derechos territoriales de los indígenas, en el caso del MAQL.

¹⁴⁹ Sobre los antecedentes y la naturaleza de estos acuerdos, ver: Mesa García, Esteban, “El Frente Nacional y su naturaleza antidemocrática”, en: *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, Vol. 39, No. 110, Enero-Junio 2009, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, pp. 157-184.

¹⁵⁰ Sobre el presunto fraude, véase: Acuña Rodríguez, Olga Yanet, Poder y memoria. “Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”, en: *Revista Escuela de Historia*, Vol. 2, No. 2, Universidad de Salta, 2013. (Revista on-line)

¹⁵¹ Ver: Pizarro Leongómez, Eduardo, “Marquetalia: el mito fundacional de las FARC”, en: *UN Periódico* No. 57, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 9 de mayo de 2004.

Entretanto, para organizaciones como las FARC, el ELN o el EPL, el propósito de lucha era una modificación total de la estructura del Estado, por lo que su doctrina se tornaba esencialmente revolucionaria. En el caso de las FARC, por ejemplo, su 7ª Conferencia en 1982 (en la que pasó a denominarse “Ejército del Pueblo”) constituyó su objetivo de crecer económicamente y consolidar su estrategia de expansión territorial¹⁵², lo que guiará su operatividad durante las tres décadas siguientes, en las que fueron actores principales de la política colombiana.

En cuanto a la izquierda no armada, Colombia tampoco fue ajena a la proliferación partidista de izquierda que estuvo presente en toda América Latina. Así, en 1919 el Partido Socialista de Colombia tuvo su primer congreso, contando entre sus cuadros a Ignacio Torres Giraldo, y en 1926 se funda el Partido Socialista Revolucionario. Por su parte, el Partido Comunista vio la luz en 1930, siendo Gilberto Vieira su máximo representante a lo largo del siglo XX. De este grupo se escinde el denominado Partido Comunista de Colombia-Marxista-Leninista (PCC-ML) en 1965, que crea el EPL como su brazo armado, bajo la tesis de la guerra popular prolongada. Otras experiencias de movilización alternativa, además de los ya mencionados sindicatos de los años 20, van a ser constituidas por las centrales obreras, especialmente en la década del 30, esto sin mencionar a las organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), conformada en 1967, o el propio Movimiento Obrero de Izquierda Revolucionaria (MOIR), que surge en 1969 bajo los postulados del maoísmo, pero con apuesta por la dinámica electoral. La actuación política, aparte de los intelectuales que oficiaban como dirigentes de los diferentes movimientos, tuvo siempre un gran respaldo académico, con autores como el ya referido Gerardo Molina o Diego Montaña Cuéllar, quien arriesgó un esbozo de la historia de Colombia a la luz de la teoría marxista¹⁵³.

Entretanto, a finales de los 70 la implementación del Estatuto de Seguridad Nacional durante el gobierno de Turbay¹⁵⁴ implicó una fuerte persecución a los movimientos sociales, de trabajadores y a la militancia política de izquierda. Hechos como el robo de las armas en el Cantón Norte en el año nuevo de 1979 o la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, ambas acciones ejecutadas por el M-19, repercutieron en un incremento de la represión, lo que llevó a miles de militantes y simpatizantes a prisión. El gobierno de Belisario Betancur va a resultar determinante para la definición del conflicto armado en las décadas posteriores. En primer lugar, porque decretó una amnistía general a los presos políticos, muchos de ellos parte del M-19, que tras la firma del acuerdo de paz en 1990, entrarán a ser parte del panorama político-electoral nacional. Y en segundo lugar, porque los diálogos de paz, que congregan a la mayoría de las agrupaciones guerrilleras, no sólo van a

¹⁵² Ver: Echandía, Camilo; Sánchez, Fabio; Chacón, Mario, *Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002*. Análisis sobre la expansión geográfica de la FARC-EP, Documento CEDE 2005-33, junio de 2005, p.13.

¹⁵³ Ver: Montaña Cuéllar, Diego, *Colombia social: el proceso de formación de las clases sociales en Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.

¹⁵⁴ El Estatuto correspondió a la aplicación en Colombia de la doctrina de seguridad nacional, promovida por Estados Unidos, según la cual la fuerza pública debe concentrarse en combatir al enemigo interno (en este caso, el comunismo) como una manera de defender los intereses nacionales. Sobre el particular, ver: Jiménez, Catalina, “El Estatuto de Seguridad, la aplicabilidad de la doctrina de la Seguridad Nacional en Colombia”, en: *Colección No. 20*, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2009, pp. 75-105.

ser infructuosos sino que van a terminar de manera abrupta, llevando a una radicalización de las posiciones respecto de la persistencia en la lucha armada que, en el caso del “Eme” desembocará en el luctuoso hecho de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, y en el de las FARC y el ELN, impedirán cualquier nuevo acercamiento con el gobierno durante los siguientes años, en los que aquellas, incluso, se retiran de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Del frustrado proceso de paz del gobierno Betancur surge la Unión Patriótica, como un partido de izquierda democrática que en muy poco tiempo alcanzó un alto nivel de movilización, obteniendo en las elecciones de 1986, 5 curules en el Senado y 9 en la Cámara de Representantes, además de 16 alcaldías, 256 concejales y 14 diputados en 1988. Empero, desde su propia creación comenzó a ser violentamente perseguida y sus integrantes a ser asesinados. De acuerdo con Romero, quien verifica los registros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia, “se han contabilizado 1.316 víctimas y 136 sentencias condenatorias, que involucran a 191 personas, 90 sentencias con aceptación de cargos para 106 personas y 11 absolutorias, para un total de 238 fallos y 297 personas comprometidas”¹⁵⁵. Al contrastar estas cifras con las del caso llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la misma Unión Patriótica y algunos colectivos de abogados, se encuentra que “se aportó una lista inicial de 1.163 miembros de la UP ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Igualmente, listas de 123 personas desaparecidas, 43 que sobrevivieron a atentados y 225 que recibieron amenazas durante el mismo periodo”¹⁵⁶. De allí que la CIDH, en su informe de admisión expresara que “los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio y se podría entender que sí lo constituyen”¹⁵⁷. El intento de exterminio de la UP, por la eliminación física de sus integrantes (incluyendo tres candidatos presidenciales), orientado a la disminución de su fuerza política, constituye uno de los más vergonzosos casos de persecución política que, como ya ha sido comprobado judicial e históricamente, fue ejecutado principalmente por grupos paramilitares con apoyo de miembros de las fuerzas armadas y élites políticas y empresariales de las regiones.

Ahora bien, con anterioridad se hizo referencia a las exitosas experiencias de negociación que el gobierno Barco adelantó con cinco organizaciones guerrilleras. Estos acuerdos, aunados a las circunstancias producidas por el narcoterrorismo del Cartel de Medellín, suscitaron las condiciones para el inicio de un proceso constituyente, que culmina con la Carta de 1991. La importancia de este nuevo texto constitucional radica no sólo en su elevado componente garantista, con una amplia carta de derechos y el establecimiento de la fórmula política del Estado social que aspira democratizar por fin la sociedad y el Estado colombianos, sino también en que permite la transición hacia el modelo económico de apertura que empezaba a ser implementado en toda la región latinoamericana por la misma época, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, la proscripción de las dictaduras militares y la aplicación del Consenso de Washington.

¹⁵⁵ Romero Ospina, Roberto, *Unión Patriótica: expedientes contra el olvido*, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá, 2001, p. 169.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 178.

¹⁵⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 5 del 12 de marzo de 1997.

Así las cosas, los antecedentes de tránsito a la democracia y doctrina económica neoliberal, comunes en los demás países de la región a principios de los 90, también se dieron en Colombia, aunque sin la experiencia de una dictadura previa y al abrigo de una reforma constitucional estructural, que surge como resultado, primero, de un proceso de negociación con guerrillas, y luego, como reacción institucional a la violencia del narcotráfico. De igual forma, así como sucedió en otras partes, las promesas de progreso, prosperidad económica y democratización por apertura del sistema político, fueron pronto incumplidas y lo que se experimentó en la práctica fue, por el contrario, un debilitamiento de la industria nacional y el agro, un retroceso en las condiciones del empleo, un aumento en la desigualdad social y en la distribución de la riqueza, una privatización de los servicios públicos que benefició a los dueños de las empresas en detrimento de los usuarios ¹⁵⁸, y finalmente un reacomodamiento de las élites políticas, que mantuvieron cerrado el sistema, se sumieron en una generalizada corrupción y en algunos casos decidieron aliarse con narcotraficantes y/o grupos armados ilegales.

Con respecto al narcotráfico, luego del fin de la amenaza comunista en el subcontinente, el nuevo enemigo externo de los Estados Unidos estuvo representado por el tráfico de drogas. La política externa hacia Colombia estuvo dominada por este discurso y la cooperación técnica y económica se encontraba atada a resultados en materia de lucha contra este delito. De allí que la persecución a los grandes carteles, primero el de Medellín, que culmina con la muerte de Pablo Escobar a finales de 1993, y después el de Cali, que lleva a la captura de sus líderes en 1995, se convierta en una política generalizada. Sin embargo, el narcotráfico logró permear a la clase política colombiana y gracias a fenómenos como el llamado proceso 8.000¹⁵⁹, se expuso esta connivencia en la que se vieron involucrados.

Por otra parte, esa misma clase política, al lado de algunos empresarios y latifundistas, impulsaron la conformación de organizaciones armadas ilegales, destinadas a combatir militarmente a la guerrilla, pero también a perseguir a simpatizantes de izquierda. Este fue el germen de procesos como el mencionado genocidio de la UP y de masacres y desplazamientos en distintas regiones del país. El paramilitarismo ha sido un fenómeno de largo alcance que se origina en los ochenta, crece ostensiblemente en los noventa y se consolida a comienzos del nuevo siglo ¹⁶⁰, con estructuras extendidas por todo el territorio nacional y con una alianza con las élites regionales y cooptación de los presupuestos públicos locales. De acuerdo con Valencia, “en una gran ola de expansión, los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos, transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada

¹⁵⁸ Sobre los efectos tempranos del proceso de apertura, ver: Londoño Rendón, Carlos Enrique, “La apertura económica en Colombia”, en: *Pensamiento Humanista* No. 4, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1998, pp. 39-51.

¹⁵⁹ El proceso 8.000 fue el dirigido por el Congreso de la República contra el presidente Ernesto Samper por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial. Aunque al final fue absuelto por la Cámara de Representantes, lo que le valió que no se le juzgara políticamente ante el Senado, esta investigación sirvió para develar los nexos de muchos congresistas y dirigentes políticos con el narcotráfico, especialmente con los carteles de Cali y de Medellín.

¹⁶⁰ Sobre el proceso de surgimiento y expansión del paramilitarismo, ver: Romero, Mauricio, *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá, IEPRI-Planeta, 2003.

parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado”¹⁶¹.

Aunque en 2004 se inicia un proceso de desmovilización que pretendía dismantelar los grupos paramilitares, con posterioridad a los acuerdos, además de comprobarse el alcance de sus alianzas con políticos, que terminó con el procesamiento y condena de cientos de funcionarios de elección popular, incluyendo 42 congresistas (de un total de 199 parlamentarios investigados)¹⁶², nunca hubo un mecanismo verídico de verificación, lo que promovió la impunidad. Siguiendo al mismo Valencia, “la Ley de Justicia y Paz, creada por el Congreso, consagraba el carácter político del accionar de las autodefensas, y con ello trataba de obviar hacia el futuro la amenaza de la extradición, no hacía obligatoria la verdad en la confesión para la obtención de los beneficios jurídicos y establecía un régimen blando de penas. Era una ley a la medida de las autodefensas. La clase política había cumplido”¹⁶³.

Con el tiempo, muchos de los anteriores miembros del paramilitarismo terminaron conformando nuevas estructuras paramilitares, denominadas ahora Bandas Criminales (BACRIM) que aunque enfocadas en el desarrollo de empresas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión o la explotación ilegal de recursos naturales, también ejercen una persecución a movimientos alternativos y sus militantes¹⁶⁴, aunque estos no sean propiamente de izquierda, como se ha visto recientemente con los asesinatos de líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de Derechos Humanos en las zonas de influencia de esas BACRIM.

Volviendo al recuento de la alternatividad política en Colombia, durante la década del 90, como resultado de los procesos de paz del gobierno Barco y la Constitución del 91, proliferaron algunos partidos y movimientos políticos de izquierda, al igual que hubo un reforzamiento de la actividad sindical. Así, por ejemplo el M-19, que se transformó en organización política, llegó a obtener 19 curules en la Asamblea Constituyente y luego se hizo con alcaldías y gobernaciones. En cuanto a la UP, la fuerte persecución redujo su capacidad de movilización, desapareciendo como partido político en 2002. Esta condición la recuperará apenas en 2013, luego de una intensa batalla jurídica, que permitió el regreso de líderes exiliados como Aída Abella, quien estuvo diecisiete años fuera del país. Para 2001 nace el Frente Social y Político, que en 2002 queda en tercer lugar en las elecciones presidenciales con Luis Eduardo Garzón, quien sería elegido alcalde de Bogotá un año más tarde. Más adelante, en el 2005, se crea el Polo Democrático Alternativo, como una fusión entre el movimiento Alternativa Democrática y el Frente Social y Político, al que se unen otros grupos políticos de similar orientación, incluido el MOIR. El nuevo Polo nace como una coalición de agrupaciones de izquierda, logrando lo que hasta ese momento había sido

¹⁶¹ Valencia, León, y Observatorio del conflicto Armado, “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos”, en: *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Corporación Nuevo Arco Iris – ASDI. Bogotá, 2007, p. 12.

¹⁶² Ver: Revista Semana, *El informe que indica que la parapolítica no es cosa del pasado*, publicado el 17 de abril de 2016. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investigaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010>

¹⁶³ Valencia, *Op. Cit.*, p. 42.

¹⁶⁴ Ver: Prieto, Carlos Andrés, “Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia”, *Policy paper* 47, Marzo de 2013, FESCOL; Bogotá, pp. 1-19.

un imposible del izquierdismo en Colombia: la unión en torno a propuestas programáticas comunes o candidatos únicos.

En el 2006, el Polo llegó a las elecciones presidenciales con la figura de Carlos Gaviria Díaz como candidato, quien había sido magistrado de la Corte Constitucional en su época de oro y contaba con una gran reputación como intelectual y académico. A pesar de que Uribe obtuvo su reelección en primera vuelta, Gaviria obtuvo más de dos millones y medio de votos, siendo hasta entonces la votación más alta de la izquierda en la historia de Colombia, lo que suponía un fortalecimiento de esta opción dentro de los años siguientes. Sin embargo, lo que aconteció fue una fuerte división al interior del Polo, con el surgimiento de profundas diferencias y disidencias que reprodujeron una vez más el eterno problema del sectarismo dentro de la izquierda colombiana¹⁶⁵. A esto se sumó el escándalo de corrupción en la alcaldía de Bogotá, ejercida por un miembro de ese partido, Samuel Moreno, heredero de la antigua estructura de la ANAPO, creada por su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, y con la cual éste había buscado la presidencia en 1970.

Para 2010, Gustavo Petro gana la nominación del Polo como candidato presidencial a las elecciones que finalmente conquista Juan Manuel Santos, y aunque tiene una importante votación, las diferencias al interior del partido se tornan irreconciliables, aún más deterioradas por los efectos del escándalo de corrupción en Bogotá, que fue inicialmente denunciado por el propio Petro¹⁶⁶. Con motivo de estas diferencias, Petro organiza una disidencia, y ya por fuera del Polo, gana la alcaldía de Bogotá en 2011. Una vez en ella, comienza a ser perseguido por la oposición política, encarnada no sólo en el Concejo Distrital, sino también en la figura del Procurador General de la Nación del momento y en los medios masivos de comunicación. En el caso del Ministerio Público, debido a una reforma que promovió en el sistema de recolección de basuras de la ciudad, con el fin de dar participación a las familias recicladoras y buscando desmontar las que denominaba “mafias de contratistas”, (el sistema de recolección de basuras estaba adjudicado a un grupo reducido de empresas) fue destituido por el Procurador, evento que dio inicio a un proceso jurídico que, tras un tortuoso trámite, permitió su regreso a la alcaldía, al amparo de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también lo protegió ante una presunta inhabilidad fiscal, sustentada en la presunta comisión de un detrimento patrimonial al haber aprobado un subsidio en el sistema de transporte masivo de la ciudad cuando era alcalde. Con todo, Petro pudo terminar su mandato y es uno de los candidatos que puntea en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018.

Para este año, los partidos y movimientos de izquierda en Colombia pueden agruparse, en términos generales, así: el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el MOIR, el Partido Comunista (en sus dos versiones: PCC y PCC-ML), el Frente Social y Político, el Movimiento Progresistas (de Gustavo Petro) y Marcha Patriótica, nacida durante el proceso de paz con las FARC, más el nuevo partido conformada por los antiguos militantes de

¹⁶⁵ Sobre el papel que jugó el Polo en la unificación de la izquierda colombiana y su posterior desmoronamiento, ver: Becerra Yañez, Gabriel, *La Nueva Izquierda Latinoamericana y la experiencia del Polo Democrático Alternativo*, Tesis de Maestría en Estudios Políticos e Internacionales, Universidad del Rosario, Bogotá, 2012.

¹⁶⁶ El País, “Polo investigará supuesto cartel de la contratación en Bogotá, 21 de octubre de 2010. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/colombia/polo-investigara-supuesto-cartel-de-contratacion-en-bogota.html>

estas¹⁶⁷. Además, hay múltiples organizaciones campesinas, estudiantiles y de trabajadores, tanto dentro como fuera del sindicalismo tradicional. Algunos incluyen en este grupo al Partido Verde, aunque esta parece más bien una opción de centro. En conclusión, como se ha podido observar, la izquierda en Colombia no es un fenómeno reciente sino que por el contrario cuenta con importantes antecedentes desde hace más de cien años. Ha tenido representantes en el ala democrática, con amplio respaldo intelectual, pero también ha contado con una intensa y prolongada lucha armada. Los procesos de finales de los 80 dieron fin a la mayoría de las organizaciones guerrilleras. No obstante, las más fuertes y antiguas subsistieron, prolongando el conflicto armado interno por un cuarto de siglo más.

2. La revolución imposible: guerrillas y resistencia mediática en el siglo XXI

De manera recurrente se ha insistido en la existencia de diferentes factores que facilitaron el acceso al poder presidencial por parte de candidatos y/u organizaciones de izquierda en la región y que, en términos generales, podrían resumirse como sigue: en primer lugar, un denotado desgaste de la clase dirigente tradicional y de las estructuras político-electorales (partidos) que la sostenían, tanto por un desacertado manejo de la política macroeconómica - que conllevó a consecuentes crisis de ingreso o de desempleo, con un aumento correlativo de la pobreza en el respectivo país - como por los altos índices de corrupción, que horadaron la precaria legitimidad que les resguardaba. En segundo lugar, la percepción (documentada o simbólica) de los efectos nefastos de la política de apertura económica, cuya naturaleza liberal en lo económico estuvo siempre acompañada de un conservadurismo en lo político, en ambos casos, elementos relacionados con una orientación de “derecha”. En tercer lugar, un cerramiento de los espacios de participación democrática, los cuales fueron cooptados por las estructuras clientelistas de los partidos tradicionales o se limitaron a la realización de elecciones periódicas que pronto se percibieron como eventos legitimadores de una élite gobernante. En cuarto lugar, el desinterés de Estados Unidos en la región luego del Fin de la Guerra Fría y el cese de la amenaza comunista que lo conminaba a tener gobiernos aliados en América Latina. Por último, la aparición de líderes carismáticos y/o movimientos políticos alternativos, que se erigieron como la tabla de salvación a los problemas de pobreza, inequidad, exclusión y corrupción de los que se culpaba a los gobiernos vigentes.

Ahora bien, si al menos tres de estos elementos comunes también se experimentaron en Colombia (desgaste y desprestigio de los partidos políticos, efectos negativos del neoliberalismo económico y sistema democrático restringido) habría que hurgar más profundo con el fin de determinar las razones por las cuales la izquierda nunca llegó al poder en ella. A primera vista, el elemento diferenciador se encuentra en la existencia de una guerrilla radical, que luego de cincuenta años aún no ha verificado su total desmovilización. Si bien en otros países también se han dado organizaciones guerrilleras, en ninguno de ellos han persistido durante tanto tiempo ni tuvieron la fuerza que alcanzaron en el caso colombiano.

Tras los procesos de desmovilización ya referidos durante del gobierno Barco, sólo dos organizaciones, precisamente las más grandes y poderosas, las FARC y el ELN, subsistieron

¹⁶⁷ Aunque conservaron su sigla, FARC es ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

en armas. Durante la administración Gaviria se impulsó un pacto constitucional que derivó en la Carta de 1991, la cual, además de establecer la fórmula política de Estado social de derecho, consagró un amplio listado de prerrogativas. Sin embargo, según se anotó, también facilitó la adecuación institucional para la adopción de medidas económicas neoliberales y permitir la política de apertura. Esta experiencia, que además consolidó la descentralización política y administrativa, generó nuevos espacios de participación política y de luchas por el poder que se trasladaron de lo nacional a lo regional y local, con una importante disponibilidad de recursos manejados de forma autónoma. A este juego electoral ingresaron las organizaciones políticas provenientes de anteriores agrupaciones armadas y los tradicionales movimientos políticos de izquierda. La Constitución del 91 aparecía así como las nuevas reglas de juego de la democracia colombiana, a las que aceptó someterse la mayor parte de izquierda tras la Guerra Fría, que entonces se asume como la corriente democrática, y a la que era necesario traer a la armada, que aún se encontraba por fuera de dichos ajustes institucionales.

El éxito de los procesos a finales de los ochenta llevó al gobierno de Gaviria a buscar un acercamiento con la guerrilla de las FARC y el ELN, luego de emprender una ofensiva militar en los primeros meses de su periodo, con eventos como la operación Casa Verde en diciembre de 1990, que atacó las sedes del comando central de las FARC en La Uribe (Meta). A pesar de estos incidentes, en los meses posteriores hubo aproximaciones entre representantes del gobierno y la insurgencia, en ese momento organizada nuevamente como Coordinadora Guerrillera, que los llevaron a diálogos exploratorios en Cravo Norte (Arauca) y Caracas en 1991. Con ocasión del intento de golpe de Estado en Venezuela en febrero de 1992, las conversaciones se trasladaron a Tlaxcala (México). Sin embargo, estos acercamientos fracasaron y tras el rompimiento, en el caso de las FARC, este grupo comenzó una ofensiva militar sin precedentes, con fuertes golpes contra el Ejército Nacional, acaecidos en su mayoría durante el gobierno de Ernesto Samper. Así, mientras el presidente en ejercicio afrontaba un escándalo por el ingreso de dineros provenientes del Cartel de Cali a su campaña, lo que redujo significativamente su gobernabilidad y el apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, enfrentaba también la peor escalada de violencia guerrillera. Como lo resalta Lair, “a partir de la segunda mitad de los años noventa, las FARC (demostraron) una importante capacidad de maniobra, libertad y rapidez de acción. Recordemos que en 1996 atacaron la base de Las Delicias en el departamento del Putumayo. Posteriormente, las tropas del Estado sufrieron otras derrotas tácticas entre las cuales figuran (...) La Carpa en el Guaviare (...), Patascoy, El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare)”¹⁶⁸. Por su parte, el ELN también llevó a cabo acciones, centradas en los ataques contra la infraestructura petrolera, los cuales se justificaban en su política de oponerse al “saqueo” de los recursos naturales del país¹⁶⁹, y en el secuestro, resultando emblemáticos casos como el del Kilómetro 18 o la Iglesia La María, ambos en la ciudad de Cali.

La incapacidad del gobierno para hacer frente a esta escalada, generó un debate sobre la necesidad urgente de reformar y modernizar el ejército, en apariencia sin los instrumentos de

¹⁶⁸ Lair, Eric, “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar”, en: Gonzalo Sánchez, Eric Lair (editores), *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, Norma, Bogotá, 2004, p. 135.

¹⁶⁹ Ver: Medina Gallego, Carlos, *ELN: una historia contada a dos voces*, Rodríguez Quito editores, Bogotá, 1996, p. 234.

guerra e inteligencia necesarios para combatir a la guerrilla. A pesar de esta arremetida violenta, Samper buscó un acercamiento con el ELN, que desembocó en los denominados Acuerdos de Puerta del Cielo en Maguncia (Alemania) en 1998, los cuales buscaron propiciar una mesa de diálogos. No obstante, los esfuerzos por la paz fueron en vano y la opción de una solución negociada al conflicto en Colombia sólo será reabierta durante la campaña para elegir a su sucesor, contienda que es finalmente ganada por Andrés Pastrana.

La elección de Pastrana es interpretada como un voto para la consecución de la paz negociada, la cual venía siendo reclamada por organizaciones de la sociedad civil, que entre otras acciones simbólicas, convocaron a un mandato ciudadano por la paz en las elecciones regionales de octubre de 1997, a manera de una nueva “séptima papeleta”, que asemejara el fenómeno que en 1990 abrió las puertas para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente y permitiera una salida no bélica a la guerra en Colombia. Los acercamientos con la comandancia de las FARC fueron visibles incluso desde antes de la elección de Pastrana como presidente, cuando un video en el que aparece junto al máximo jefe de las FARC, Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fue filtrado a los medios de comunicación. Estos antecedentes facilitaron la instalación de una mesa formal de diálogos en enero de 1999, luego de la desmilitarización, por parte del gobierno, de 42.000 kilómetros cuadrados, correspondientes a la superficie de cinco municipios en las selvas del país.

Empero, el denominado proceso del Caguán sufrió varias eventualidades, tanto coyunturales como estructurales que lo llevaron al fracaso: en el primer caso, las reiteradas acciones militares de la guerrilla, muchas de ellas de alto impacto humanitario o exposición mediática, tales como la Masacre de Bojayá¹⁷⁰, el secuestro de los diputados del Valle¹⁷¹, el secuestro del senador Jorge Géchem¹⁷² y el de la candidata presidencial Ingrid Betancour¹⁷³. En parte, esto pudo deberse a la decisión de negociar en medio del fuego, lo que permitió la continuación de la guerra, generando una creciente animadversión a la paz como posibilidad y aumentó la desconfianza entre las partes. A esto contribuyó el papel de los medios masivos de comunicación, que replicaban de manera grandilocuente los hechos violentos, que además de ocupar un amplio segmento en el desarrollo de sus noticiarios, fueron desbalanceados respecto del registro de de las acciones de la guerrilla frente a las de los paramilitares¹⁷⁴.

Con referencia a las fallas estructurales, debido a la falta de sinceridad, por la que en realidad ninguna de las partes buscaba una salida dialogada, tanto gobierno como insurgencia

¹⁷⁰ Sobre este terrible suceso, ver: Grupo de Memoria Histórica, *Bojayá: la guerra sin límites*, Taurus, Bogotá, 2010.

¹⁷¹ 11 de abril de 2002. Doce diputados fueron secuestrados en la sede de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Once de ellos fueron asesinados en cautiverio por las FARC en el 2007.

¹⁷² 18 de febrero de 2002. Las FARC secuestraron un avión que cubría la ruta entre Bogotá y Florencia, obligándolo a aterrizar en una carretera del Huila, De él se llevaron al Senador, quien fue liberado en febrero de 2008.

¹⁷³ 23 de febrero de 2002. La candidata presidencial fue secuestrada junto con su fórmula electoral Clara Rojas. Su liberación se produjo gracias a la célebre Operación Jaque el 2 de julio de 2008. Por su parte, Rojas fue liberada en enero de 2008.

¹⁷⁴ Sobre el desequilibrio informativo y la ambivalencia del discurso en el tratamiento de acciones de las FARC y los grupos paramilitares, ver: Autores varios, *La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010*, INER, Universidad de Antioquia, Medellín, 2015.

decidieron negociar más como una estrategia para reacomodar sus posiciones militares que a la larga les permitieran una victoria por la vía de las armas, que como un propósito honesto de alcanzar un acuerdo. Esta apreciación se sustenta, por el lado del gobierno, en la adopción e implementación del Plan Colombia, que supuso un fortalecimiento militar, logístico y de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por el lado de las FARC, la zona de despeje sirvió como un territorio para facilitar sus acciones, tales como el cautiverio de secuestrados o el tráfico de drogas. Esto sin mencionar el despliegue estratégico que por ambas partes se extendió a buena parte del territorio nacional. En resumen, los bandos utilizaron el proceso de paz como una estrategia para mejorar sus posiciones militares y en consecuencia sus condiciones para ganar la guerra¹⁷⁵. La ausencia de voluntad real de paz llevó pronto al rompimiento de las negociaciones y al retorno formal de una guerra que en ningún momento había cesado y por el contrario se había incrementado por fuera de la mesa del Caguán.

Entretanto, el ELN sufrió un drástico retroceso económico y de pie de fuerza, que redujo su militancia de 4.000 a 1.500 miembros entre 2002 y 2012¹⁷⁶. Consiguió mantenerse gracias a los secuestros, pero sin una fuerza militar significativa ni una presencia territorial que diera a pensar en un posicionamiento estratégico como el que tuvieron las FARC. El ELN tuvo un papel marginal también en la era Uribe, cuando su capacidad fue aún más mermada y para 2018 se ve como una agrupación que mantiene algunas estructuras, que ejecuta acciones aisladas (como atentados y secuestros) que le permitan fortalecer su posición negociadora, pero sin posibilidad real de logros políticos por la vía armada. Quizá el reconocimiento de esta realidad abrió las puertas para una salida negociada en las postrimerías del gobierno Santos, en plena implementación de los acuerdos con las FARC, de finales de 2016, proceso en el que se contó con el apoyo del gobierno de Ecuador y que para finales de 2017 pactó una tregua y cuenta con un renovado equipo negociador que espera lograr resultados antes del fin del segundo periodo del Presidente Santos.

Volviendo al proceso del Caguán en la era Pastrana, su traumática ruptura, en febrero de 2002, facilitó el ascenso de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia tres meses después. Como candidato, representaba la guerra frontal contra la guerrilla. De esta manera, las FARC se convirtieron nuevamente en el eje central de la campaña presidencial, como había sucedido en las ocasiones anteriores desde 1982 y como lo sería en las siguientes, hasta 2014. La visión de la “mano dura” de Uribe, sin duda ayudado por un fuerte impulso mediático, facilitó su triunfo en primera vuelta. Su gobierno vino a recoger los frutos de la consolidación del Plan Colombia, por lo que la modernización de las fuerzas armadas le permitió propinar grandes golpes a las FARC, entre los que pueden contarse la captura y posterior extradición de alias Simón Trinidad, la Operación Jaque por la que se liberó a Ingrid Betancour o la muerte de Raúl Reyes, entre muchos otros. En este último caso, por haberse producido una incursión en territorio ecuatoriano, la operación correspondiente generó un difícil incidente diplomático con Ecuador, cuyo punto álgido fue la Cumbre de Río en 2008, en pleno auge de ascenso de gobiernos de izquierda en la región¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Esta es la tesis, entre otros, de Lozano, Carlos, *¿Guerra o paz en Colombia? Cincuenta años de un conflicto sin solución*, Editorial Ocean Sur, Bogotá, 2006.

¹⁷⁶ Ver: Ministerio de Defensa Nacional, Balance de operaciones a 15 de diciembre de 2012.

¹⁷⁷ El enfrentamiento entre los presidentes puede observarse en:

<https://www.youtube.com/watch?v=2eisuxxCmvU>

Estos impactos contra las FARC supusieron su repliegue estratégico, como una forma de resistir hasta cuando las condiciones permitieran buscar un nuevo proceso de negociación para reacomodarse¹⁷⁸. De allí que entre el gobierno y la guerrilla haya habido acercamientos durante la era Uribe, a través de mediadores y acciones como la liberación de Rodrigo Granda, el llamado “canciller de las FARC” y la nominación de exintegrantes de esa agrupación como gestores de paz. Sin embargo, tales esfuerzos no fueron fructíferos.

Mientras tanto, el gobierno de Uribe adelantó un proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. Aunque exitoso en el papel, el proceso nunca tuvo ni un mecanismo de verificación ni de seguimiento, por lo que muchos de sus miembros terminaron conformando nuevas estructuras paramilitares, esto sin contar los que nunca se desmovilizaron en realidad. Con todo, la Ley de Justicia y Paz, para principios de 2017 sólo había proferido 47 sentencias de segunda instancia contra exparamilitares, de un total de 4.237 miembros de las AUC que fueron postulados y 195 que finalmente fueron juzgados bajo el régimen de la Ley 975¹⁷⁹. Esta cifra contrasta con el número de desmovilizados¹⁸⁰, evidenciado un altísimo grado de impunidad. Por otra parte, el gobierno de Uribe se vio involucrado en constantes casos de corrupción y abuso de poder y se desató el fenómeno de la parapolítica, por el que casi doscientos congresistas que lo apoyaron terminaron investigados o condenados por sus vínculos con grupos paramilitares. A este hecho se sumaron la permanente persecución a la oposición, la paramilitarización del organismo de inteligencia del gobierno, las miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército (conocidas como “falsos positivos”), la corrupción en la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial de Uribe, además de otros eventos de similar naturaleza. Para 2015, más de treinta miembros de su círculo cercano de gobierno habían sido encarcelados o investigados judicialmente por la comisión de delitos¹⁸¹.

Lo llamativo es que, a pesar de todas estas circunstancias, la figura de Uribe sigue siendo una de las de mayor favorabilidad en la opinión pública de la sociedad colombiana, lo cual sólo puede explicarse en la fuerte animadversión que la guerrilla (de las FARC) causa en la misma. En tal sentido, la persistencia de una movilización armada después del fin de la

¹⁷⁸ Para Pizarro Leongómez, el repliegue de las FARC es en realidad un “debilitamiento estratégico que los lleva a la convicción de la imposibilidad de acceder al poder por la vía armada, a la idea de haber entrado en una etapa de desgaste irreversible y, en consecuencia, a la convicción de la negociación como única opción viable”. Pizarro Eduardo, “Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?”, en *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*, Francisco Gutiérrez Sanín (Ed.), IEPRI, Editorial Norma, Bogotá, 2006, pp. 196.

¹⁷⁹ Fiscalía General de la Nación, Gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Disponible en: <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/unidad-de-justicia-y-paz/>

¹⁸⁰ “Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con 4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque Elmer Cárdenas con 1.538”. Organización de Estados Americanos, Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), Febrero de 2007, citado en:

<http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4#nota1>

¹⁸¹ Ver: La Silla Vacía, El círculo de Uribe: cada vez más condenado, 16 de abril de 2015. Disponible en: <http://lasillavacia.com/historia/el-circulo-de-uribe-cada-vez-mas-condenado-49957>

Guerra Fría, que en términos teóricos aparece como anacrónica, aún más con la experiencia de democratización (al menos formal) que trajo consigo la Constitución del 91, produjo, no sólo una imposibilidad general de la izquierda para mostrarse como una opción real de poder a nivel nacional (con todo y algunos triunfos a nivel regional), sino que también provocó una profunda “derechización” del país, que llevó al encumbramiento de un discurso en el que, además de defenderse la guerra como el único medio de solución del conflicto en Colombia, bajo la idea de una aniquilación militar total del enemigo (representado fundamentalmente en las FARC), legitimó, al menos simbólicamente, las acciones de los grupos paramilitares¹⁸².

Este fenómeno conllevó a que en Colombia se experimentara un proceso, similar en sus condiciones pero contrario en sus resultados, a los que se presentaron en la mayoría de sus países vecinos, en cuanto a alternativas políticas se refiere. Es así como, pese al desgaste de la clase dirigente tradicional y sus estructuras político-electorales, a los problemas de pobreza, inequidad, exclusión y corrupción, a los estragos de la política económica de apertura y a un persistente cierre material del sistema democrático, a pesar de los propósitos de la Constitución del 91, el líder carismático que se erigió como tabla de salvación, logró su ascenso basado en un exacerbado discurso de lucha, no contra esos problemas, sino contra las FARC. A esto hay que agregar que durante la administración de George Bush Jr. (2001-2009), coincidente en gran parte con la de Uribe, Estados Unidos fue un gran aliado del gobierno colombiano, primero por la continuación del Plan Colombia, que había sido concebido y aprobado en tiempos de Pastrana y Clinton, y luego por el Plan Patriota, que agregó recursos al ya abultado gasto militar, que en 2009 llegó a representar 3,7% del PIB¹⁸³. Lo anterior para resaltar que, contrario a otros países de la región, los Estados Unidos mantuvieron especial interés en Colombia, debido a la modificación del “enemigo externo” norteamericano, que con la desaparición de la URSS dejó de ser el comunismo y fue remplazado por el narcotráfico y más adelante por el terrorismo, por lo que la consideración de las FARC como una organización narco-terrorista encajaba perfectamente en esa nueva concepción del enemigo.

De manera que el descontento popular tuvo un chivo expiatorio perfecto, al cual culpar de todos los males del país y que por su bajísima imagen, su nula credibilidad y el acendrado y extendido rechazo que generaba en la sociedad, terminó convirtiendo en líder nacional a quien personificaba su más duro contendor. Esta exitosa política discursiva de odio a las FARC dejó a un lado los debates sobre otros grandes problemas de Colombia, como la pobreza, la inequidad y la corrupción, que en teoría podrían ser los “caballitos de batalla” de los movimientos políticos alternativos, concentrando la discusión pública en la actitud frente a las FARC. Por eso, durante el gobierno Uribe, los llamados a debatir sobre otros asuntos o a buscar una solución negociada con esa guerrilla, y en general, todo lo que fuera ajeno a la agenda temática presidencial, fue identificado como alianza o simpatía con el terrorismo. Su estrategia de dividir el país entre aquellos que lo apoyaban (los “buenos”) y los que no (los

¹⁸² Cruz Rodríguez, Edwin, Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto hegemónico, en: *Ciencia Política* No. 8, Julio-Diciembre 2009, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 83-114.

¹⁸³ Ver: Ministerio de Defensa Nacional, *Historia del gasto en defensa*. Disponible en: <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf>

“malos” aliados del terrorismo, entre los que se contaban opositores políticos, jueces, periodistas, defensores de DDHH, etc.) contribuyó a una marcada y prolongada polarización del país¹⁸⁴.

Esta polarización se acentuó con el inicio de un nuevo proceso de negociación con las FARC, ya bajo el gobierno Santos, en septiembre de 2012, y sus mayores expresiones fueron las elecciones presidenciales de 2014, cuando el candidato apoyado por Uribe ganó en primera vuelta obligando a una reacomodación de las fuerzas políticas alrededor del presidente Santos para garantizar la continuación del proceso de paz, resultando este vencedor en el balotaje con un 51% frente a un 45% del aspirante por el uribismo. La otra muestra del clima polarizado se dio con ocasión del plebiscito por la paz, que Santos convocó en octubre de 2016 para ratificar los acuerdos con las FARC. El triunfo del rechazo a lo acordado, liderado por Uribe, tuvo dos significativas repercusiones: por una parte, reafirmó la división que se vive en el seno de la sociedad colombiana, y por otra, confirmó el proceso de derechización de Colombia, llegando a extremos como el de preferir la continuación de la guerra que permitir la desmovilización (y desaparición) de las FARC¹⁸⁵, que se consolidó así como el enemigo número uno de la sociedad.

Ahora bien, no se trata de afirmar categóricamente que la existencia de las FARC fue la causa principal para impedir la llegada de la izquierda al poder presidencial en Colombia, pero sí que su consolidación como enemigo público principal, aunado a la reiteración mediática, aportó para que buena parte de la sociedad colombiana diera un giro determinante hacia la derecha del espectro político. Aunque, según se sostuvo, las FARC fueron el elemento clave en todas las elecciones presidenciales desde 1982 hasta 2014, tras la caída del Muro de Berlín, el fin de las dictaduras y la transición a la democracia en América Latina, la lucha armada perdió su legitimidad, y su insistencia en ella, con infructuosos procesos de diálogo de por medio, terminó cerrando las vías a la izquierda “democrática”, como consecuencia de ese giro a la derecha que se evidenció en Colombia.

Sin embargo, la cuestión fundamental a subrayar aquí es que las FARC no son toda la izquierda, ni siquiera representan un sector amplio de la misma; de hecho, la lucha armada siempre ha generado un rechazo en la mayoría de los dirigentes de la izquierda colombiana. A pesar de esto, la estrategia de un sector de la derecha ha sido exitosa en su capacidad de vincular, real o simbólicamente con la guerrilla, a todo aquel militante o simpatizante de izquierda, y a quienes, sin poder encuadrarse en esa orilla del espectro político, realizan un trabajo político, académico o social crítico y/o alternativo. Por ello, en el discurso de Uribe, por ejemplo, el terrorismo tenía muchos aliados en los jueces, investigadores, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, etc.

Así las cosas, la persistencia y subsiguiente deslegitimación del movimiento insurgente en un escenario post Guerra Fría, facilitó la “satanización” de la lucha armada, estigmatización que se hizo extensiva a todos los discursos, estudios, movimientos políticos y/o sociales, académicos, y en general, a todo lo que se mostrara como alternativo desde el punto de vista

¹⁸⁴ Ver: Semana, Álvaro Uribe y el terrorismo, 4 de marzo de 2011. Disponible en: <https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-terrorismo/236313-3>

¹⁸⁵ Un ejemplo de ello en: http://caracol.com.co/radio/2017/09/19/nacional/1505832091_656384.html

político, encasillado bajo el mote de “izquierda”. La macartización de la diferencia política no se dio sólo a nivel discursivo, sino que también fue objeto de violencia armada, por el accionar de grupos ilegales de extrema derecha, tanto paramilitares como del propio Estado. Además, la izquierda en Colombia también ha sido objeto de una constante agresión mediática, no sólo por las críticas a los gobiernos regionales dentro del país conquistado por movimientos o partidos de esta tendencia, sino también por la resonancia permanente de las críticas a los gobiernos izquierdistas de otros países de la región, en especial Venezuela.

En efecto, la violencia política que, como ya se mencionó, afectó a la Unión Patriótica, se extendió a otras manifestaciones alternativas. De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, entre 1986 y 2011 fueron asesinados 2.917 sindicalistas¹⁸⁶. Además, 140 periodistas fueron víctimas de homicidio entre 1997 y 2012, siendo al menos una tercera parte de su autoría atribuible al paramilitarismo o a la fuerza pública¹⁸⁷, y 219 líderes o miembros de movimientos alternativos fueron asesinados entre 2009 y 2013. Muchas de estas fechas concuerdan con los años de expansión del paramilitarismo que comenzó en antiguos enclaves del Partido Comunista, como Puerto Boyacá, y rápidamente se extendió a otras zonas del territorio nacional. En este proceso de expansión van a jugar un papel importante tanto los empresarios como los políticos.

Con referencia a los primeros, casos como el de Chiquita Brands, que apoyó financieramente durante años a grupos paramilitares¹⁸⁸, demuestran la connivencia entre una parte del sector privado y grupos armados ilegales, así como evidencian la debilidad institucional del Estado colombiano y de la justicia del país en cuanto a Derechos Humanos se refiere. Al respecto, el caso fue abierto y juzgado en los Estados Unidos antes que en Colombia, donde apenas luego de ocho años de que la empresa abandonó el país, se inició una investigación que no obtuvo resultados. Por otra parte, como se ha planteado, el paramilitarismo supo permear la clase política y asirse al poder local. La denominada Parapolítica fue un fenómeno de tal magnitud que sólo hasta 2012 ya alcanzaba a 3 gobernadores, 96 alcaldes, 179 concejales, 3 diputados, 55 funcionarios públicos de otros niveles y 29 contratistas del Estado¹⁸⁹, esto sin contar a los congresistas que fueron investigados y/o condenados, a quienes ya se hizo referencia con anterioridad. La infiltración a las administraciones locales afectó a 12 departamentos y 712 municipios del país¹⁹⁰. Hechos como el tristemente célebre Pacto de Ralito para la refundación de la patria de 2001 y otros acuerdos similares, son evidencia del nivel de enquistación que este proceso tuvo en la vida política colombiana.

¹⁸⁶ Citado por: Verdad Abierta, *Estadísticas Defensores de derechos humanos, sindicalistas, docentes y periodistas*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/cifras/3831-estadisticas-de-sindicatos-docentes-y-%20periodistas->

¹⁸⁷ Ver: *ibíd.*

¹⁸⁸ Ver: Semana, Esto no huele bien: el caso Chiquita, 31 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/esto-no-huele-bien-caso-chiquita/255731-3>

¹⁸⁹ Ver: Semana, Casi 500 investigados por parapolítica en los últimos cinco años, 25 de octubre de 2012. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/casi-500-investigados-parapolitica-ultimos-cinco-anos/266865-3>

¹⁹⁰ Ver: Álvaro, Miriam, “La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana”, en: *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Colloques, puesto en línea el 15 de mayo de 2007.

La alianza entre políticos y paramilitares se convirtió en una estrategia de protección mutua de intereses. Por eso, no fueron pocas las veces en que acciones de los paramilitares obedecieron a órdenes o instrucciones directas de congresistas, como en el caso de la masacre de Segovia en 1988 o la de Macayepo en el 2000. Además, aseguraban la votación necesaria para el acceso a los cargos públicos de los candidatos aliados, los cuales, una vez en el poder, a cambio entregaban el presupuesto de las administraciones municipales para financiación de la causa paramilitar o promovían normas que los beneficiaran. El paramilitarismo desarrolló así una estrategia sistemática de doble alcance: por un lado, la persecución violenta de todo militante o simpatizante de izquierda o de toda manifestación de alternatividad o crítica social. Por otro lado, la apropiación del presupuesto público de los municipios a través del apoyo, abierto o velado, a candidatos a cargos y corporaciones públicas. Este dinero “legal” se sumaba a los ingresos que los grupos de autodefensa ya recibían gracias al apoyo de empresarios, ganaderos y terratenientes, así como del tráfico de drogas.

“Mediante estas dos estrategias, violencia y clientelismo, los paramilitares se infiltraron en el ámbito local. Para ello, la clase política era necesaria como medio para introducirse en las instituciones del Estado, gobernar en las regiones y capturar las rentas del presupuesto público. Igualmente, necesitaron a los políticos para adentrarse en el poder legislativo y judicial, lograr nombramientos burocráticos en el poder ejecutivo e imponer candidatos en las elecciones afines a su ideología”¹⁹¹.

El auge del paramilitarismo llevó el conflicto armado colombiano a un nivel de degradación que se traduce en terribles cifras: 150.000 muertos entre 1981 y 2012 y 2.729.153 desplazados entre 2003 y 2012¹⁹². El proceso que facilitó la Ley de Justicia y Paz, como se indicó, ha tenido resultados mínimos, primero, por la falta de verificación en la desmovilización, ya que nunca fueron claras las cuentas de los integrantes de grupos de autodefensa que se desmovilizaron y contrastan las versiones del gobierno con las de organizaciones civiles. Segundo, por la falta de justicia, que habla de apenas 9 sentencias condenatorias definitivas. Con el término máximo de ocho años de pena para los ex paramilitares que se desmovilizaran, todos aquellos que se encontraban presos ya obtuvieron su libertad y para los que debían ser juzgados a la luz de dicha ley, el término prescribió, por lo que ya no podrán ser procesados. Finalmente, porque muchos que se desmovilizaron regresaron a las armas y otros ni siquiera se desmovilizaron en verdad; en ambos casos, acabaron por conformar las que hoy se denominan Bandas Criminales (BACRIM), que no son otra cosa que el reciclaje del anterior paramilitarismo, que ahora, bajo una nueva generación, deja de lado las reivindicaciones políticas (aunque sigue persiguiendo a los miembros de movimientos alternativos) y apela al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión como medios principales de financiación. Estas organizaciones, como las Águilas Negras, los Urabeños, los Rastrojos, el Clan del Golfo, etc., albergan además estructuras heredadas de los ejércitos privados que resguardaban viejos capos de la droga, especialmente en Urabá y el Valle del Cauca¹⁹³.

¹⁹¹ *Ibíd.*

¹⁹² Centro Nacional de Memoria Histórica, *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, Bogotá, 2013, p. 42, 71.

¹⁹³ Ver: Prieto, *Op. Cit.*

El neoparamilitarismo es el responsable de buena parte de las muertes de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos acontecidas durante y con posterioridad a la firma del Acuerdo de paz con las FARC. Curiosamente, uno de los apartes de dicho acuerdo prevé la protección para este tipo de militantes. Desde 2016 hasta febrero de 2018, 282 líderes o defensores de Derechos Humanos fueron asesinados¹⁹⁴.

Por otra parte, mucho se ha especulado sobre el papel que han jugado los medios en la dinámica de satanización de la izquierda y que han horadado sus posibilidades para erigirse como una opción real de poder a nivel nacional. Este trabajo se ha efectuado en dos frentes: en primer lugar, como se ha anotado, el fuerte trabajo de los medios masivos de comunicación que de manera permanente censuraban el accionar de la guerrilla, pero en algunos casos legitimaban el de los grupos paramilitares, terminó abonando el terreno para una derechización del país, que recibió sin asombro el proceso de paz con las autodefensas, pero se mostró siempre reacio a las negociaciones con las FARC¹⁹⁵. Particular ha sido el caso de RCN, tanto en radio como en televisión, cuya editorial fue abiertamente opositora a los diálogos del Caguán y al posterior proceso de paz durante el gobierno Santos, al tiempo que se convirtió en la promotora no oficial del uribismo y en el medio informal de difusión del paramilitarismo¹⁹⁶. Esa misma línea editorial ha sido adoptada por la prensa nacional, como en el caso de El Tiempo y El Espectador, por Caracol radio y en menor medida, por Caracol televisión. El común denominador en todos estos medios es que son propiedad de los hombres más ricos de Colombia.

De igual manera, los medios se han dado a la tarea de criticar de forma extrema a los gobiernos de izquierda de la región, con especial obsesión por Venezuela, y en su momento, por la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. En el caso de RCN televisión, su noticiero, así como el programa La Noche, se han transformado en espacios dedicados exclusivamente a la crítica de la izquierda. Además, RCN creó un canal internacional de noticias por televisión (NTN 24), cuya tarea fundamental es reprochar todas las medidas del gobierno de Venezuela, primero en la era Chávez y luego con Maduro a la cabeza, y a realzar las opiniones de la oposición en ese país, a la que se presenta en todo momento como víctima de persecución.

Ahora bien, la ensaña mediática contra el gobierno de Venezuela y el de Petro en Bogotá, lleva a preguntarse por qué esa crítica persistente no recae sobre otros gobiernos que también se consideran de izquierda en la región, como Ecuador, Bolivia o Uruguay. Quizá pueda deberse a que, como se vio, en varios de estos países los logros en materia social bajo gobiernos alternativos han sido interesantes. De allí que la paranoia mediática recaiga sobre Venezuela, por ser el país donde el modelo hizo crisis, tanto desde el punto de vista económico como del político, por la fuerte persecución a la oposición política y a los medios de comunicación críticos.

¹⁹⁴ Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 026/2018.

¹⁹⁵ Ver: García, Alexandra, “De por qué odiamos a las FARC (y no tanto a los paras...)”, en: *Las 2 orillas*, 11 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.las2orillas.co/de-por-que-odiamos-a-las-farc-y-no-tanto-a-los-paras/>

¹⁹⁶ El inicio de esta línea editorial se dio con una entrevista que Claudia Gurissatti realizó a Carlos Castaño en el año 2000. Allí también tuvieron espacio otros comandantes paramilitares, como Salvatore Mancuso.

En el caso de Petro, el papel de la prensa fue repetir el discurso de que la izquierda no está preparada para gobernar (afirmando por ejemplo, que el alcalde había sido un muy buen senador, pero como administrador era incapaz), con un amplio despliegue de las fallas en su gobierno y una mínima difusión de sus logros¹⁹⁷. Estas acciones, cuando son reiterativas, terminan por influir en la actitud de la sociedad frente a ciertas opciones políticas y su consecuente comportamiento electoral. Lo llamativo es que a pesar de toda la campaña informativa en contra, para principios de 2018, Petro es uno de los candidatos presidenciales que encabezan las encuestas¹⁹⁸.

El papel de los medios también ha tenido repercusiones en el lenguaje performativo. Por ejemplo, basados y con apoyo en el uribismo, crearon el concepto de *castrochavismo* para personificar al nuevo enemigo público a combatir, que estaba representado tanto externamente en el “socialismo del siglo XXI” de los gobiernos de izquierda en América Latina, como internamente en todas las expresiones políticas alternativas de Colombia, que abarcaban no sólo expresiones políticas disímiles e izquierda, sino también posturas progresistas (de “liberalización”) de la sociedad, muchas de ellas con desarrollo jurisprudencial en la Corte Constitucional en los últimos años, tales como la despenalización del aborto y del porte de la dosis mínima de droga o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es este ecléctico, etéreo y cuestionable concepto, en el que básicamente caben todas las ideas o expresiones que no sean de derecha, el que se cierne entonces como la nueva amenaza para el *statu quo*, al menos de manera simbólica en el imaginario colectivo de los simpatizantes de esta opción del espectro político¹⁹⁹.

Conclusiones preliminares

La izquierda en Colombia ha tenido fuertes enemigos. El primero de ellos es la guerrilla, ya que después de los procesos de desmovilización del gobierno Barco y el fin del socialismo real, decidió persistir en la lucha armada, a pesar de la pérdida de legitimidad que se cernía sobre la misma. No supo interpretar el momento histórico ni las oportunidades que se abrieron, primero con la Constitución del 91, y después con los diálogos impulsados por el gobierno desde el propio periodo Gaviria. A una mesa exitosa se llegó luego de muchos años de degradación del conflicto, de la reducción al mínimo de la aceptabilidad de la guerrilla y en momentos en que la derechización del país impidió llevar a cabo transformaciones relevantes en el sistema económico-político por la vía negociada. En consecuencia, el

¹⁹⁷ Ver: López, Mario, “¿Por qué los medios atacan a Petro?”, en: *Las 2 orillas*, 30 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.las2orillas.co/por-que-los-medios-atacan-petro/>

¹⁹⁸ Ver: <http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pulso-pais-con-el-129-gustavo-petro-lidera-intencion-de-voto-para-la-presidencia/20170207/nota/3376948.aspx>

¹⁹⁹ Sobre lo que se entiende como castrochavismo se han escrito numerosas columnas de prensa. Estas son algunas de ellas:

<http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/significado-del-castrochavismo/16715527>

<http://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/jorge-restrepo-potes/el-castro-chavismo.html>

<http://www.elspectador.com/opinion/opinion/castrochavismo-columna-652968>

<http://www.semana.com/opinion/articulo/castro-chavismo-el-dano-que-hace-la-palabra-opinion-de-juan-diego-restrepo/381145-3>

<http://www.las2orillas.co/castrochavismo-cascaron-vacio-del-uribismo/>

proceso de paz durante el gobierno Santos sirvió únicamente como medio para desmovilizar a las FARC, pero no trajo consigo un reformismo rescatable. Cabe preguntarse si valieron la pena cincuenta años de lucha para terminar así. Igual suerte parece esperarle al ELN, que a principios de 2017 por fin inició un proceso de diálogo con el gobierno, luego de diecinueve años.

El segundo enemigo es el accionar paramilitar, que aliado con clases políticas regionales sí ha sabido combinar con suficiencia las formas de luchas. Por una parte, lograron apoderarse del sistema burocrático de los municipios y cooptar los presupuestos locales. Por otra, desplegaron ampliamente su maquinaria criminal, eliminando a todo posible adversario o crítico de la gestión política o del propio accionar paramilitar. El tercer enemigo ha sido la gran prensa, encarnizada contra todo lo que represente una opción de gobierno de la izquierda, con una especial obsesión con Venezuela y con Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

Es por eso que a pesar de compartir elementos en común con otros países de América Latina, en Colombia, la persistencia de estos enemigos (la existencia de guerrilla armada después de los 90, el paramilitarismo y la persecución por los medios masivos de comunicación), aunado al acompañamiento permanente de la política exterior de Estados Unidos, terminaron por impedir una opción viable de izquierda a nivel nacional. Esto lleva a concluir que en Colombia han existido circunstancias propias que han impedido el ascenso de la izquierda al poder nacional y cuya desaparición no garantizará por sí sola que aquella emerja como una latente posibilidad en el futuro cercano.

Habrà que ver qué acontece tras la firma de los acuerdos con las FARC, su desmovilización y conversión en partido político sin armas, y si esto le abrirá nuevas posibilidades a la izquierda democrática en Colombia. No obstante, el elevado clima de polarización y la ya reseñada derechización del país, no auguran buenos resultados, al menos en el corto plazo. La posibilidad de un gobierno de derecha en 2018 puede, o bien cerrar aún más las posibilidades de la izquierda, o bien evidenciar las fallas de las opciones tradicionales en el espectro político, resaltar otros problemas de mayor relevancia en el país y entonces revitalizar las posibilidades de los movimientos alternativos.

Conclusiones generales

El recuento de la llegada reciente y el mantenimiento en el poder de la izquierda en América Latina, llevado a cabo en las páginas precedentes, ha arrojado algunos resultados interesantes: en primer lugar, se mostró que los movimientos alternativos a los partidos políticos tradicionales en la región no son un fenómeno reciente, sino que cuentan con antecedentes incluso en el siglo XIX. La existencia de la izquierda política latinoamericana se debatió entre un importante componente teórico, construido por la obra de pensadores e intelectuales críticos, en cuyo discurso apelaron, en términos generales, a una adaptación de la retórica socialista recurrente (especialmente la marxista) a las condiciones propias del subcontinente; y otro componente práctico o de acción política concreta, a la vez bifurcado entre la corriente que apostó al ejercicio proselitista electoral y la que optó por las armas como estrategia de acceso al poder, en medio de un persistente debate entre reformismo y revolución.

En segundo lugar, se observó cómo, tras el fin de la Guerra Fría, la opción armada perdió su legitimidad, por lo que la izquierda privilegió la vía electoral como método de práctica política. Esto se debió a los distintos efectos que el fin del socialismo real tuvo en América Latina, primero, al alejar el interés del gobierno norteamericano por mantener gobiernos afines en la región ante la desaparición de la amenaza comunista; segundo, al proscribir de forma definitiva las dictaduras militares y asegurar un tránsito a la democracia, con participación de sectores no tradicionales; finalmente, por el estímulo a la apertura económica, cuyos resultados fueron considerados negativos, facilitando un discurso de crítica contras las medidas neoliberales implementadas.

En tercer lugar, se revisó que el éxito de los candidatos presidenciales de izquierda se debió, en términos generales, a su capacidad carismática de erigirse como tabla de salvación a problemas estructurales de sus países, derivados fundamentalmente de la crisis de las élites políticas tradicionales, a las que se asociaba con corrupción e incompetencia, y a las que pudo culparse de males como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y el cariz cerrado del sistema político, que se veía entonces como un simple medio legitimador periódico. Esto, unido a las consecuencias achacadas a la apertura económica y el repentino desinterés de los Estados Unidos en la región, facilitaron para la izquierda en ascenso un discurso de crítica contra la derecha, que tuvo eco en los sectores populares y académicos, abriéndoles las puertas para el ejercicio del gobierno.

Fue así como el fenómeno de la “marea rosa” se extendió a todos los países latinos de Sudamérica, con excepción de Colombia, y a otros tres en Centroamérica, estableciendo una tendencia histórica. Con el tiempo, gracias a las orientaciones de sus políticas y a las medidas implementadas, estos gobiernos pudieron clasificarse, a grandes rasgos, en un grupo moderado, que buscaba la introducción de reformas sociales sin un cuestionamiento profundo del sistema económico, y otro popular-radical, que pretendió desarrollar cambios de fondo en la estructura política y económica del Estado correspondiente, lo que en la mayoría de los casos le ha valido reiteradas críticas en materia de Derechos Humanos (por la persecución a

la oposición y a la prensa), de manejo de la política macroeconómica y de inseguridad jurídica (por el reformismo constitucional). Sin embargo, pudo observarse también que, salvo el caso de Venezuela, las reformas no significaron una modificación sustancial del sistema, por lo que los resultados de la izquierda en América Latina son más bien relativos y las críticas que se han propuesto contra muchos de sus gobiernos no se encuentran plenamente justificadas, sino que éstos más bien pueden reputarse relativamente similares a los gobiernos de derecha en la región

Por último, se analizó el caso de Colombia, donde a pesar de compartir con otros países algunas de las mismas causas que en estos permitieron el triunfo electoral de movimientos políticos alternativos en unos comicios presidenciales, la izquierda no ha podido asirse al poder, por lo que resultaba preciso examinar cuáles eran los elementos diferenciadores. Así las cosas, se identificó que la persistencia de una izquierda armada, representada esencialmente en la guerrilla de las FARC, conllevó a una derechización del país que, además de polarizar a la población, terminó legitimando para algunos el accionar de los grupos paramilitares, que al tiempo que combatían a la insurgencia, se dieron a la tarea de perseguir y eliminar sistemáticamente a personas que identificaban con la izquierda y también a aliarse con sectores políticos para garantizar su sostenimiento financiero a través de la cooptación de los presupuestos públicos municipales y obtener leyes favorables de sometimiento a la justicia.

De acuerdo con lo expuesto, los objetivos generales del trabajo, tendientes a ilustrar el ascenso de la izquierda reciente en América Latina, arriesgar una tipología de la misma, reflexionar sobre su significado, revisar las críticas que se le han puesto de presente y tratar de responder al interrogante de su imposibilidad en Colombia, han sido alcanzados. Asimismo, la hipótesis sobre el elemento distintivo de la existencia de una guerrilla alzada en armas después de los 90, de una paramilitarización y derechización del país y de un efectivo trabajo de creación de un discurso adverso a las expresiones de izquierda, llevado a cabo por los grandes medios de comunicación, y que en general, son los factores que han impedido el triunfo de una opción de izquierda a nivel nacional en Colombia, también fue comprobada. Es por eso que, pese a compartir procesos históricos similares con algunos de sus países vecinos, en el caso colombiano han existido circunstancias específicas que han imposibilitado el ascenso de la izquierda al poder presidencial y su desaparición no asegurará que se transforme automáticamente en una posibilidad real en los próximos años.

Las revoluciones no son permanentes

Las grandes lecciones que deja el repaso efectuado es que, con todo y las reformas que se realizaron, en realidad no hubo transformaciones trascendentales en el modelo político o económico de los países en donde la izquierda ganó. En términos de la dicotomía reforma/revolución, a la que se hizo referencia en un aparte del trabajo, puede sostenerse que en todos los lugares, salvo Venezuela, la izquierda sólo pudo desplegar una agenda reformista, que en algunos casos permitió la ascendencia de un enfoque social o progresista en las políticas públicas, y en otros generó una excesiva concentración del poder por obra de las modificaciones constitucionales respectivas. En cuanto al caso venezolano, es quizá el único país donde se llevó a cabo una revolución, entendida como un cambio estructural en

los fundamentos socio-políticos (aunque en este caso, no económicos) que sustentaban su modelo institucional, que sin embargo, tuvo dos efectos adversos: por una parte, más que un proceso de democratización de la sociedad, en el que el sistema se abriera a la participación popular, la “Revolución Bolivariana” originó una sustitución de élites, encarnadas ahora en la “boliburguesía” chavista. Por otra parte, el esquema de orientación socialista fracasó en Venezuela, si bien más como consecuencia de un mal manejo de la política macroeconómica que por fallas estructurales de la propuesta, pero ha terminado por irradiar su efecto negativo (así sea simbólico) a todos los gobiernos alternativos de la región, los cuales, como se vio, no puede aseverarse que hayan fracasado.

La otra gran lección consiste en que la izquierda, al aceptar su ingreso concluyente e irreversible a la lógica electoral, esto es, el abandono definitivo de la vía armada como estrategia de acceso al poder por una apuesta democrática, que sustenta sus reglas de juego en la posibilidad de triunfo o derrota, debe prepararse para perder las elecciones. Así como efectivamente ya ha sucedido en Perú, Argentina y Chile (sin mencionar aquí las derrotas en Brasil, Paraguay y Honduras, por haber sido cesaciones abruptas en el ejercicio del poder no canalizadas por la vía eleccionaria), la izquierda ha de estar preparada cuando llegue el turno de salir perdedora en unos comicios presidenciales en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, El Salvador y la misma Venezuela, bien sea que este cambio ocurra en el transcurso de lo que queda de la década o después del 2020. Esas son las reglas a las que aceptó someterse y, aun en caso de resultados adversos, estos deben ser reconocidos y aceptados.

No obstante, la posibilidad de derrota no implica una desaparición definitiva de las opciones de la izquierda en la región. El juego democrático está diseñado para dar la posibilidad de ganar en las siguientes elecciones, por lo que una propuesta política alternativa bien puede hacerse a la victoria tanto en aquellos países donde ya ha gobernado, como ha pasado en Chile, por ejemplo, como en otros donde no. Es por ello que el regreso al ejercicio de la oposición, que fue recurrente en la izquierda latinoamericana durante todo el siglo XX, no debe verse como un retroceso, sino como una consecuencia previsible de haberse sometido al esquema democrático vigente. Además, la práctica opositora debe servir, primero, para que la izquierda se prepare mejor para gobernar y no sea víctima de improvisaciones o errores de planeación. En este sentido, puede apuntar a transformarse en una oposición como las que se acostumbra en los sistemas parlamentarios, donde aquella propone permanentemente un modelo alternativo de gobierno al que hace el partido en ejercicio del mismo. Segundo, el regreso de la izquierda a su papel de oposición debe servir para hacer un replanteamiento de la izquierda en general, en torno a cuáles deben ser sus propósitos y cuáles los discursos y las banderas que debe defender en un mundo cada vez más globalizado y complejo, atendiendo a las necesidades propias de cada uno de sus países.

Este replanteamiento tiene que pasar por una necesaria revisión de las categorías tradicionales, que dividen el espectro político entre derecha e izquierda, generando un indispensable debate, no concluido, sobre lo que debe ser la izquierda hoy en día. En esta reflexión caben cuestiones como si aquella perdió su esencia al acudir al pragmatismo como práctica (por lo que también debe preguntarse sobre el rol de los mecanismos regionales de integración), si ha dejado de ser una genuina izquierda o si simplemente se ha adaptado a las condiciones geográficas e históricas que le correspondieron. Incluso, este trabajo de revisión debe llevar a interrogar si la dicotomía derecha-izquierda está llamada a sobrevivir. De

cualquier modo, el resultado de un proceso tal de evaluación ha de concluir que se debe persistir en la opción democrática, tanto por la proliferación de nuevos discursos y propuestas teóricas y programáticas, como por la movilización social, con rechazo absoluto a la posibilidad de un retorno del acudimiento a la violencia.

¿Quo vadis sinister?

Como ya se reseñó, para principios de 2018, la marea rosa se mantiene en cuatro países de la región, por lo que, lejos de predicarse su declive, en apariencia parece mantenerse. Sin embargo, como también se señaló, es posible que en los próximos años pierda sus posiciones de poder y regrese al terreno de la oposición, como ya ha sucedido en otras partes, aunque también puede volver a ser gobierno, gracias a la dinámica democrática de las elecciones periódicas. Por eso, la cuestión sobre hacia dónde va la izquierda latinoamericana, más que predecir su desaparición, apunta a su afianzamiento en el campo democrático, con la alternación que le permitirá en algunos casos ser gobierno y en otros ejercer la oposición. Empero, deberá reinventarse, para lo cual, según se propuso, la pérdida del poder puede ayudar a suscitar una profunda reflexión.

La anterior afirmación se sustenta en que en el subcontinente persisten los factores que una vez facilitaron el ascenso de la izquierda, representados en los problemas de desigualdad, pobreza, corrupción, exclusión, efectos adversos del capitalismo, desprestigio de las élites tradicionales, etc., por lo que una bandera de crítica, a lo que puede unirse el papel efectivo de un líder carismático, con prácticas populistas, puede facilitar nuevamente la llegada de una propuesta alternativa al poder. No obstante, lo preferible es que la izquierda pueda tornarse más organizada y estructurada, no sólo para un mejor ejercicio del gobierno cuando le corresponda, sino para lograr una verdadera transformación del sistema político, por la introducción de un elemento que sea distintivo. En este sentido, propuestas como las de Panizza, quien asegura que el papel fundamental de la izquierda en América Latina debe ser el afianzamiento y la extensión de la democracia, debería convertirse en un propósito permanente.

Aquí también valdría la pena recoger la visión de Fazio Vengoa, para quien es necesario un enfoque global para que la izquierda pueda proyectarse con miras al siglo XXI. Este autor sostiene que el mayor reto que experimenta este fenómeno es la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo, que sea diferente al dominante a nivel mundial, pero que a la vez tenga posibilidades de implementación fáctica. Con miras a tal fin propone el desapego por concepciones propias del socialismo, a las que considera “viejos referentes decimonónicos”²⁰⁰, para que en su lugar se apueste por una nueva forma de hacer política que no se aferre “a un rechazo sistemático del orden imperante” sino que más bien sea una izquierda “que comprenda la realidad del mundo actual con el fin de construir su propia

²⁰⁰ Fazio Vengoa, Hugo, “Izquierda, globalización y desarrollo. Una invitación para la América Latina del siglo XXI” En: *Cuadernos de Estudios Latinoamericanos* No. 3, Enero-Julio 2008, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, Bogotá, p. 15.

viabilidad y también la de aquellos colectivos que anhela representar”²⁰¹. Sólo así podrá mostrarse como una alternativa legítima de poder.

De acuerdo con Fazio Vengoa, es preciso avanzar hacia un cambio de paradigma, que sea consciente de los niveles de sofisticación y complejidad de las sociedades contemporáneas, dejando de lado análisis propios del contexto de la Guerra Fría, y se abandone definitivamente la idea de un desarrollo económico posible en el limitado espacio nacional. En su lugar, propone que la izquierda pueda adaptarse al flujo global de la economía, inscribiéndose por lo tanto, en nuevos referentes de acción de alcance global. Además, aboga por nuevas formas de integración que faciliten la defensa, en conjunto, de intereses compartidos gracias a la identidad de objetivos que tiene la mayoría de países de la región. Por eso concluye diciendo que “el futuro de la izquierda en la región depende de la manera como conjugue tres tipos de dinámicas: su adaptabilidad a las condiciones de la globalización, sus propuestas en torno a un desarrollo anhelado y posible y su capacidad para trascender las macrorregionalizaciones en el sentido de una verdadera integración”²⁰².

Por último, en relación con Colombia, cabe reiterar que aquí también persisten las causas estructurales que afectaron a los países de la región y permitieron en algunos de ellos el triunfo de la izquierda en unas elecciones presidenciales. Sin embargo, también permanecen las que impidieron hasta ahora un gobierno colombiano de izquierda: la guerrilla armada (en pleno proceso de implementación del acuerdo con las FARC y en negociaciones con el ELN), la derechización de una parte del país con importante tamaño electoral, el incremento del accionar paramilitar y el ataque permanente de los medios a las figuras y las propuestas políticas alternativas.

Es por eso que para reflexionar sobre las posibilidades de la izquierda colombiana en el futuro cercano hay que preguntarse por la suerte del actual proceso de desmovilización de las FARC; si este fracasará, por cuenta de sus propias dificultades internas o por obra de un regreso de la extrema derecha al poder en 2018; si habrá un retorno inevitable a la confrontación armada; si las disidencias tendrán más fuerza que las columnas efectivamente desmovilizadas. Así mismo, debe interrogarse sobre el papel que jugará el proceso con el ELN, en especial sobre sus posibilidades de éxito a pocos meses de la contienda electoral por la presidencia. También, como persistencia del fenómeno paramilitar, debe revisarse la operatividad de las BACRIM, y la coetánea incapacidad del Estado para combatir estas nuevas o recicladas formas de violencia, lo cual dibuja el panorama como una prolongación o el avance a una nueva fase del conflicto armado interno, en el que se habrán perdido por completo los idearios o motivaciones de la lucha y se entrará en un periodo de la guerra por la guerra, o su utilización para la protección de negocios ilegales en antiguas zonas de conflicto. Sin que desaparezcan los elementos que han impedido la consolidación de la izquierda democrática como opción real de poder, será muy difícil que esta tenga prontas genuinas posibilidades.

²⁰¹ *Ibíd.*

²⁰² *Ibíd.* p. 20.

Bibliografía

I. Libros

Arango, Rodolfo, *El concepto de derechos sociales fundamentales*, Legis, Bogotá, 2006.

Autores varios, *La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010*, INER, Universidad de Antioquia, Medellín, 2015.

Becerra Yañez, Gabriel, *La Nueva Izquierda Latinoamericana y la experiencia del Polo Democrático Alternativo*, Tesis de Maestría en Estudios Políticos e Internacionales, Universidad del Rosario, Bogotá, 2012.

Berl, Emmanuel, *Essais. Les temps, Les idées, Les hommes*, Juillard, París, 1986.

Bitar, Sergio, *Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro*, Pehuén, Santiago de Chile, 1995.

Castañeda, Jorge, *Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas*, Taurus, México, 2010.

Crabtree, John, *Alan García en el poder: Perú 1985-1990*, Ediciones Peisa, Lima 2005.

Dabène, Olivier, *Amérique Latine, les élections contre la démocratie?*, Sciences Po, Paris, 2007.

Echandía, Camilo; Sánchez, Fabio; Chacón, Mario, *Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002*. Análisis sobre la expansión geográfica de la FARC-EP, Documento CEDE 2005-33, junio de 2005.

Fukuyama, Francis, *El fin de la historia y el último hombre*, Plantea, Barcelona, 1998.

Gaitán, Jorge Eliécer, *Las ideas socialistas en Colombia*, Centro JEG, Bogotá, 1984.

Gardini, Gian Luca, *Latin American Foreign Policies. Between ideology and pragmatism*, Palgrave, Mcmillan, New York, 2011.

Gramsci, Antonio, *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971.

Gramsci, Antonio, *La formación de los intelectuales*, Grijalbo, México, 1967.

- Guevara, Ernesto, *El diario del Che en Bolivia*, Círculo de Lectores, Bogotá, 1985.
- Lozano, Carlos, *¿Guerra o paz en Colombia? Cincuenta años de un conflicto sin solución*, Editorial Ocean Sur, Bogotá, 2006.
- Luhmann, Niklas, *Teoría política en el Estado de Bienestar*, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
- Mariátegui, José Carlos, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Editora Amauta S.A., Lima, Perú, 1996.
- Marinakís, Andrés (ed.), *Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina: el peso de los factores económicos e institucionales*, OIT, Santiago de Chile, 2014.
- Medina Gallego, Carlos, *ELN: una historia contada a dos voces*, Rodríguez Quito editores, Bogotá, 1996.
- Molina, Gerardo, *Las ideas liberales en Colombia*, Tomo 3, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1977.
- Montaña Cuéllar, Diego, *Colombia social: el proceso de formación de las clases sociales en Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.
- Pécaut, Daniel, *La experiencia de la violencia: los desafíos del relato y la memoria*, La Carreta Editores, Medellín, 2013.
- Pizarro Leongómez, Eduardo, *Insurgencia sin revolución: la guerrilla colombiana en una perspectiva comparada*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1996.
- Rodríguez Garavito, César; Barrett Patrick; Chávez, Daniel (eds.), *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Norma, Bogotá, 2005.
- Romero, Mauricio, *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá, IEPRI-Planeta, 2003.
- Romero Ospina, Roberto, *Unión Patriótica: expedientes contra el olvido*, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá, 2001.
- Sánchez, Gonzalo, *Los bolcheviques del Líbano*, ECOE ediciones, Bogotá, 1981.
- Torres Giraldo, Ignacio, *Los inconformes: Historia de la rebeldía de las masas*, Cuarta edición, Universidad del Valle, Cali, 2009.
- Urrutia, Miguel, *Historia del sindicalismo en Colombia*, Editorial La Carreta, Medellín, 1976.

II. Artículos

Acuña Rodríguez, Olga Yanet, “Poder y memoria. Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”, en: *Revista Escuela de Historia*, Vol. 2, No. 2, Universidad de Salta, 2013.

Alegre, Pablo, “Los giros a la izquierda en el Cono Sur: gobiernos progresistas y alternativas de desarrollo en perspectiva comparada” en: Pablo Alegre (et al.), *Las izquierdas latinoamericanas. De la oposición al gobierno*, CLACSO, Buenos Aires. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/izquierdas.pdf> (consultado el 23 de marzo de 2015).

Altman, David, “Continuidades, cambios y desafíos democráticos en Chile (2006-2009)”, en: *Colombia Internacional* No. 64, Julio-Diciembre 2006, Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 12-33.

Álvaro, Miriam, “La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana”, en: *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Colloques, puesto en línea el 15 de mayo de 2007.

Arditi, Benjamín, “El giro a la izquierda en América Latina, ¿una política post-liberal?” en: *Ciencias Sociais Unisinos* 45(3), septiembre-diciembre 2009, pp. 232-246.

Arnson, Cynthia et al (compiladores), “Pobreza, desigualdad y la ‘nueva izquierda’ en América Latina” En: *Gobernabilidad Democrática y la ‘Nueva Izquierda’*, Woodrow Wilson Center Update on the Americas, FLACSO Chile, octubre 2009.

Basabe-Serrano, Santiago, “Rafael Correa: el antes y el después de la política ecuatoriana”, en: *Revista Iberoamericana*, Año XIII (2013) Nueva época No. 50, Junio de 2013, FLACSO, Quito, pp. 168-173.

Basset, Yann, “Aproximación a las nociones de populismo y gobernabilidad en los discursos contemporáneos sobre América Latina”, en: *Opera* 2006-2007, Universidad Externado de Colombia, 2006.

Bielschowsky, Ricardo, “Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo”, en: *Revista CEPAL* 97, abril 2009, p. 173-194.

Briceño Ruiz, José, “Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional en América Latina”, en: *Estudios Internacionales* 175, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2013, pp. 9-39.

Cameron, Maxwell A., “El giro a la izquierda frustrado en Perú: el caso de Ollanta Humala”, en: *Convergencia*, Revista de Ciencias Sociales, Núm. Esp. IA 2009, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 275-302.

Canamutto, Francisco, “¿Giro a la izquierda? Nuevos gobiernos en América Latina”, en: *RELACSO* No. 2, FLACSO México, marzo de 2009, pp. 1-21.

Castro, Jorge, *Política y economía en la Argentina de los 90*, Visiting Resource Professor Paper, Universidad de Texas, Austin, Agosto de 2001. Disponible en: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/castro.pdf>

Cruz Rodríguez, Edwin, Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto hegemónico, en: *Ciencia Política* No. 8, Julio-Diciembre 2009, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 83-114.

Cunha Filho, Clayton et al, *Un giro de la derecha a la izquierda? Un análisis del caso hondureño*, Ponencia presentada en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Buenos Aires, 28-30 de julio de 2010.

De la Torre, Carlos, "Populismo, ciudadanía y Estado de Derecho", En: Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (editores), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, FLACSO-Ecuador, Quito, 2008.

Delgado Selley, Orlando, "Respuestas ante la crisis: Estados Unidos, América Latina y sus gobiernos" en: *Revista Economía UNAM*, Vol. 7 No. 21, México, 2011, pp. 80-99.

Elías Caro, Jorge Enrique, "La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia. Una historia inconclusa", en: *Andes* No. 22, Universidad Nacional de Salta, 2011, pp. 1-28.

Fazio Vengoa, Hugo, "Izquierda, globalización y desarrollo. Una invitación para la América Latina del siglo XXI" En: *Cuadernos de Estudios Latinoamericanos* No. 3, Enero-Julio 2008, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, Bogotá, pp. 11-28.

Franco, Rolando, "Los paradigmas de la política social en América Latina", en: Carlos Arteaga y Silvia Solís (coordinadores), *La política social en la transición*, UNAM, México, 2001, pp. 9-22.

García, Alexandra, "De por qué odiamos a las FARC (y no tanto a los paras...)", en: *Las 2 orillas*, 11 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.las2orillas.co/de-por-que-odiamos-a-las-farc-y-no-tanto-a-los-paras/>

García Mateo, Rogelio, "¿Cuál es la filosofía de la izquierda?", en: *El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura* No. 352-353, Barcelona, 1980.

Gómez Leyton, Juan Carlos, "La elección presidencial de 1970 en Chile. (Una mirada desde la teoría económica de la democracia de Anthony Downs)", en: *Estudios 57*. Primavera-Verano, Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, México, D.F., 1999, pp. 47-77.

González Acanda, Jorge Luis, "¿Qué significa ser progresista en materia de pensamiento?" en: *El Catoblepas: Revista crítica del presente* No. 10, Madrid, Octubre de 2002.

Graíño Ferrer, Guillermo, “De la izquierda clásica a la nueva izquierda: la cuestión de Occidente”, en: *Cuadernos de Pensamiento Político* No. 23, Julio-Septiembre, 2009, FAES, Madrid, pp. 205-218.

Gratis, Sussane, *Reflexiones sobre izquierda y populismo en América Latina*, Colección de Estudios Internacionales, Número 6, año 2009, Universidad del País Vasco.

Gudynas, Eduardo, “10 tesis sobre el ‘divorcio’ entre izquierda y progresismo en América Latina” en: Diario Página Siete
www.paginasiete.bo/a/plantillas/5/includes/modulos/imprimir.asp?id=13367&tipp=noticia
 (Consultada el 10 de febrero de 2015).

Guillén, Arturo, “Crisis asiática y reestructuración de la economía mundial”, en: *Comercio exterior*, enero de 1999, México, pp. 16-23.

Jaramillo Uribe, Jaime, “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848”, en: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No. 8, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976, p. 5-18.

Jeifets, Lazar; Jeifets, Víctor, “El giro a la izquierda en América Latina y el nacimiento del nuevo bolivarianismo: las tradiciones de la Komintem y la actualidad)” en: *Revista CS*, núm. 4, Universidad ICESI, Cali, 2009, pp. 192-212.

Jiménez, Catalina, “El Estatuto de Seguridad, la aplicabilidad de la doctrina de la Seguridad Nacional en Colombia”, en: *Colección* No. 20, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2009, pp. 75-105.

Laclau, Ernesto, “El pueblo, lo popular y el populismo”, en: *Pensando el mundo desde Bolivia: I Ciclo de Seminarios Internacionales*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2010, pp. 141-154.

Lair, Eric, “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar”, en: Gonzalo Sánchez, Eric Lair (editores), *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, Norma, Bogotá, 2004, p. 105-144.

Londoño Rendón, Carlos Enrique, “La apertura económica en Colombia”, en: *Pensamiento Humanista* No. 4, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1998, pp. 39-51.

López, Mario, “¿Por qué los medios atacan a Petro?”, en: *Las 2 orillas*, 30 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.las2orillas.co/por-que-los-medios-atacan-petro/>

Maurizio, Roxana, *Instituciones laborales y desigualdad: el impacto distributivo del salario mínimo en América Latina en el nuevo milenio*, Universidad Nacional de General Sarmiento y CONICET, Argentina, 2013. Disponible en: http://www.social-globalization.uni-kassel.de/wp-content/uploads/2013/06/Instituciones-laborales-y-desigualdad_Maurizio.pdf

Mesa García, Esteban, “El Frente Nacional y su naturaleza antidemocrática”, en: *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, Vol. 39, No. 110, Enero-Junio 2009, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, pp. 157-184.

Meyenberg, Yolanda; Souki, Léa G., “Las campañas políticas de Fox en México y Lula da Silva en Brasil. El vaivén de los medios de comunicación”, en: *Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, vol. 2, núm. 1, primer semestre, 2006, pp. 293-319, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.

O’Donell, Guillermo, *Delegative Democracy*, University of Notre Dame, Kellogg Institute, working paper No. 172, March 1992.

Ornelas Delgado, Jaime; Aceves López, Liza, “La izquierda latinoamericana en el siglo XX y la utopía recuperada”, en: *Bajo el Volcán*, vol. 11, núm. 17, septiembre-febrero, 2011, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 273-295.

Oviedo, Álvaro, “Ignacio Torres Giraldo”, en: Castro-Gómez, Santiago y otros (eds.), *Pensamiento colombiano del siglo XX*, Tomo 1, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, pp. 225-252.

Panizza, Francisco, “Nuevas izquierdas y democracia en América Latina” en: *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, No. 85/86, Barcelona, mayo 2009, p. 75-88.

Petras, James, “Social Movements and Alliance-Building in Latin America”, en: *The Journal of Peasant Studies*, vol. 35, núm. 3, p. 476-528.

Pizarro Eduardo, "Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?", en *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*, Francisco Gutiérrez Sanín (Ed.), IEPRI, Editorial Norma, Bogotá, 2006, pp. 171-205.

Pizarro Leongómez, Eduardo, “Marquetalia: el mito fundacional de las FARC”, en: *UN Periódico* No. 57, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 9 de mayo de 2004.

Prieto, Carlos Andrés, “Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia”, *Policy paper 47*, Marzo de 2013, FESCOL; Bogotá, pp. 1-19.

Punín Larrea, M. Isabel; Gutiérrez Ríos, Benazir, “Cronología del Periodismo de investigación: Poder, abusos y medios en Ecuador”, en: *Comunicación y Periodismo. Cinco versiones de la historia*, Cuadernos Artesanos de Comunicación, 99, La Laguna (Tenerife), 2015, pp. 75-110.

Rivarola, Milda, “La rescisión del contrato social”, en: Carbone Locco y Lorena Soler (eds.), *Franquismo en Paraguay*, El 8° Loco, Buenos Aires, 2012, pp. 43-48.

Roberts, Kenneth, “El resurgimiento del populismo latinoamericano”, en: Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (editores), *El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina*, FLACSO-Ecuador, Quito, 2008, p. 55-73.

Rocha, José Luis, “La década de los años 80: revolución en Nicaragua, revolución en la caficultura nicaragüense-2, en: *Anuario de Estudios Centroamericanos* 29(1-2), Universidad de Costa Rica, San José, 2003, pp. 69-99.

Rother, Larry, “With New Chief, Uruguay Veers Left, in a Latin Pattern”, en: *The New York Times*, 1 de marzo de 2005. Disponible en: http://www.nytimes.com/2005/03/01/world/americas/with-new-chief-uruguay-veers-left-in-a-latin-pattern.html?_r=0

Santos, Manoel Leonardo et al, “El control presidencial de la agenda legislativa en América Latina”, en: *Revista de Ciencia Política*, Vol. 34, No. 3, Santiago, 2014, pp. 511-536.

Silva, Sergio, “La teología de la liberación”, en: *Teología y Vida*, Vol. L, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2009, pp. 93-116.

Suárez, Dulce, “La segunda transición democrática en Venezuela”, en: *Estudios sobre transiciones democráticas en América Latina*, Universidad de Oviedo, 1997, pp. 135-161.

Straka, Tomás, “Guiados por Bolívar: López Contreras, bolivarianismos y pretorianismo en Venezuela”, en: *Militares y poder en Venezuela*, Domingo Irwin et al (eds.), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2005, pp. 99-138.

Tanaka, Martín, “Del voluntarismo exacerbado al realismo sin ilusiones: el giro del APRA y de Alan García”, en: *Nueva Sociedad* 217 (Sep/Oct, 2008), Caracas, pp. 172-184.

Tokatlián, Juan Gabriel, “Neogolpismo”, en: *Página 12*, edición del 13 de julio de 2009. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/128159-41146-2009-07-13.html>

Valencia. León, y Observatorio del conflicto Armado, “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos”, en: *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Corporación Nuevo Arco Iris – ASDI. Bogotá, 2007, p. 11-58.

Varios, “El neoliberalismo en América Latina”, en: *Realidad* No. 54, Noviembre-Diciembre 1996, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, pp. 747-763.

III. Prensa

El País, “Polo investigará supuesto cartel de la contratación en Bogotá, 21 de octubre de 2010. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/colombia/polo-investigara-supuesto-cartel-de-contratacion-en-bogota.html>

La Silla Vacía, El círculo de Uribe: cada vez más condenado, 16 de abril de 2015. Disponible en: <http://lasillavacia.com/historia/el-circulo-de-uribe-cada-vez-mas-condenado-49957>

Semana, Álvaro Uribe y el terrorismo, 4 de marzo de 2011. Disponible en: <https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-terrorismo/236313-3>

Semana, “Casi 500 investigados por parapolítica en los últimos cinco años”, 25 de octubre de 2012. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/casi-500-investigados-parapolitica-ultimos-cinco-anos/266865-3>

Semana, *El informe que indica que la parapolítica no es cosa del pasado*, publicado el 17 de abril de 2016. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investigaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010>

Semana, Esto no huele bien: el caso Chiquita, 31 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/esto-no-huele-bien-caso-chiquita/255731-3>

IV. Informes de organizaciones internacionales, instituciones públicas y ONG

Centro Nacional de Memoria Histórica, *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, Bogotá, 2013.

CEPAL, *Panorama social de América Latina 2015*, Documento informativo. Disponible en: <http://www.cpalsocial.org/documentos/262.pdf>

CEPAL, *Estudio económico de América Latina y el Caribe*, Santiago, 2015. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf

Comisión de la Verdad y Reconciliación, *Informe Final*, Tomo I, Capítulo I, Los actores armados, Lima, 2003.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 5 del 12 de marzo de 1997.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas. Conclusiones y recomendaciones. Disponible en:

http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 026/2018.

Fiscalía General de la Nación, Gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Disponible en: <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/unidad-de-justicia-y-paz/>

Fundación Paz y Reconciliación, *Líderes sociales asesinados en Colombia en 2017*. Disponible en:

www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2017/

Grupo de Memoria Histórica, *Bojayá: la guerra sin límites*, Taurus, Bogotá, 2010.

Human Rights Watch, *Venezuela: Examen Periódico Universal*, Octubre de 2016.
Disponible en:

<https://www.hrw.org/es/news/2016/10/31/venezuela-examen-periodico-universal>

Ministerio de Defensa Nacional, Balance de operaciones a 15 de diciembre de 2012.

Ministerio de Defensa Nacional, *Historia del gasto en defensa*. Disponible en:

<https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf>

Organización de Estados Americanos, Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), Febrero de 2007.

Programa Somos Defensores, *Contra las cuerdas*, Informe Anual 2016 Sistema de Información sobre agresiones contra Defensores de DDHH en Colombia, Bogotá. 2017.

República del Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales, *Resultados elecciones 2011*.
Disponible en:

<https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/2davuelta/>

República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral. Elecciones presidenciales 2013, Resultados. Disponible en:

http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html?

Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, *Memoria Especial Elecciones 2009*. Disponible en:

<http://www.tse.gob.sv/documentos/MEMORIAS%20ESPECIAL%20DE%20LABORES%20TSE/Memoria2009.pdf>

Verdad Abierta, *Estadísticas Defensores de derechos humanos, sindicalistas, docentes y periodistas*. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/cifras/3831-estadisticas-de-sindicatos-docentes-y-%20periodistas->

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, *Resultados electorales 2005-2009: Primer ciclo de gobierno indígena en Bolivia*.